

## CAPÍTULO

## INFORME ESTADO DE LA NACIÓN

## 3

## BALANCE

## Oportunidades, estabilidad y solvencia económica

ÍNDICE	HALLAZGOS RELEVANTES
<b>Hallazgos relevantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La economía costarricense mantiene buen ritmo de crecimiento al compararse con los países de ALC y la OCDE.</li> </ul>
<b>Valoración general</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplimiento del rango meta de inflación se sigue postergando y promueve intenso debate sobre la política monetaria.</li> </ul>
<b>Valoración general del Informe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un tipo de cambio apreciado se asocia con pérdidas en competitividad de los sectores exportadores del país.</li> </ul>
<b>Estado de la Nación 2024</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se mantiene la estabilidad fiscal del país, pero hay señales de debilitamiento con ingresos que se desaceleran y gastos crecientes que afectan el balance primario.</li> </ul>
<b>Aspiraciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El servicio a la deuda sigue estrujando la inversión social y de capital en áreas estratégicas del desarrollo humano como salud, educación, seguridad e infraestructura.</li> </ul>
<b>Introducción</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La insuficiente e ineficiente inversión en infraestructura de transportes en el país se traduce en cuantiosas pérdidas y obstáculos al crecimiento económico.</li> </ul>
<b>Continúa senda de crecimiento económico poco inclusivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La brecha entre la productividad laboral y los salarios, así como entre el PIB y el ingreso nacional disponible se amplía progresivamente. Esto significa que una cantidad cada vez menor de la producción nacional permanece en manos de los hogares costarricenses.</li> </ul>
<b>Coyuntura internacional crea nuevas amenazas al principal motor de la economía</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los rezagos en los sectores agropecuario, construcción y turismo agudizan la dualidad productiva de la economía costarricense.</li> </ul>
<b>Estabilidad de precios y cambiaria crea intenso debate sobre la política monetaria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El sector externo sigue siendo el principal motor de la economía costarricense, pero muestra señales de desaceleración.</li> </ul>
<b>Estabilidad fiscal continúa desatendiendo el financiamiento del desarrollo humano y aun así se debilita</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La alta dependencia del mercado estadounidense y cambios en su política comercial ponen en riesgo la demanda externa, cimiento del crecimiento económico costarricense.</li> </ul>
<b>Desatención de condiciones habilitadoras del crecimiento inhibe potencial y profundiza brechas territoriales y productivas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los cambios en la política comercial de la administración Trump se asocian con una disminución en las exportaciones y la atracción de inversión directa.</li> </ul>
<b>Desatención de condiciones habilitadoras del crecimiento inhibe potencial y profundiza brechas territoriales y productivas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los incrementos en los riesgos externos se dan en un contexto de desaceleración económica y repercute en estimaciones de mayor desaceleración durante el bienio 2025-2026.</li> </ul>
<b>Desatención de condiciones habilitadoras del crecimiento inhibe potencial y profundiza brechas territoriales y productivas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La inflación se mantiene en valores cercanos a cero y se refleja en mejoras en el poder adquisitivo de los hogares después de varios años de desmejora.</li> </ul>
<b>Desatención de condiciones habilitadoras del crecimiento inhibe potencial y profundiza brechas territoriales y productivas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Treinta y ocho cantones registran tasas de homicidios epidémicas y concentran el 62% del PIB, lo cual compromete la economía nacional.</li> <li>• Los homicidios se concentran en las costas (con fuerte crecimiento en el litoral Pacífico) y obstaculizan el desarrollo de la actividad industrial.</li> <li>• Cantones del corredor Norte-Caribe-Sur del país presentan mayor exposición y vulnerabilidad económica ante eventos climáticos extremos, especialmente aquellos en los que la agricultura y el turismo tienen fuerte presencia.</li> </ul>

## Cuadro 3.1

Resumen de indicadores económicos. 2018-2024<sup>a/</sup>

Indicador	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Promedio 2014-2024
<b>Oportunidades</b>							
Crecimiento del PIB real por persona (%)	1,6	-4,8	7,4	4,0	4,5	3,7	2,6
Crecimiento real del ingreso nacional disponible por persona (%)	1,3	-4,5	5,5	0,8	5,1	3,7	2,3
Formación bruta de capital/PIB (%)	16,1	16,3	16,7	16,1	16,5	16,3	17,2
Crédito al sector privado (% PIB)	41,9	44,5	42,2	39,2	37,6	39,4	42,5
Crecimiento de las exportaciones de bienes (dólares corrientes) <sup>b/</sup>	0,8	2,1	23,7	9,4	15,5	9,6	8,0
Tasa de desempleo abierto (%) <sup>c/</sup>	12,4	20,0	13,7	11,7	7,3	6,9	11,1
Índice de salarios mínimos reales (enero 1995=100) <sup>d/</sup>	128,6	130,9	129,3	122,8	131,2	134,3	127,8
Índice de términos de intercambio (2017=100)	99,0	99,8	94,9	88,2	91,9	93,3	96,1
<b>Estabilidad</b>							
Inflación (IPC 2020=100) (%)	1,52	0,89	3,3	7,9	-1,8	0,8	2,0
Déficit comercial/PIB (%) <sup>e/</sup>	7,1	3,8	6,2	8,2	5,0	3,9	7,5
Déficit de cuenta corriente/PIB (%) <sup>f/</sup>	1,2	1,0	3,2	3,3	1,4	1,3	2,6
Tipo de cambio efectivo real multilateral (1997=100) <sup>g/</sup>	85,8	85,0	93,5	93,1	80,5	77,2	84,3
Resultado financiero del Gobierno Central/PIB (%) <sup>h/</sup>	-6,7	-8,0	-5,0	-2,5	-3,3	-3,8	-5,2
<b>Solvencia</b>							
Ahorro nacional neto/PIB (%)	9,0	9,5	9,2	8,4	9,3	9,9	9,2
Reservas internacionales netas como % del PIB <sup>i/</sup>	13,84	11,58	10,65	12,35	15,28	14,86	13,00
Deuda interna del Gobierno Central/PIB (%) <sup>j/</sup>	43,8	50,8	50,8	46,9	45,1	43,8	41,1
Deuda pública externa/PIB (%) <sup>k/</sup>	12,6	16,2	16,8	16,1	16,0	15,9	13,0
Gasto público en educación/PIB (%) <sup>l/</sup>	7,0	6,9	6,4	5,6	5,5	5,5	6,6

a/ Estimaciones con datos de Cuentas Nacionales del 12 y 13 de agosto 2024.

b/ Exportaciones FOB. Incluye el valor bruto de las exportaciones de los regímenes de zona franca y perfeccionamiento activo (admisión temporal). No incluye ajuste de balanza de pagos.

c/ Los datos de empleo corresponden a la cifra para el cuarto trimestre de la Encuesta Continua de empleo.

d/ Promedio del año.

e/ Este indicador se estima a partir de los datos de balance comercial acumulado. No incluye ajuste de balanza de pagos.

f/ Utiliza Manual de Balanza de Pagos 6.

g/ El año base es 1997. Para el cálculo de este indicador se utiliza el índice de ponderadores móviles que se ajustan conforme evoluciona el patrón de comercio bilateral de la economía. Además, se utiliza el IPC para la medición de los precios de los socios comerciales.

h/ El promedio del déficit financiero se estima a partir del 2006, dado cambios metodológicos en la base del cálculo de ingresos y gastos fiscales.

i/ Reservas netas del BCCR a diciembre de cada año. Las importaciones excluyen las materias primas de los regímenes de perfeccionamiento activo y zonas francas.

j/ Incluye las amortizaciones de las obligaciones estipuladas en el artículo 175 de la Ley 7558.

k/ Denominada en moneda nacional. La información sobre deuda pública externa fue proporcionada por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, por lo que las cifras pueden diferir de las publicadas en informes anteriores.

l/ El dato, tomado de la STAP del Ministerio de Hacienda son los datos preliminares."

## Valoración general

En el 2024 y los primeros meses del 2025, la economía costarricense mantuvo un buen ritmo de crecimiento, estabilidad macroeconómica y solvencia fiscal. Sin embargo, persiste el reto de propiciar que esas oportunidades logren un desarrollo humano inclusivo y sostenido para todos los grupos y sectores de la economía. A esto se suma que el principal motor de la economía enfrenta amenazas ante los cambios en la política comercial de los Estados Unidos, la estabilidad fiscal sacrifica la inversión en áreas estratégicas para el desarrollo y la epidemia de homicidios afecta la actividad económica sectorial y territorial. En síntesis, la estabilidad macroeconómica y la solvencia fiscal son necesarias, pero insuficientes para mejorar las oportunidades de toda la población.

El crecimiento económico del país durante el 2024 y el primer semestre del 2025 destaca en América Latina y el Caribe y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). No obstante, como se ha venido advirtiendo en este *Informe*, persisten rezagos que comprometen una estrategia de desarrollo inclusiva. Entre estos sobresalen la desconexión entre el dinamismo de la producción y el empleo, la creciente diferencia entre la productividad laboral y los salarios y entre lo producido y lo que queda en el país. Los sectores agrícola, turismo y construcción están rezagados y sin una perspectiva alentadora en los próximos meses, lo cual compromete el sustento de miles de hogares costarricenses.

La alta dependencia del mercado estadounidense y su cambiante política comercial plantean un riesgo estratégico al sector externo, principal motor de la economía. La inversión extranjera y las exportaciones, particularmente en las zonas francas y en servicios, muestran señales de desaceleración y sus proyecciones para el próximo

año y medio mantienen esta tendencia. A ello se suma que, la incertidumbre alcanza su nivel máximo en los últimos 35 años, lo cual genera un vaivén en las proyecciones de la economía mundial, con una clara tendencia a la desaceleración que genera mayor presión al sector externo. El país afronta el reto de revisar su estrategia comercial en esta nueva realidad geopolítica que pone a prueba la estabilidad económica.

La economía costarricense acumula veintiocho meses con una inflación cercana a cero, lo que genera un intenso debate público. Por un lado, los hogares mantienen la percepción de que “el dinero no alcanza”, lo cual es comprensible, ya que a la reciente mejora en el poder adquisitivo le anteceden cinco años de pérdidas. Por otro lado, persiste el debate sobre el incumplimiento de la meta de inflación y la posibilidad de que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) reduzca la tasa de política monetaria para alcanzar el rango de meta. La apreciación del colón también ha sido un tema de discusión: se alerta sobre la pérdida de competitividad del sector externo y se demandan medidas de política monetaria para contrarrestar esta situación.

Las finanzas públicas del país mantienen la senda de solvencia tras la reforma fiscal, aprobada en el año 2018. No obstante, como se ha alertado repetidas veces en este *Informe*, el servicio de la deuda y las decisiones políticas siguen estrujando la inversión social y de capital, las cuales son clave para promover un crecimiento y desarrollo sostenidos. En particular, la menor inversión en salud, educación, seguridad e infraestructura, ponen en riesgo el estilo de desarrollo y el cumplimiento del contrato social costarricense.

A pesar de que la reforma fiscal ha significado una mejora significativa en las finanzas públicas, empieza a mostrar señales de debilitamiento. El superávit primario acumula tres años en descenso, con un 2024 en el que disminuyen los ingresos y aumentan los gastos

primarios. El análisis prospectivo muestra que este debilitamiento se mantendrá en el próximo quinquenio y que subsecuentes desmejoras del déficit primario podrían afectar la posición de la deuda.

El país desatiende varias condiciones habilitadoras del crecimiento y el desarrollo económico. La inversión en infraestructura de transportes es insuficiente para cubrir la brecha persistente que inhibe la competitividad y dinamismo económico. Más allá de la escasa inversión, la gestión de proyectos es ineficiente, lo que genera atrasos, sobrecostos y fallas significativas, que se traducen en un alto costo social.

La crisis de inseguridad sigue amenazando el dinamismo de la economía. Hay 38 cantones que concentran el 62% del PIB que presentan tasas de homicidios epidémicas (superiores a 10 casos por 100.000 habitantes). Estos se concentran en las costas y sufren una mayor escalada en el litoral pacífico, obstaculizan la actividad industrial y amplían las brechas territoriales.

Los eventos climáticos extremos también acarrear altos costos para el país, sin que se estén tomando medidas oportunas para hacer frente a esta amenaza. Los cantones del corredor Norte-Caribe-Sur y los sectores agricultura y turismo son los más expuestos y vulnerables a eventos climáticos extremos, lo cual profundiza brechas sectoriales y territoriales, que son una deuda histórica del país.

Los resultados de este Capítulo ponen en evidencia que el estilo de crecimiento y desarrollo económico costarricense está en una fase riesgosa, en la que es clave un adecuado manejo de la política comercial, monetaria y fiscal. Es importante atender los temas prioritarios antes mencionados, los cuales obstaculizan el crecimiento económico y el desarrollo humano inclusivos y sostenidos.

## Valoración del Informe Estado de la Nación 2024

El desempeño económico del país en el 2024 confirmó la persistencia de un entorno caracterizado por fragilidades estructurales y tensiones coyunturales. Si bien se registraron avances en algunos indicadores de corto plazo, estos no pudieron revertir las debilidades de fondo que limitan la capacidad de crecimiento sostenido. La combinación de un ritmo moderado de expansión, la dualidad entre los motores de la actividad económica y la distribución desigual de beneficios volvió a evidenciar la dificultad para generar un dinamismo más inclusivo y equilibrado.

En este contexto, el mercado laboral mantuvo rezagos importantes. La creación de empleo fue insuficiente con respecto al tamaño de la población en edad de trabajar, lo cual se tradujo en tasas de ocupación

estancadas y en una absorción desigual entre sectores. Aunque ciertos nichos vinculados a la economía más integrada al comercio exterior mostraron un mejor desempeño, la mayoría de las personas trabajadoras se enfrentó a condiciones laborales de baja calidad y a ingresos que no lograron mejorar significativamente.

Las tensiones en las finanzas públicas continuaron siendo un factor central de vulnerabilidad. A pesar de los avances en la gestión fiscal, el alto peso del endeudamiento, junto con las restricciones para aumentar el gasto en áreas sociales y de infraestructura, limitó la capacidad del Estado para responder a las demandas del desarrollo. Esta situación expuso nuevamente la necesidad de acuerdos políticos amplios y sostenidos que garanticen la sostenibilidad de las cuentas públicas y su ali-

neamiento con los objetivos de crecimiento inclusivo. La respuesta de la política pública fue insuficiente en un momento en el que el país enfrentaba una crisis de inseguridad ciudadana, lo cual deterioró aún más las expectativas de inversión y producción, especialmente para el sector comercial.

Por último, el desempeño económico del 2024 dejó claro que los desafíos de largo plazo permanecen. El país sigue enfrentando la tarea de diversificar y fortalecer su base productiva, mejorar la calidad del empleo y asegurar un manejo responsable de las finanzas públicas. En suma, los resultados de este período ratificaron la fragilidad del crecimiento y la urgencia de avanzar en transformaciones estructurales que permitan encauzar la economía hacia un desarrollo sostenido e inclusivo.

## Aspiraciones

### Crecimiento económico sostenible

Crecimiento económico sostenible, con efectos favorables en la generación de nuevos empleos “decentes”<sup>1</sup>, y en los ingresos y las oportunidades de los distintos grupos sociales, con base en la formación profesional y técnica de los recursos humanos, los niveles crecientes de competitividad “auténtica”<sup>2</sup> y el uso racional de los recursos naturales.

### Inflación reducida y menor de dos dígitos en el mediano plazo

Inflación reducida y menor de dos dígitos en el mediano plazo, fundamentada, en parte, en un déficit fiscal controlado<sup>3</sup>, pero no por causa de inversiones básicas en servicios sociales y en infraestructura.

### Estabilidad del sector externo

Estabilidad del sector externo sobre la base de un déficit “razonable” de la cuenta corriente, y de reservas internacionales que financien, en forma satisfactoria, las necesidades de importación del país.

### Generación de ahorro nacional sostenido

Generación de ahorro nacional sostenido que contribuya, de manera importante, al financiamiento de un proceso sostenible de inversión en el país<sup>4</sup>.

### Nivel prudente de deuda pública

Deudas externa e interna del Gobierno que no pongan en peligro las inversiones del Estado en infraestructura y servicios básicos para la población.

### Distribución equitativa de las libertades, oportunidades y capacidades de todas y todos los ciudadanos

Distribución más equitativa de las libertades, oportunidades y capacidades de todas y todos los ciudadanos, con especial consideración de los ubicados en los quintiles más bajos de ingreso; crecientes remuneraciones reales del sector laboral, a fin de permitir un acceso y un uso más equitativos del ingreso y de la propiedad de las fuentes de riqueza. Además, un proceso económico que propicie menores desigualdades entre regiones, sin discriminaciones étnicas, de género, religión o edad.

### Políticas económicas articuladas, sustentables y efectivas

Un Estado con responsabilidades claramente definidas en cuanto a la articulación de políticas económicas sectoriales, de protección social, ambientales y energéticas, que sean sustentables en el tiempo; dispuesto a analizar y enfrentar las condiciones económicas externas, con una disciplina de manejo macroeconómico responsable y con capacidad de ejercer controles efectivos sobre los servicios concesionados por el Estado.

### Estrategias de desarrollo incluyentes

Estrategias de desarrollo y políticas económicas elaboradas de manera incluyente y equitativa, de modo que representen los intereses y necesidades de todos los sectores sociales y regiones del país, y que incluyan la prospección *ex ante*, realizada en procesos participativos ciudadanos, sobre los efectos distributivos de cada una de las políticas.

## CAPÍTULO

## INFORME ESTADO DE LA NACIÓN

## 3

## BALANCE

## Oportunidades, estabilidad y solvencia económica

**Introducción**

Este capítulo valora el desempeño de la economía costarricense en relación con las oportunidades, la estabilidad y la solvencia económica durante el año 2024 y la primera parte del 2025. El análisis se efectúa con una visión de mediano y largo plazo, fundamentada en la perspectiva del desarrollo humano sostenible. Para cumplir con este propósito, se analizan los indicadores económicos, sociales e institucionales que permiten determinar si se ha avanzado o retrocedido en el logro de las aspiraciones nacionales en este campo.

Las oportunidades son fruto del crecimiento económico sostenido que, a su vez, depende de los procesos de inversión pública y privada, la formación de recursos humanos, la mejora en la productividad y un uso racional de los recursos naturales. En este sentido, las oportunidades reflejan el acceso de la población a bienes y servicios de calidad como resultado de la generación de empleo decente y de mayores ingresos para distintos grupos sociales en todas las regiones del país, lo cual también implica mayor equidad en su distribución.

La estabilidad consiste en mantener reducidos los desequilibrios internos - déficit fiscal e inflación - y externos - balanza de pagos -, de manera que se posibilite el crecimiento económico sin comprometer el futuro de las nuevas generaciones. Esto se logra con solvencia, es decir, con una sociedad capaz de atender

adecuadamente sus gastos y realizar inversiones físicas y sociales.

El dinamismo económico, el mercado laboral, la economía interna, el sector externo (exportaciones e importaciones), las finanzas públicas y las políticas monetaria y cambiaria se utilizan como ejes de análisis para valorar los aspectos mencionados. Este capítulo no se limita a dar seguimiento a los indicadores coyunturales, sino que enfatiza cómo la evolución económica y su estructura inciden en los avances o retrocesos del desarrollo humano, en particular en el cumplimiento de las aspiraciones definidas en el *Informe Estado de la Nación* en este campo.

Este capítulo plantea cinco mensajes o ideas principales, a los cuales se dedica una sección. La primera expone cómo la producción nacional sigue presentando un buen ritmo de crecimiento, pero poco inclusivo. La segunda sección analiza las amenazas que afronta el sector externo como motor de la economía, debido al panorama de incertidumbre que ocasionan los cambios en la política comercial de los Estados Unidos, principal socio comercial del país. La tercera sección se enfoca en la política monetaria costarricense. La estabilidad de precios en inflaciones cercanas a cero y cambiaria con un colón que se ha apreciado, da cuenta del intenso debate acerca de la afectación de la política monetaria sobre la competitividad del país. La cuarta sección aborda el tema de la solvencia fiscal del país. Aunque estable, el *Informe* subraya que se sigue desatendiendo el financiamiento

del desarrollo humano y, además, sus resultados se han debilitado recientemente. La última sección se dedica al examen de las condiciones habilitadoras del crecimiento como la inversión en infraestructura, seguridad y preparación ante el cambio climático. Los rezagos acumulados y la falta de adaptación en estos ámbitos comprometen el dinamismo económico y profundizan brechas territoriales y productivas.

**Continúa senda de crecimiento económico poco inclusivo**

La economía costarricense ha mantenido un ritmo de crecimiento relativamente alto y estable en el mediano plazo e incluso mostró una relativa resiliencia ante la pandemia del covid-19. Sin embargo, esta edición de nuevo documenta problemas no resueltos que impiden que ese dinamismo dé paso a un crecimiento económico inclusivo y sostenible. Claramente, pese a las advertencias que se han venido realizando, el país mantiene el reto de impulsar políticas productivas que conduzcan a un dinamismo económico acompañado de más empleos decentes y de mayores ingresos para todos los grupos de población y sectores económicos.

**Buen dinamismo económico en perspectiva comparada**

En años recientes, la economía costarricense ha presentado un buen ritmo de crecimiento en relación con América

Latina y los países de la OCDE. Este dinamismo ha sido destacado por organismos internacionales en sus análisis económicos sobre el país (FMI, 2025d; OCDE, 2025). En el 2024, la producción nacional creció al 4,3%, mientras que la media de los países latinoamericanos fue del 2,3%. Solo Belice, República Dominicana, y Antigua y Barbuda muestran un crecimiento superior al de Costa Rica en este año, mientras que varias economías registran una desaceleración, se destaca el caso de Haití con -4,16 (gráfico 3.1). La economía costarricense también muestra menor desaceleración que el resto de la región tras el choque pandémico y un efecto rebote similar. En el mediano plazo, la dinámica de la economía costarricense en promedio ha sido significativamente mejor a la del resto de la región.

Cuando se compara la evolución de la producción nacional con la de los países que conforman la OCDE, organización de la cual Costa Rica forma parte desde mayo del 2021, la economía nacional fue la que más creció en el 2024. Su dinamismo estuvo muy por encima del promedio de un 1,8% de las demás economías. Incluso seis de las 38 naciones socias de la OCDE registraron una desaceleración, siendo Austria la del mayor decrecimiento (-1,2%). En el 2025, Costa Rica experimenta una desaceleración económica similar a la del resto de países de la OCDE.

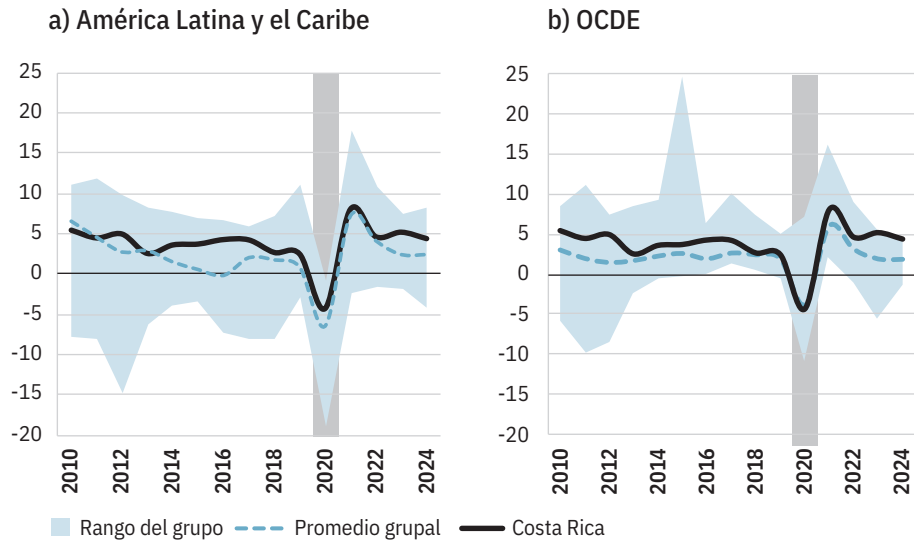
Al analizar el último quinquenio, es claro que, tras el choque pandémico, la recuperación y niveles de crecimiento postpandemia del país fueron mejores. A mediano plazo, el dinamismo de la economía costarricense también ha estado por encima de la media de países que integran esta organización.

### Persiste desconexión entre el crecimiento económico, la productividad y el empleo

Ediciones previas del *Informe* han advertido que un buen dinamismo de la producción no ha venido acompañado de mayor desarrollo humano. Se presentan una serie de factores inconsistentes con un crecimiento económico sostenido e inclusivo. Uno de los factores que

Gráfico 3.1

### Crecimiento anual del PIB en Costa Rica y grupo de países de referencia (porcentaje)



Nota: El área sombreada resalta el rango de crecimiento anual del PIB observado entre los países que integran cada grupo de referencia, desde el valor mínimo hasta el máximo en cada año. La columna vertical sombreada representa el año de la pandemia del Covid-19. El periodo anterior se considera como el mediano plazo, y el posterior refleja la etapa postpandemia.  
Fuente: Hidalgo, 2025 con datos del Banco Mundial.

impiden la traducción del crecimiento en desarrollo es el desacople entre el dinamismo económico y el empleo.

Mientras el empleo nacional cierra el segundo trimestre del 2025 con un nivel inferior al prepandemia, la producción experimenta un crecimiento del 22,9% en ese periodo (gráfico 3.2). Desde el cuarto trimestre del 2020, el empleo ha mostrado un dinamismo significativamente inferior al de la producción y la brecha en su crecimiento se ha ensanchado en el último quinquenio.

Otra manera de examinar la correspondencia entre el crecimiento de la producción y el empleo es el análisis conjunto de los tres principales indicadores del mercado laboral: la tasa de participación, la de ocupación y la de desempleo. Aunque en el segundo trimestre del 2025 el país presenta una tasa de desempleo del 7%, una de las más bajas en los últimos años; las tasas de participación del 54,7% y de ocupación del 50,7% son menores a las del período postpandemia y están

muy por debajo de las del mediano plazo.

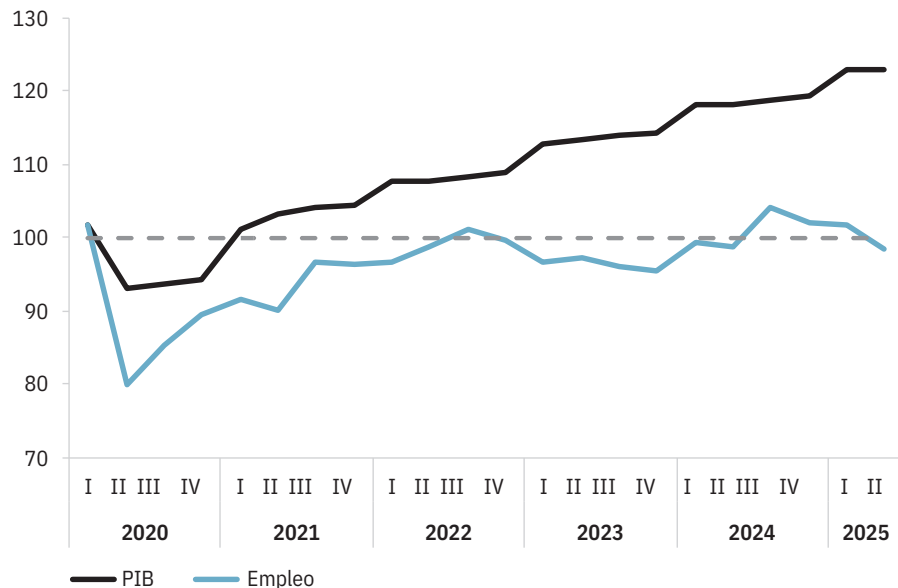
Estos resultados no son congruentes con los de crecimiento económico, pues es de esperar que una economía que crezca a buen ritmo genere más oportunidades laborales para su población, lo cual debería reflejarse en mayores tasas de participación y ocupación y no solo en una menor tasa de desempleo.

La asimetría entre el crecimiento del empleo y su productividad en relación con el aumento en los salarios es otro factor que obstaculiza traducir el dinamismo económico en desarrollo humano. Al respecto, Monge-González et al. (2024) y Martínez y Monge-González (2025) estudiaron la evolución de la productividad y los salarios. En principio, las mejoras en la productividad debieran convertirse en mejores ingresos laborales.

La investigación realizada para el caso de empresas inscritas formalmente en el país en el período 2006-2022, a partir del Repositorio de Variables Económicas (Revec) del BCCR (gráfico 3.3), constató

Gráfico 3.2

**Evolución anual del índice<sup>a/</sup> del PIB<sup>b/</sup> y empleo, por trimestre**  
(base 2019 = 100)



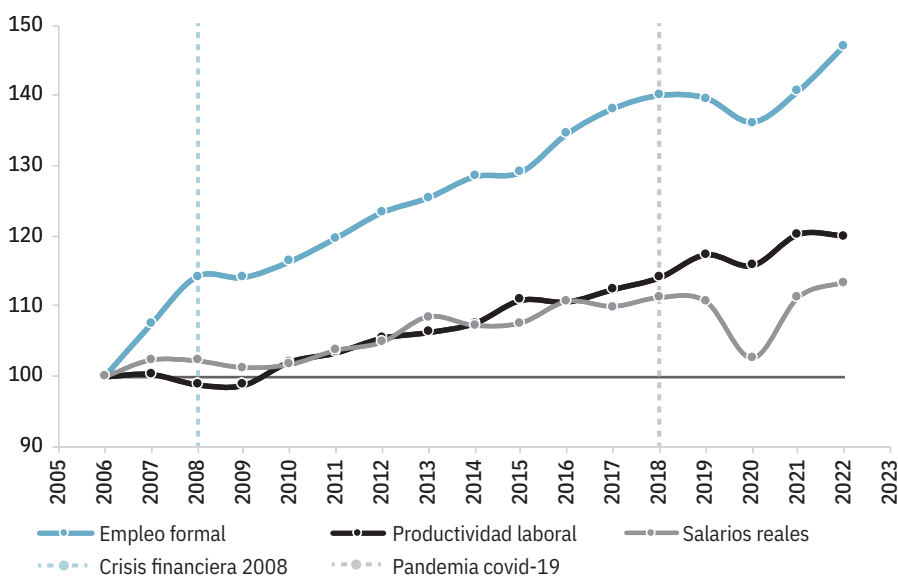
a/ Un valor de 100 en el índice refleja que se mantienen los niveles reportados en el mismo trimestre del 2019, si está por debajo de 100 indica niveles menores a los que se tenía antes de la pandemia y valores por encima reflejan la situación contraria.

b/ Los datos trimestrales del PIB son de la serie tendencia ciclo.

Fuente: Meneses y Segura, 2025 con datos de la ECE del INEC y BCCR.

Gráfico 3.3

**Índice de la productividad laboral, de la mediana de los salarios reales y del empleo formal**  
(base 2006 = 100)



Fuente: Martínez y Monge-González, 2025, con datos del BCCR.

que el país contaba con un 47% más de empleos formales en el 2022 que en el 2006, con un ritmo de crecimiento sostenido en todo el período, a excepción del 2020; el año de mayor impacto de la pandemia.

La productividad laboral real muestra un patrón de crecimiento similar solo que, con menor ritmo, al cerrar el 2022 con un crecimiento del 20%. En cuanto a los salarios reales, su dinámica ha sido más volátil y menos acelerada, lo cual se refleja en un crecimiento en el período 2006-2022 del 13%.

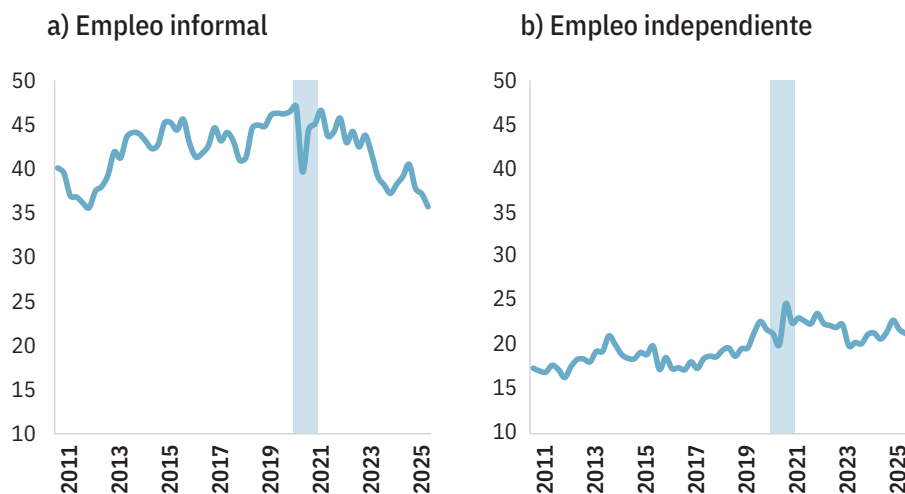
Destaca, en particular, que el crecimiento de lo producido por las personas trabajadoras entre el 2006 y el 2022 es siete puntos porcentuales mayor que el aumento en su poder adquisitivo. Esta brecha, que se ha venido ensanchando desde el 2016, en especial tras el choque pandémico, genera preocupación sobre la medida en que una mayor producción nacional significa más oportunidades de acceso a bienes y servicios para la población. Debe recordarse que el análisis se centra en el sector formal de la economía, caracterizado por mayores niveles de productividad y crecimiento en los salarios reales y donde se podría haber esperado que esta brecha sea menor.

Otro aspecto señalando en ediciones previas del *Informe*, es la persistencia de rezagos estructurales del mercado laboral costarricense, los cuales se traducen en una alta volatilidad en la generación de empleo, una tendencia inconsistente con un crecimiento sostenido (Meneses y Segura, 2025). Entre estos rezagos destacan la alta informalidad y el trabajo independiente que, al segundo trimestre del 2025, representan respectivamente el 36% y el 21% de las personas ocupadas (gráfico 3.4).

En el caso de la informalidad, a pesar de que su participación actual disminuye con respecto a los períodos 2021-2023 y 2010-2019 y que está por debajo del promedio latinoamericano, aún se encuentra muy lejos de las cifras que muestran los países de la OCDE. Como muestran Meneses y Segura (2025), entre otras problemáticas, el trabajo informal e independiente presentan mayor sensibilidad a los choques económicos y sus niveles de

Gráfico 3.4

### Evolución del empleo informal e independiente en la ocupación total (porcentaje)



Nota: El área vertical sombreada resalta el periodo de la pandemia del Covid-19. El periodo anterior se considera como el mediano plazo, y el posterior refleja la etapa postpandemia.

Fuente: Hidalgo, 2025 con datos de INEC.

remuneración deberían aumentar 2,2 y 2 veces, respectivamente, para igualar a las del empleo formal y asalariado.

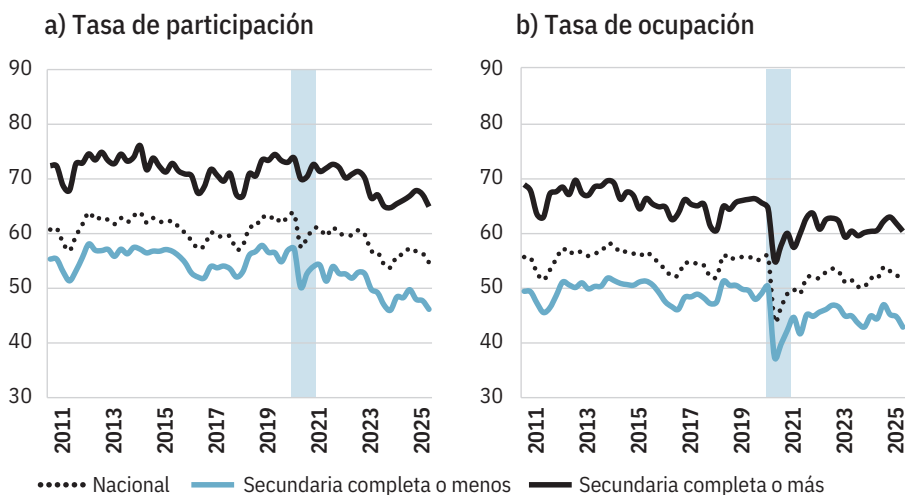
Las menores oportunidades laborales para las mujeres, las personas jóvenes y con menor nivel de cualificación son parte del lastre que limita el potencial del crecimiento económico para generar más desarrollo humano. Para el segundo semestre del 2025, las mujeres cuentan con una participación laboral y ocupación 23 y 22 puntos porcentuales menor que la de los hombres. Esta es una realidad en la que, aunque se ha tenido avances al compararse con la situación imperante a inicios de siglo, sigue representando una brecha muy significativa. Además, según Vargas-Montoya *et al.* (2021) en el período 2010-2022, los salarios por hora de las mujeres, según características socioeconómicas, son aproximadamente 13% inferiores a los de los hombres. Incluso cuando las mujeres logran emplearse, el pago por su trabajo es mucho menor (más detalles sobre este tema en capítulo 2).

Las personas jóvenes y menos cualificadas también presentan menores niveles de participación laboral y ocupación que sus contrapartes. En el segundo trimestre del 2025 las tasas de participación y ocupación de las personas entre 15 y 34 años presentan una brecha de 15 y 19 puntos porcentuales respecto a las personas en el rango de 35-60. Esta no cambia significativamente con respecto a la de los periodos postpandemia y al mediano plazo. La juventud también presenta una brecha salarial en el segundo semestre del 2025 que, aunque menor a la de mediano plazo, sigue siendo de 17% (Meneses y Segura, 2025).

Quienes cuentan con secundaria incompleta o menos presentan niveles de participación y ocupación laboral de 17 y 19 puntos porcentuales menores, respectivamente, que quienes tienen secundaria completa o más y estas brechas no han mejorado con respecto al mediano plazo (gráfico 3.5). Los salarios de las personas menos calificadas son apenas la mitad de los de las más calificadas, brecha que pese a haberse reducido, sigue siendo muy significativa. Debe recordarse que la mayor parte de la fuerza de trabajo es no calificada.

Gráfico 3.5

### Evolución de las tasas de participación y ocupación laboral según nivel educativo



Nota: El área vertical sombreada resalta el periodo de la pandemia del Covid-19. El periodo anterior se considera como el mediano plazo, y el posterior refleja la etapa postpandemia.

Fuente: Hidalgo, 2025 con datos de INEC.

### Se acrecienta la diferencia entre lo producido y lo que queda en el país

La discusión sobre la capacidad de un estilo de crecimiento productivo centrado en el sector externo y, específicamente, de las zonas francas para generar progreso y bienestar general, viene desde hace años (por ejemplo, Procomer, 2025). Independientemente de la posición que se asuma en el debate, hay un problema cierto y preocupante para el país: la brecha entre el PIB y el Ingreso Nacional Disponible (IND) ha venido creciendo. Esta marca la diferencia entre lo que se produce internamente y lo que se queda en Costa Rica una vez que las empresas extranjeras deciden el destino de sus utilidades (gráfico 3.6).

En el 2024, la diferencia fue de 9% del PIB, lo cual duplicó el promedio del período 2010-2019 de 4,7%; esto es reflejo de una brecha que se ha ensanchado en los últimos años y cuya tendencia se mantendría en el bienio 2025-2026. Como explican Meneses y Córdova (2025), este resultado se explica por la creciente repatriación de utilidades de las empresas extranjeras a sus casas matrices, sobre todo aquellas ubicadas en las zonas francas, pues son las únicas que incrementaron el flujo de IED al país en el 2024.

La creciente diferencia entre los bienes y servicios producidos y la parte de esta que se queda en el país implícitamente da respuesta al problema de fondo: el crecimiento de la economía no necesariamente se traduce en mayores ingresos para los hogares costarricenses; una constatación inconsistente con un desarrollo económico inclusivo y sostenido.

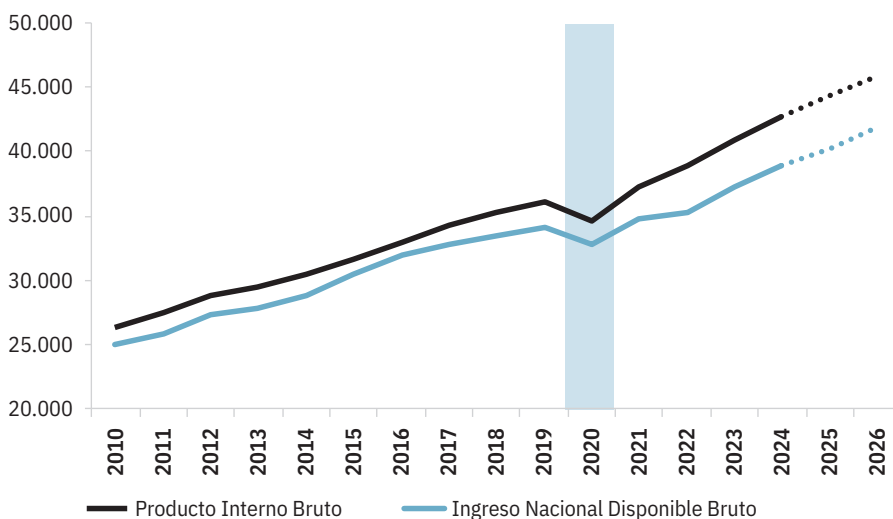
### Se profundizan diferencias de crecimiento económico entre ramas de actividad

Las debilidades del estilo de crecimiento para generar desarrollo humano también derivan de persistentes asimetrías en el dinamismo sectorial. Por un lado, hay ramas de actividad con un crecimiento por encima del nacional como es el caso del sector de información y comunicaciones y las actividades financieras. Estas se concentran en el sector servicios y operan mayoritaria pero no exclusivamente en

Gráfico 3.6

### Evolución del producto interno bruto e ingreso nacional disponible<sup>a/b/</sup>

(miles de millones de colones reales)



a/ Las líneas punteadas corresponden a las proyecciones del 2025 y 2026 hechas por el BCCR.

b/ La columna vertical sombreada resalta el periodo de la pandemia del Covid-19. El periodo anterior se considera como el mediano plazo, y el posterior refleja la etapa postpandemia.

Fuente: Hidalgo, 2025 con datos de BCCR.

zonas francas. Su evolución en el mediano plazo es muy dinámica, con un crecimiento por encima del 6%.

Por otro lado, se registran ramas de actividad que muestran alta volatilidad e históricamente se han quedado rezagadas. Entre ellas destacan los sectores de la agricultura y la construcción (gráfico 3.7). En suma, se presenta un ángulo más de la “fotografía” de una economía dual, en este caso particular a nivel productivo que, como se verá más adelante, transversa otras dualidades como la territorial.

La desmejora en el crecimiento de las ramas de agricultura y construcción, lejos de mostrar recuperación, se ha exacerbado recientemente (gráficos 3.8). En el caso de la agricultura, durante siete meses ha decrecido con una situación más crítica en la producción destinada al mercado local con diecisiete meses en “caída libre”. El sector construcción sigue sin mostrar señales de recuperación, con el último cuatrimestre en decrecimiento.

Ambos sectores carecen de perspectivas alentadoras para los próximos meses.

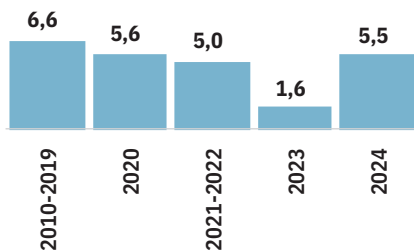
El turismo es otro de los sectores que no ha logrado retomar los niveles de actividad económica previos a la pandemia. Esta situación ocurre, como se verá más adelante, en una coyuntura de presiones por la apreciación de la moneda y una mayor afectación por inseguridad y vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos.

Estas actividades económicas, a su vez, han presentado mayores dificultades para generar y mantener los puestos de trabajo. Al segundo trimestre del 2025, los empleos generados por la agricultura son un 28% menos que los observados previo a la pandemia, con una caída constante desde el primer trimestre del 2021. Esta evolución posiciona al sector en niveles de empleo por debajo del promedio de mediano plazo. El sector construcción cierra el segundo trimestre del 2025 con un 2% superior previo a la pandemia, sin embargo, ha mostrado una tendencia

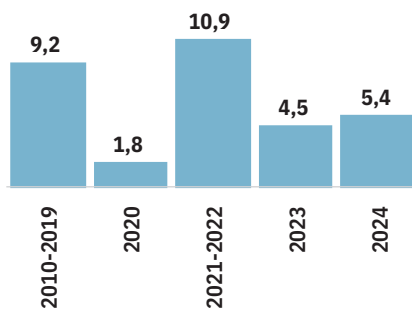
Gráfico 3.7

**Crecimiento del valor agregado en sectores seleccionados<sup>a/</sup>, según períodos**  
(porcentaje)

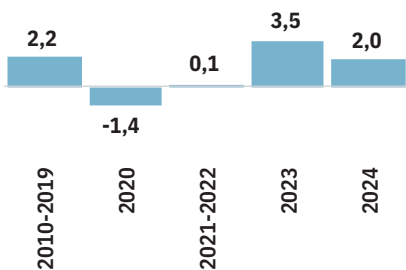
a) Actividades financieras



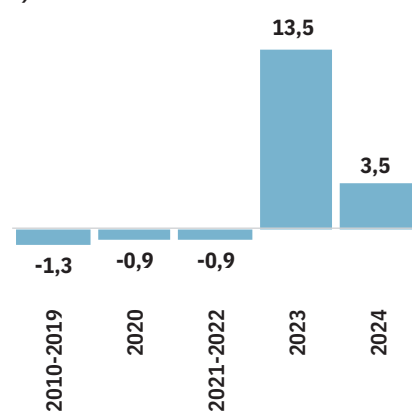
b) Información y comunicaciones



c) Agricultura



d) Construcción



a/ Se seleccionaron las dos ramas de actividad con mayor crecimiento promedio entre 2010 y 2019 (actividades financieras e información y comunicación) y con menor crecimiento (agricultura y construcción).

Nota: los datos para 2010-2019 y 2021-2022 corresponden al promedio de crecimiento interanual en esos períodos.

Fuente: Elaboración propia con base en Meneses y Córdova, 2025 con datos del BCCR.

decreciente desde el segundo trimestre del 2023 (gráfico 3.9).

En el segundo trimestre del 2025, el sector turismo contó con un -0,2% menos de empleos que antes de la pandemia, luego de una caída abrupta en la “temporada cero” ocasionada por los cierres de las fronteras para contener el covid-19. Los datos recientes de empleo en el turismo también difieren significativamente de los observados en el mediano plazo. Entre el 2010 y el 2019, aunque con un comportamiento volátil, evidencian una clara tendencia creciente, mientras que, a partir del 2019, se registró un efecto rebote y luego un estancamiento.

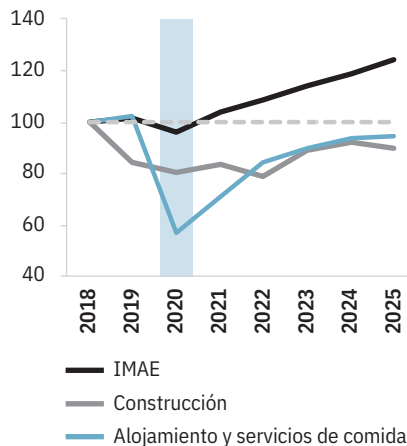
**Coyuntura internacional crea nuevas amenazas al principal motor de la economía**

Ediciones previas de este Informe han evidenciado el papel del sector externo como el principal motor de crecimiento de la economía costarricense, así como el rol de los Estados Unidos como el mayor socio comercial. En esta nueva edición del Informe se analiza cómo el sector externo sigue presentando un buen dinamismo, pero con señales de desaceleración. Además, a partir del trabajo de Jiménez y Arce (2025), se estudian las potenciales amenazas que afronta un sector

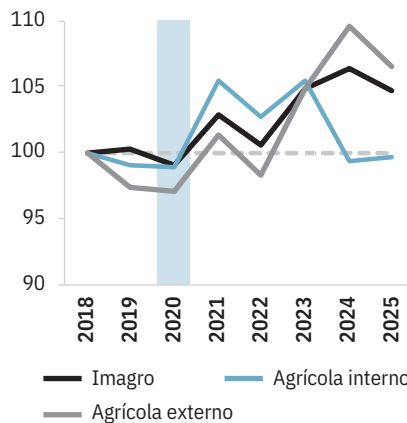
Gráfico 3.8

**Evolución del índice de actividad económica por año, según sector**  
(base 2018=100<sup>a/</sup>)

a) Actividades con señales de decrecimiento



b) Actividades con señales de desaceleración



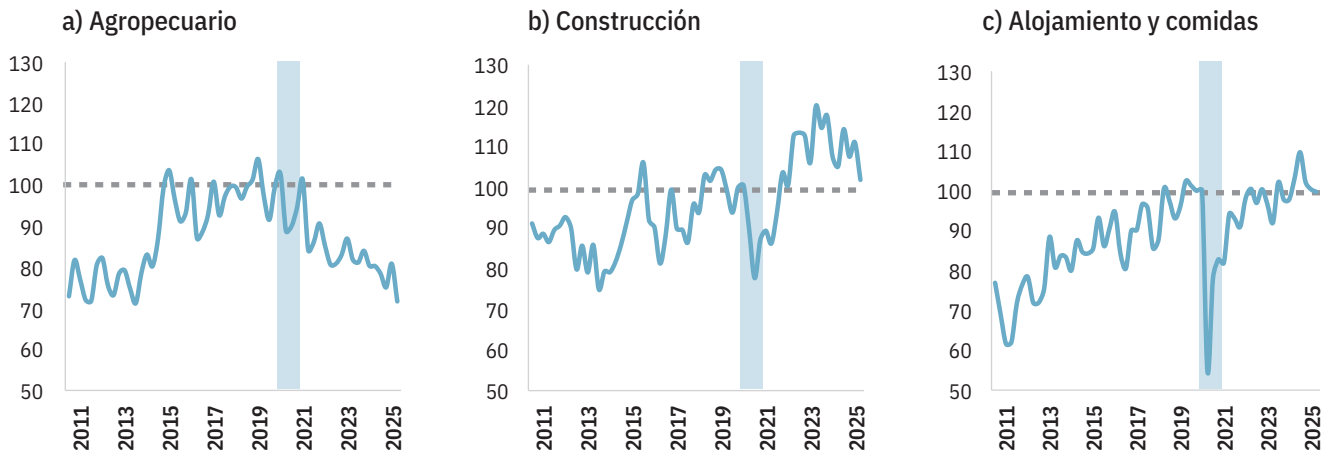
a/ Se calculan los promedios anuales del IMAE y se toma el promedio de 2018 como año base.

Nota: se usan los acrónimos IMAE (índice mensual de actividad económica) e Imagro (índice mensual de actividad agropecuaria). La columna vertical sombreada resalta el año de la pandemia del Covid-19. El dato del 2025 corresponde al promedio entre enero y agosto de ese año.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Gráfico 3.9

**Evolución del empleo según ramas de actividad seleccionadas<sup>a/</sup>**  
(base 2018=100)



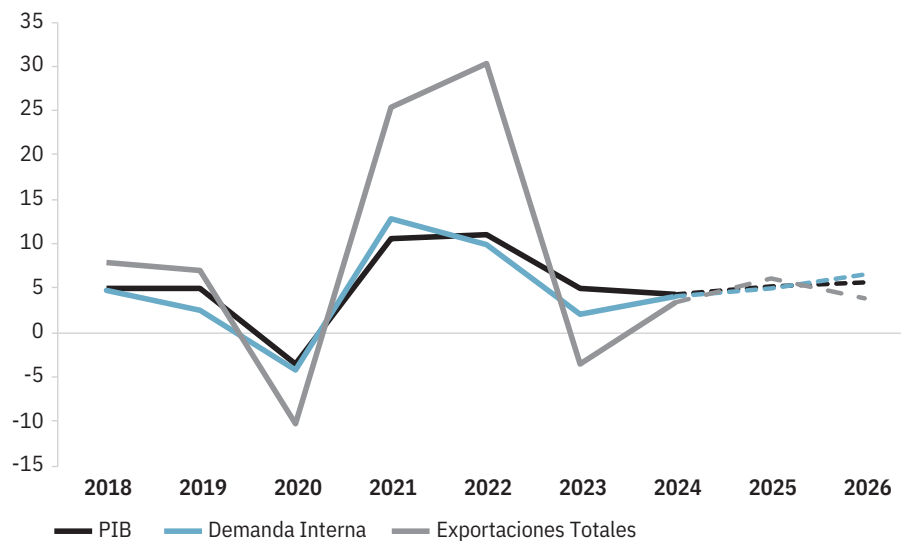
a/ Se seleccionan tres ramas de actividad: las dos que muestran mayor y menor dinamismo en el mediano plazo.

Nota: El área sombreada resalta el periodo de la pandemia del Covid-19. El periodo anterior se considera como el mediano plazo, y el posterior refleja la etapa postpandemia.

Fuente: Hidalgo, 2025 con datos del INEC.

Gráfico 3.10

**Variación interanual del PIB nominal, demanda interna y externa<sup>a/</sup>**  
(porcentaje)



a/ Los datos de 2025 y 2026 corresponden a proyecciones para los indicadores, representados por líneas punteadas.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

externo altamente dependiente de la economía estadounidense, cuya política comercial se encuentra en proceso de reconfiguración y ocasiona un entorno mundial incierto.

**Sector externo sigue siendo el más dinámico, pero con señales de desaceleración**

La economía externa del país se caracteriza por tener ritmos de crecimiento más elevados que la interna. En el 2024, la demanda externa creció en un 5,8%, un valor significativamente superior al del crecimiento de la demanda interna y la producción total, que aumentaron en un 4,3% (gráfico 3.10). Cuando se analiza el período de la pandemia y años posteriores, el sector externo presenta una caída y efecto rebote más pronunciados, se destacan los crecimientos interanuales del 16% y del 18,5% en el 2021 y el 2022, respectivamente. El aumento de la demanda externa es el mayor impulsor del crecimiento económico nacional, por su aporte directo y efecto multiplicador en la demanda interna.

En el mediano plazo, aunque con diferencias menos marcadas, el sector externo mantiene un dinamismo económico

consistentemente superior al interno. Esta tendencia refleja la apuesta que el país hizo en su apertura al comercio y la inversión internacional desde finales del siglo XX. Otra variable económica que refleja el dinamismo del sector externo es la inversión directa, que en el 2024 muestra un crecimiento del 32%, con un incremento del 34% en el período postpandemia y del 8% en el mediano plazo (2010 a junio del 2025), de acuerdo con los datos del Banco Central de Costa Rica.

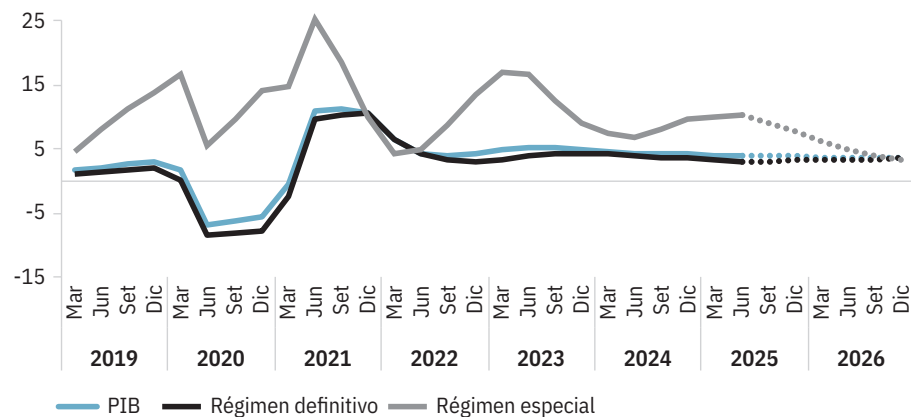
Sucesivas ediciones del *Informe* han subrayado la dualidad de la economía costarricense. El régimen especial es su principal motor económico. Su dinamismo, impulsado por empresas transnacionales exportadoras, ha soportado el crecimiento del país. En cambio, el régimen definitivo evidencia una dinámica menor, que aporta menos al dinamismo de la economía costarricense. Mientras el régimen especial creció un 8% en el 2024, el definitivo y la producción total lo hicieron en un 3,8% y 4,4%, respectivamente (gráfico 3.11).

Las estadísticas de inversión directa muestran la dualidad de la economía costarricense. Las empresas en el régimen de zona franca presentaron en el 2024 un crecimiento en la atracción de flujos de capital de un 59%. En cambio, los del régimen definitivo decrecieron en un -66%. Esta asimetría no es nueva, aunque varíe en intensidad. En el período 2021-2023, la inversión en la zonas francas creció en un 40% y en el régimen definitivo decreció en un -330%. En el mediano plazo, aunque con una diferencia menos marcada, se observa una brecha de 21 puntos porcentuales en favor de las empresas del régimen especial.

El análisis prospectivo para el bienio 2025-2026 presenta un crecimiento en las exportaciones de un 3,8% en el 2026, que estará por debajo del observado previo a la pandemia (gráfico 3.10). Este resultado es consistente con la desaceleración esperada en el régimen especial. Se espera una ralentización tanto en el 2025 como el 2026; esto lo posicionaría en un crecimiento del 3,2% al cierre del bienio, similar a lo observado previo al choque pandémico (gráfico 3.11).

Gráfico 3.11

### Crecimiento del PIB trimestral según régimen de producción (tasa de variación interanual)



Nota: Las líneas punteadas representan los datos proyectados para la segunda mitad del 2025 y el 2026. Fuente: Hidalgo, 2025 con base en Meneses-Córdova, 2025 y datos del BCCR.

Las estadísticas de inversión externa al 2025, aunque preliminares, también reflejan el decrecimiento del sector externo. En los dos primeros trimestres se ha presentado una disminución del -59% en el país, en gran medida explicada por la caída del -70% en los flujos que recibieron las empresas ubicadas en el régimen especial, la cual solo es amortiguada parcialmente por el aumento en la inversión extranjera del 66% en el régimen definitivo.

centrada en pocos productos (café, banana, caña de azúcar y carne de res) y de exportaciones manufactureras livianas para el mercado centroamericano, el país pasó a tener un sector externo mucho más diversificado, tanto en términos de los productos y servicios que exporta, como de los mercados de destino. Sin embargo, esta diversificación no eliminó una característica estructural: la alta dependencia del mercado estadounidense. Esta dependencia está creando un riesgo estratégico para Costa Rica, en vista de la reconfiguración de la política comercial de ese país. Este apartado analiza el tema.

#### PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE

**CRECIMIENTO ECONÓMICO**  
véase Meneses y Córdova, 2025, en [www.estadonacion.or.cr](http://www.estadonacion.or.cr)

#### Alta dependencia del comercio y la inversión estadounidense plantea riesgo estratégico

La estrategia de apertura al comercio y la inversión internacional implicó una amplia diversificación del sector externo en Costa Rica. De ser, a finales de siglo pasado, una economía agroexportadora

#### País no logra reducir dependencia externa de los Estados Unidos

Costa Rica cuenta con una estrecha relación política y económica con los Estados Unidos. Jiménez y Arce (2025) señalan que este vínculo tiene sus cimientos en la proximidad geográfica y afinidad política de larga data y se consolidó con el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR) aprobado en el 2007. A pesar de los réditos obtenidos por el comercio de bienes y servicios con el mercado estadounidense, la

economía nacional, en especial el sector externo, presenta una alta dependencia y vulnerabilidad de la evolución de la economía de los Estados Unidos.

Los principales indicadores del sector externo costarricense al 2024 evidencian su alta concentración en el mercado estadounidense (gráfico 3.12). En materia de comercio exterior, el 47% de las exportaciones de bienes tiene como destino los Estados Unidos, valor que supera significativamente al promedio del 41% en el período 2010-2023.

Las exportaciones a los Estados Unidos están altamente concentradas en el sector equipo de precisión y médico (68% al 2024), cuya participación en el bienio 2024-2025 ha aumentado con respecto al promedio del 2010-2023, según los datos de Procomer. El crecimiento de las exportaciones en la industria de dispositivos médicos durante los primeros meses del 2025 y el 2024 es del 26% y del 17%, respectivamente; valores que, aunque siguen siendo relativamente altos, disminuyen con respecto al promedio del 30% para el período 2010-2023.

Otro sector con una importancia relativa considerable en las exportaciones a los Estados Unidos es el agrícola, con un 18%, que a su vez concentra el 45% del

valor exportado en la piña. Este producto pierde participación en los últimos años y sufre una desaceleración en lo que va del 2025, con un crecimiento del 0,3% en relación con el 15,5% del 2024 y el 6,6% del 2010-2023. En cuanto a los productos cuyo valor exportado a los Estados Unidos presentan mayor dinamismo, destacan los circuitos integrados y las microestructuras electrónicas, que en el 2025 han crecido en un 338%, en el 2024 en un 154% y en el período 2010-2023 en un 64%. También sobresale otras agujas y catéteres, cánulas e instrumentos similares, que hasta agosto del 2025 crecen en un 116,5% y con aumentos del 42,8% en el 2024 y el 49,3% en el período 2010-2023.

Las importaciones nacionales en el 2024 también tienen como principal origen el territorio estadounidense (40%), sin que haya otros socios de importancia similar. Los sectores productos minerales, eléctrica y electrónica, y derivados del petróleo son los de mayor participación (42% del total). A pesar de que las importaciones desde los Estados Unidos han perdido participación en relación con el promedio del 43% del 2010-2023, siguen mostrando una concentración muy significativa.

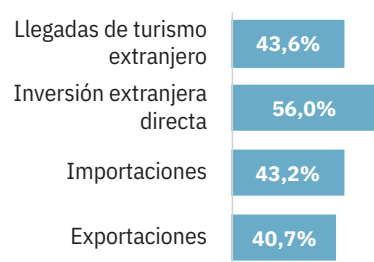
El turismo estadounidense representa el 56% de la visitación extranjera en Costa Rica al 2024, lo cual significa un crecimiento de 12 y 13 puntos porcentuales con respecto al promedio del 2010-2023 y 2019. No obstante, si se compara los años 2024 y 2019, el país ha perdido participación respecto a competidores de Centroamérica y el Caribe. Pasó de atraer el 20% del turismo estadounidense que visita la región a un 17%, particularmente frente a República Dominicana y El Salvador, que ganan terreno. Además, Costa Rica destaca como el país donde las personas turistas estadounidenses realizan un mayor gasto promedio por persona (USD 1.536), seguido por Panamá (USD 1.269) y Belice (USD 1.257), lo cual, por un lado, podría reflejar una mayor disposición a gastar en el territorio nacional y, por otro, que somos un país relativamente costoso (Vega-Monge, 2024).

Finalmente, en el 2024, el 80% de la inversión extranjera directa provino de empresas domiciliadas en los Estados Unidos, muy superior al alto promedio del 56% del período 2007-2023. Los sectores en los que invierten las empresas estadounidenses reflejan el posicionamiento estratégico de Costa Rica en cadenas globales de valor, así como su importancia en la prestación de servicios. Por actividad económica, los flujos de IED a Costa Rica se concentran en la manufactura de dispositivos y servicios empresariales. El sector manufacturero capta el 67% de la inversión proveniente de los Estados Unidos, destacando los productos químicos (19%) y electrónicos (14%), ambos estrechamente vinculados a cadenas globales en las cuales Costa Rica participa activamente. El 16% se dirige a sociedades holding, que centralizan funciones corporativas desde el país, y el 5% a servicios profesionales, científicos y técnicos.

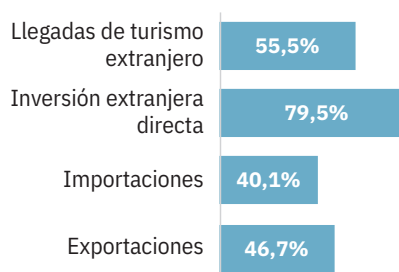
Gráfico 3.12

**Distribución de los principales agregados del sector externo, según el socio comercial y periodo.**

**a) Promedio 2010-2023**



**b) 2024**



Nota: Los porcentajes reflejan la participación relativa de Estados Unidos y el resto del mundo en el total de las variables económicas durante el promedio de 2010-2023 y el 2024. Cada valor se calcula como la proporción del monto correspondiente a Estados Unidos respecto a la suma total de ambos destinos. Fuente: Jiménez-Cordero, 2025 con base en Jiménez y Arce, 2025, y datos de Procomer, ICT y BCCR, 2025.

**Cambios en la política comercial estadounidense pueden afectar profundamente al sector externo**

Desde julio del 2024, un informe de la *Economist Intelligence Unit* de The Economist posiciona a Costa Rica como el segundo país del mundo más

vulnerable ante una segunda administración de Donald Trump. El informe se basa en el “Índice de riesgo Trump” (TRI, por sus siglas en inglés), que considera los pilares de comercio, seguridad y migración. México es el único país que supera a Costa Rica en el TRI, particularmente por su mayor exposición en el comercio y la migración. El país se posiciona por encima de vecinos como Panamá y República Dominicana, los cuales presentan una alta dependencia de la economía estadounidense.

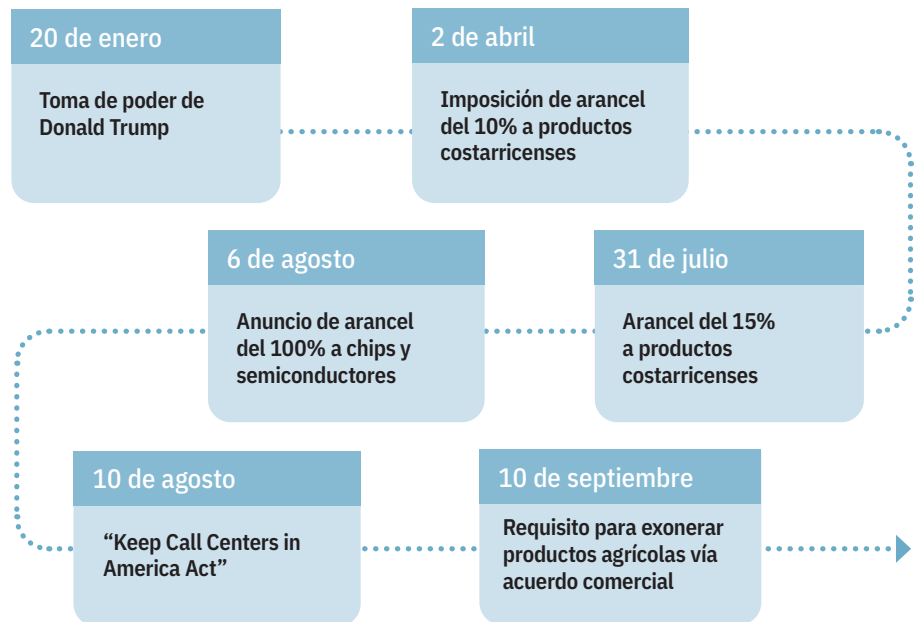
Durante la presente administración Trump se han gestado cambios efectivos y anuncios en la política comercial estadounidense, de los cuales Costa Rica no está exenta y algunos de ellos podrían tener un profundo efecto directo o indirecto en el sector externo costarricense (diagrama 3.1). Destaca la imposición de aranceles del 10% a gran parte de las exportaciones nacionales, lo que en un inicio posiciona al país en una situación relativamente ventajosa al compararse con ALC. Sin embargo, menos de cuatro meses después, la administración Trump incrementa la tasa aplicada al 15%, lo cual ubica a Costa Rica en una situación de desventaja relativa en Centroamérica y el Caribe, solo superado por Nicaragua con una tasa del 18%.

Para contribuir con más evidencia al debate sobre el posible “Efecto Trump” en el sector externo de la economía costarricense, la edición 2025 del *Informe* incluye un estudio especial sobre el tema (Jiménez y Arce, 2025). Este trabajo analiza, cualitativa y cuantitativamente, los potenciales efectos directos e indirectos de las medidas proteccionistas estadounidenses, en particular los aranceles. Los hallazgos del estudio se complementan con el análisis de la evolución del sector en el 2025 y su prospectiva al 2026.

La revisión de la literatura y las entrevistas semiestructuradas a personas expertas resaltan como un primer efecto de los cambios en la política comercial estadounidense, el desincentivo a que las empresas estadounidenses realicen nuevas inversiones en el país. Una conclusión es que la incertidumbre generada por la falta de claridad sobre el rumbo de las políticas comerciales y económicas lleva

Diagrama 3.1

### Anuncios durante la Segunda Administración Trump relacionados directamente con la economía costarricense. 2025



Fuente: Vargas-Montoya, 2025b.

a que muchas empresas opten por mantener sus proyectos en pausa y pospongan decisiones de expansión. La percepción de riesgo y la volatilidad en el entorno provocan que potenciales inversionistas sean más cautelosos y prefieran esperar a condiciones más estables antes de comprometer recursos.

La posibilidad de cambios repentinos en regulaciones, aranceles o acuerdos internacionales podría desalentarse el ingreso de nuevas inversiones (*reshoring*) y afectar la permanencia de las ya existentes, en particular las de tipo *greenfield*. En este punto, conviene destacar que Costa Rica ocupa la tercera posición en el mundo y la primera en ALC en el *Greenfield FDI Performance Index 2025*, el cual mide el volumen de nuevas inversiones en relación con el PIB de las economías. En el último reporte del índice se señala que Costa Rica ha perdido competitividad en relación con otros países del mundo y, en particular, de ALC por los aranceles de la administración Trump y por la apreciación de su moneda.

Es prematuro para hablar de resultados concluyentes. La reciente desaceleración del sector externo costarricense en el 2025 podría estar empezando a reflejar las consecuencias de los constantes cambios en las reglas comerciales de los Estados Unidos, como se analizó en la sección anterior. La reciente caída de la inversión directa en las zonas francas también podría ser una señal. Como expone el BCCR en su último IPM, el menor dinamismo de la economía costarricense se explica por la desaceleración del sector externo (régimen de zonas francas), siendo las medidas proteccionistas de la administración Trump el principal mecanismo detrás de este resultado (BCCR, 2025).

A pesar de que la administración Trump aún no ha anunciado medidas concretas para estimular la inversión de empresas estadounidenses dentro de los Estados Unidos, la incertidumbre sobre el alcance de estas medidas sigue generando preocupaciones sobre el impacto en atracción de capitales estadounidenses

en Costa Rica. Las eventuales medidas podrían llevar a algunas empresas a pausar decisiones de reinversión.

En particular, estas medidas pueden afectar a sectores clave ubicados en las zonas francas. Por ejemplo, a inicios de octubre del 2025 se dio a conocer que la administración Trump investiga si las importaciones de implementos médicos afectan la seguridad nacional, con fundamento en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial. Si se determina afectación, podrían tomarse medidas para concentrar la producción de dispositivos médicos en territorio estadounidense, lo cual acarrearía importantes consecuencias para el principal sector de exportación nacional.

El análisis de Jiménez y Arce (2025) también destaca que los cambios en la política comercial estadounidense podrían ocasionar efectos indirectos en la economía nacional. El primero es la disminución de las remesas enviadas desde Estados Unidos a los países de Centroamérica, lo cual podría tener un impacto en el poder adquisitivo de esta región y, en consecuencia, en el mercado de exportaciones de Costa Rica hacia sus vecinos. Relacionado con lo anterior, la disminución en las exportaciones de los países vecinos también podría erosionar su poder adquisitivo y así reducir la demanda de productos costarricenses. Tercero, la inflación en Estados Unidos podría ser impulsada por factores como aranceles, escasez de mano de obra y políticas económicas específicas, lo que derivaría en un efecto de *passthrough* en inflación importada de la economía costarricense.

Jiménez y Arce (2025) realizaron simulaciones de los potenciales efectos de los aranceles impuestos por la Administración en las exportaciones de bienes costarricenses. Las autoras se basan en la estimación de elasticidades precio-demanda, la cual, por su naturaleza, es un ejercicio estático y tiene varios supuestos, por lo que sus resultados deben interpretarse como una aproximación inicial bajo condiciones específicas (recuadro 3.1).

Las estimaciones se basan en datos históricos de las exportaciones de

### Recuadro 3.1

#### Metodología empleada para estimar los potenciales efectos de los aranceles del Gobierno de los Estados Unidos sobre las exportaciones

La investigación integra un enfoque cuantitativo y cualitativo para analizar los posibles impactos de la política comercial estadounidense sobre el sector exportador costarricense.

El componente cuantitativo, eje central del estudio, se basa en la estimación de elasticidades precio-demanda de exportación, con el fin de simular cómo variaciones en los aranceles podrían afectar los volúmenes y valores exportados. Se utilizaron datos del sistema BACI/CEPII y de Procomer, que registran el comercio bilateral y las exportaciones costarricenses por producto y destino.

El ejercicio tiene carácter estático y se formula bajo tres supuestos principales:

- EE. UU. no modifica sus aranceles ni recompone su estructura de importaciones.
- No se consideran efectos indirectos sobre otros países o la demanda global.
- No se incluyen choques externos como variaciones en el tipo de cambio o en el ingreso mundial.

Bajo estas condiciones, el modelo constituye un cálculo de aproximación (*back-of-the-envelope*), útil para obtener una primera cuantificación de los efectos en el corto plazo.

De forma complementaria, se aplicó la metodología de espacio de producto del Growth Lab de la Universidad de Harvard, que permite identificar productos y mercados con potencial de diversificación según las capacidades productivas actuales del país.

El componente cualitativo incluyó entrevistas semiestructuradas con seis especialistas de instituciones clave —Procomer, Conde, Incae, Catrade Consulting Group y Ernst & Young—, quienes aportaron criterios sobre riesgos, oportunidades y estrategias de adaptación empresarial.

La combinación de ambos enfoques ofrece una visión integral de los impactos inmediatos de los nuevos aranceles y de las posibles respuestas estratégicas del país ante un entorno internacional más incierto.

Para más detalles metodológicos, véase la ponencia completa de Jiménez y Arce (2025).

Fuente: Jiménez y Arce, 2025.

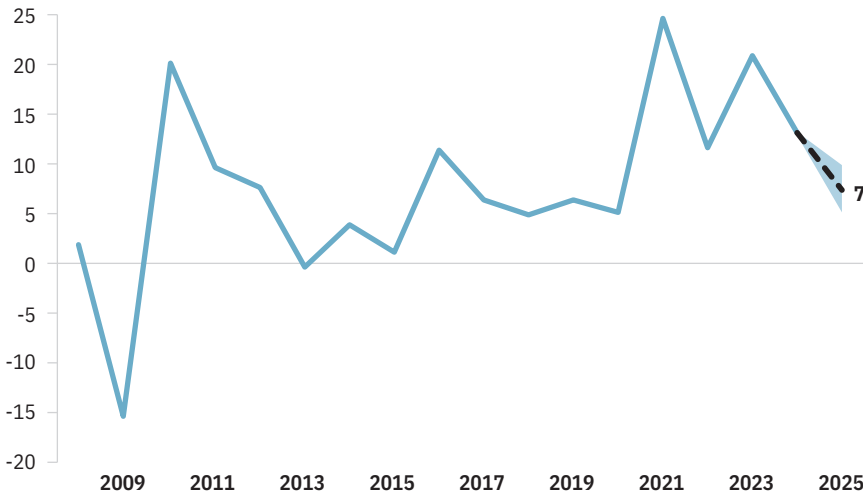
bienes costarricenses a los Estados Unidos en el período 2007-2023. Arrojan que la elasticidad precio de la demanda es  $-0,23$ . Esto significa que, si el precio de las exportaciones costarricenses aumenta un 1%, la cantidad demandada de sus productos en los Estados Unidos disminuiría en un 0,23%. Esta elasticidad se multiplica por el cambio porcentual en el precio. La estimación se hizo cuando el Gobierno estadounidense había anunciado aranceles un 10% de aranceles a los productos Costa Rica (primera tasa

impuesta el 2 de abril). De acuerdo con este nivel, la cantidad demandada disminuiría un 2,3% y con un rango de error entre un  $-0,2\%$  y un  $-4,4\%$  (gráfico 3.13).

En síntesis, el valor de las exportaciones a Estados Unidos podría desacelerarse en el 2025 por efecto de los aranceles de Estados Unidos. Esta situación implicaría menor dinamismo en las exportaciones totales debido a la alta participación del mercado estadounidense (un 46,7% en el 2024). Adicionalmente, es clave enfatizar que este resultado sería

Gráfico 3.13

**Crecimiento anual de las exportaciones de bienes de Costa Rica hacia Estados Unidos y proyección<sup>a/</sup> de 2025 ante un arancel del 10%<sup>b/</sup>**  
(porcentaje)



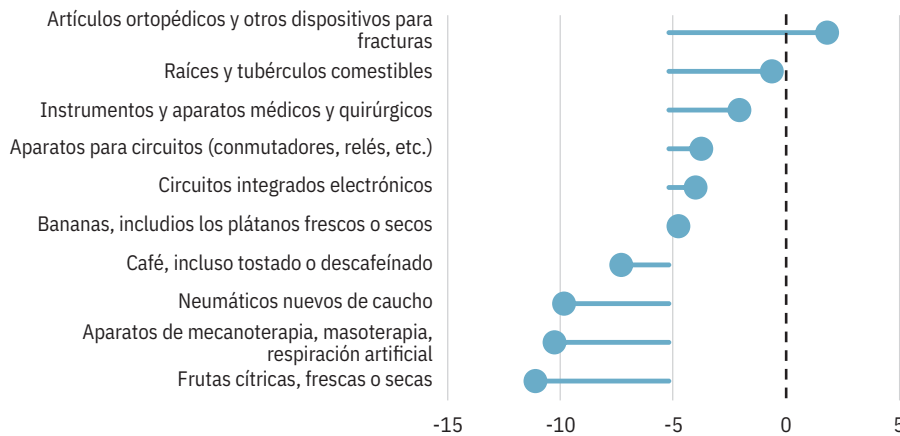
a/ Los datos correspondientes al año 2025 son proyecciones, representadas mediante una línea punteada. Dado que estas estimaciones implican cierto grado de incertidumbre, el área sombreada indica el intervalo de confianza, que va de 5,1 a 9,8. El valor esperado dentro de este rango es 7.

b/ Para más información ver ponencia de Jiménez y Arce (2025).

Fuente: Hidalgo, 2025 con base en Jiménez y Arce, 2025 y datos de Procomer.

Gráfico 3.14

**Estimación del cambio porcentual<sup>a/</sup> en las exportaciones<sup>b/</sup> hacia Estados Unidos ante un arancel del diez por ciento**



a/ Lo valores están centrados en el promedio de -5,2% con respecto a una variación del 10% en los aranceles.

b/ Principales productos de exportación a Estados Unidos.

Fuente: Hidalgo, 2025 con base en Jiménez y Arce, 2025 y datos de Procomer.

válido si Estados Unidos no recompone sus importaciones a favor de Costa Rica. Dado que los aranceles impuestos en abril aumentaron en julio, es probable que los efectos se sientan más hacia finales del 2025 y en especial en el 2026, hasta que los países se adapten. Por ejemplo, las exportaciones costarricenses para agosto del 2025 siguen presentando un ritmo de crecimiento destacado, incluso superior al del 2024 y del período 2010-2023.

El análisis de elasticidades también se realizó por producto, al considerar que los efectos potenciales de los aranceles podrían variar según ciertas características: el sector al que pertenecen, si son de primera necesidad o no y si cuentan con potenciales sustitutos. En este ejercicio se explora la elasticidad precio de los diez principales productos comercializados en el 2023, que representan casi la mitad del total exportado a los Estados Unidos (46%).

El gráfico 3.14 evidencia la elasticidad y el valor medio del posible cambio en la cantidad exportada. Las frutas cítricas, dentro de las cuales está la piña, son los productos con mayor elasticidad. No son considerados productos de primera necesidad y cuentan con productos y mercados alternativos, lo cual podría provocar una potencial disminución en su cantidad exportada del 11,1%. En el caso de la piña, México es el principal proveedor de este producto a los Estados Unidos y un arancel alto a este país podría redirigir la compra de esta fruta a Costa Rica (o viceversa). Para agosto del 2025, las exportaciones de piña mostraron una fuerte desaceleración con respecto al 2024 y al período 2010-2023; siguen presentando un crecimiento positivo, aunque cercano a cero.

En un segundo lugar de elasticidad se encuentran los dispositivos de mecanoterapia y respiración artificial. Aunque son bienes de primera necesidad, podrían experimentar una desaceleración del -10,3%, posiblemente debido a la disponibilidad de mercados alternativos, incluso dentro de la misma producción estadounidense. A estos productos le siguen los neumáticos (-9,9%), el café (-7,3%) y los bananos (-4,8%), que no se consideran de primera necesidad y cuentan con mer-

cados sustitutos. De estos artículos, para agosto del 2025, las exportaciones de neumáticos registran un decrecimiento similar al estimado y las de banano han caído más del doble de lo previsto.

El rubro de los instrumentos y aparatos médicos y quirúrgicos tienen una elasticidad relativamente baja y su consecuente menor disminución en el valor exportado (-2,1%). Para agosto del 2025, las exportaciones de estos productos han crecido, lo cual se podría explicar porque su demanda está determinada por factores como el envejecimiento de la población y las dinámicas propias del seguro de salud de los Estados Unidos, posicionándolos como productos con una demanda estable y asegurada. En cuanto a los semiconductores, también se considera un mercado relativamente inelástico, pues tienen aplicaciones en mercados como el automotriz, la industria aeroespacial y la defensa, lo que se refleja en el destacado crecimiento que han presentado para agosto del 2025. Por último, un caso destacable es el de los artículos ortopédicos y otros dispositivos para fracturas. Es el único rubro con una elasticidad positiva: los aranceles se asociarían con un aumento en sus exportaciones de un 1,8%.

Los análisis que emplean métodos dinámicos coinciden con los hallazgos de Jiménez y Arce (2025). Por ejemplo, Kalemlı-Özcan *et al.* (2025) aplican un modelo global de equilibrio general para estimar que, fuera de Estados Unidos, el balance comercial disminuirá debido a la reducción de exportaciones. En otra investigación, Bouët (2025), usando un modelo de equilibrio general, estima que los aranceles recíprocos conllevarían a una caída del comercio real de bienes entre un -1,6% y un -3,9% acumulado al 2040, dependiendo de la gravedad de la escalada arancelaria.

Otro estudio reciente analiza los posibles efectos de la política comercial de los Estados Unidos en el ingreso real de un grupo de economías al 2028, incluyendo el caso de Costa Rica (Rodríguez-Clare *et al.*, 2025). Los autores emplean un modelo dinámico y encuentran una afectación mayor de los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump en los países que comercian más con los Estados

Unidos y tienen mayor grado de apertura comercial. Según sus estimaciones, Costa Rica sería la décima economía de 71 consideradas con mayor caída en su ingreso real entre el 2024 y el 2028 (alrededor del 0,4%), destacando en las dos primeras posiciones Canadá y México (con disminuciones alrededor del 1,6%), por sus altos volúmenes de comercio con la economía estadounidense.

Finalmente, Jiménez y Arce (2025) también analizan las oportunidades de Costa Rica en caso de implementar estrategias para hacer frente a la reconfiguración de la política comercial de los Estados Unidos y las tensiones que genera con otras economías. Destaca que el país cuenta con una masa crítica de empresas y un flujo significativo de capital estadounidense, los cuales se podrían potenciar con políticas públicas y con una estrategia efectiva de contención y atracción de nuevas empresas. Resaltan la relevancia de analizar las acciones de atracción y retención de inversiones que llevaron a cabo la tríada Comex-Procomer-Cinde hasta agosto del 2023 y Comex-Procomer en adelante, para identificar las mejores prácticas y diseñar la estrategia actual. Las autoras también resaltan que Costa Rica sigue teniendo un lazo político y comercial fuerte con los Estados Unidos, así como una posición geográfica ventajosa en relación con las economías competidoras como las asiáticas.

### Incertidumbre internacional propicia perspectivas de desaceleración económica mundial

La economía mundial atraviesa actualmente un período de incertidumbre sin precedentes desde la década de los noventa, superando con creces los tiempos inciertos de la pandemia del Covid-19 y la crisis financiera del 2008 (gráfico 3.15). Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, el mundo se expone a un nuevo fenómeno que acrecienta la incertidumbre: tensiones comerciales y el riesgo potencial de una guerra comercial.

Las tensiones no son solo comerciales; también han crecido rápidamente en el

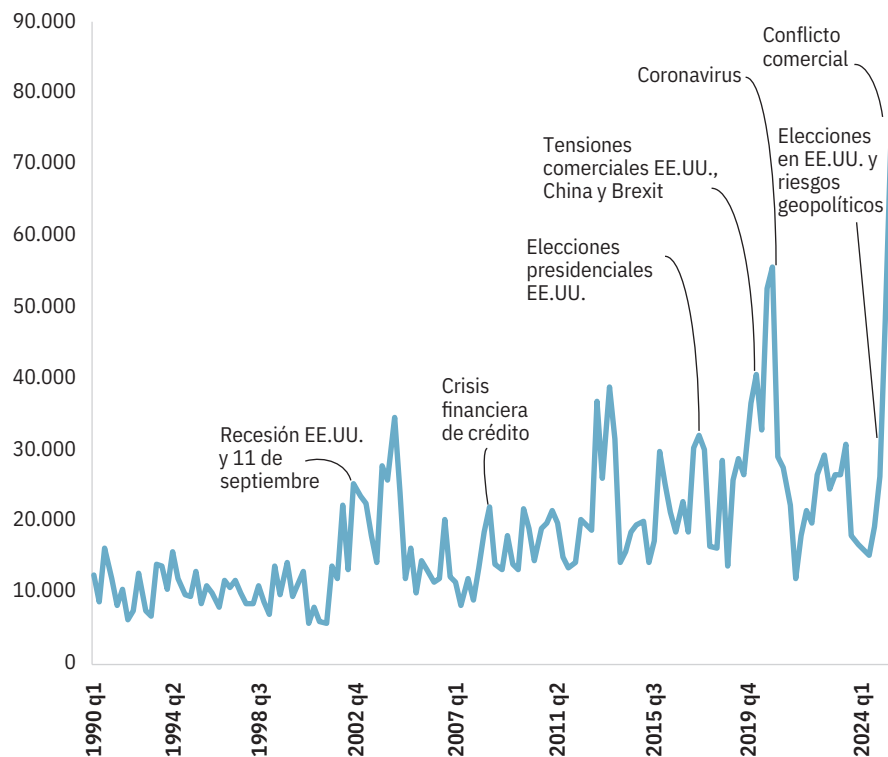
ámbito geopolítico. El nuevo Gobierno estadounidense ha tomado medidas territoriales que afectan la integridad de otras naciones, anuncios migratorios que alteran las relaciones entre países y una retórica más agresiva (y cambiante) ante quienes percibe como adversarios, especialmente hacia China. Esto ha generado un clima internacional de acción y reacción entre las principales economías del mundo, particularmente a las más grandes e influyentes. Entre estas economías destacan el mismo Estados Unidos, China, Canadá, México, Brasil y los países de la Unión Europea.

La incertidumbre ha venido aparejada con una desaceleración económica internacional y dificultades para pronosticar el crecimiento y otros macro precios como la inflación y las tasas de interés. Sin embargo, no todo se debe a las recientes acciones de los Estados Unidos. Esta incertidumbre es también producto de un quinquenio caracterizado por su alta volatilidad económica, que ha obligado a organismos internacionales y bancos centrales a incrementar sus esfuerzos de pronóstico. En tan solo cinco años se ha experimentado una pandemia, una crisis en la cadena de suministros y dos conflictos bélicos de escala internacional que, en conjunto, dejan a la economía mundial en un panorama de desaceleración (gráfico 3.16) y ciclos de inflación.

Meneses y Córdova (2025) señalan que “la resiliencia de la economía mundial nuevamente está a prueba”. La incertidumbre se ve reflejada en una desaceleración económica en el crecimiento proyectado en el 2025 y el 2026, con un 3% y un 3,1%, respectivamente. Un dinamismo inferior al observado en el bienio 2023-2024 del 3,4%, cuando la producción mundial se desacelera, principalmente por la pérdida de fuerza del “efecto rebote” tras la pandemia y la dificultad para compatibilizar la política económica en un escenario de menor crecimiento y presiones inflacionarias. La desaceleración en el crecimiento proyectado es aún mayor si se compara con promedio del 3,7% en el período 2000-2019, marcando una tendencia de ralentización en la producción mundial. Otros organismos internacionales como las Naciones

Gráfico 3.15

**Índice<sup>a/</sup> trimestral de incertidumbre mundial**  
(índice reescalado por 1 millón)



a/ El World Uncertainty Index (WUI) mide la incertidumbre global a partir de la frecuencia de aparición del término “uncertain” (y sus variantes) en los informes de país elaborados por The Economist Intelligence Unit (EIU). El índice se construye como el porcentaje de estas menciones sobre el total de palabras y se reescala multiplicando por 1.000.000. Un valor más alto indica mayor incertidumbre. Por ejemplo, un valor de 200 equivale a que el término representa aproximadamente el 0,02% de todas las palabras en los informes (alrededor de dos menciones por cada 10.000 palabras).  
Fuente: Elaboración propia con datos de Ahir et al., 2025.

Unidas y el Banco Mundial proyectan tasas de crecimiento aún menores, del 2,4% y el 2,3%, respectivamente (DESA, 2025; Banco Mundial, 2025).

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE

**DESAFÍOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP**  
véase Jiménez y Arce, 2025, en [www.estadonacion.or.cr](http://www.estadonacion.or.cr)

**Estabilidad de precios y cambiaria crea intenso debate sobre la política monetaria**

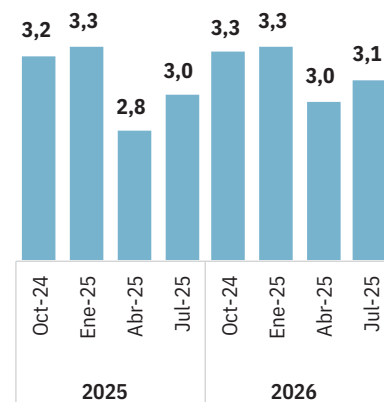
La tercera sección del capítulo examina la estabilidad económica del país, especialmente en temas monetarios. En términos generales, constata una estabilidad cambiaria y de precios cuyos niveles, sin embargo, han desatado un intenso debate sobre la idoneidad y oportunidad de las decisiones de política monetaria.

En septiembre del 2025, la economía costarricense acumula veintiún meses

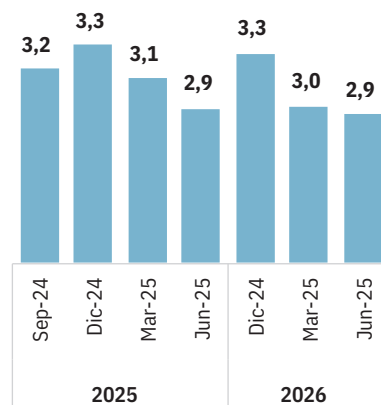
Gráfico 3.16

**Proyecciones de la tasa de crecimiento del PIB real del mundo, por año, según entidad que lo estima organismo y la antigüedad de la proyección (porcentaje)**

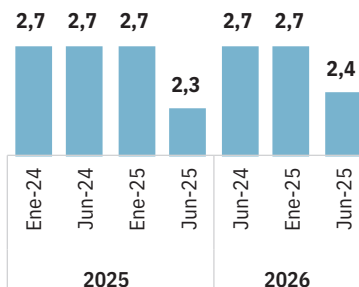
a) Fondo Monetario Internacional



b) OCDE



c) Banco Mundial



Fuente: Hidalgo, 2025 con base en Meneses y Córdoba, 2025 y datos del FMI, la OCDE y el Banco Mundial.

con inflaciones interanuales alrededor de cero e incluso con veinte de ellos con deflación. Los salarios en el 2024 crecieron más que los precios de los principales bienes y servicios que consumen los hogares costarricenses. En las recientes mediciones de opinión pública del CIEP-UCR, el costo de la vida pasó de ser catalogado como uno de los tres principales problemas nacionales por un 10,8% de la población en noviembre del 2023 a solo un 6,9% en setiembre del 2025, aunque sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas (CIEP-UCR, 2025). No obstante, la relativa estabilidad de la inflación cerca del cero también ha significado el incumplimiento y postergación en la expectativa de alcanzar el rango meta de inflación, el parámetro que guía a la política monetaria del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El tipo de cambio de venta del dólar acumula más de un año en valores inferiores a los 530 colones por dólar, lo cual significa una apreciación significativa de la moneda nacional respecto a los valores máximos del tipo de cambio en julio del 2022. La relativa estabilidad de este macro precio en valores cercanos a 500 se asocia con el encarecimiento de los bienes y servicios costarricenses, lo que se traduce en la pérdida de competitividad para el sector externo costarricense.

Monge y Sauma (2025b) sostienen que la política monetaria del BCCR ha sido cautelosa, justificando su postura en la incertidumbre global provocada por la tensión geopolítica internacional y las políticas comerciales de Estados Unidos. Esto ha generado un intenso debate entre el sector académico, los organismos internacionales y las cámaras empresariales, las cuales, en general, abogan por reducir la TPM para promover una política monetaria menos restrictiva.

### Estabilidad de precios mejora el poder adquisitivo de los hogares tras fuertes pérdidas

En el 2024 los hogares costarricenses experimentaron un crecimiento en sus ingresos por encima del aumento en los precios de sus dos principales divisiones de consumo: los *alimentos y bebidas no*

*alcohólicas* y el *transporte*. Esta situación implicó una mejora general en el poder adquisitivo de los hogares. Sin embargo, cabe destacar que desde el golpe económico por la pandemia del covid-19, el crecimiento en los precios de los bienes y servicios que más consumen las personas ha sido superior al de sus ingresos. El buen resultado del 2024 siguió, pues, a un período consecutivo de pérdidas en el poder de compra de los hogares.

Los últimos años se han visto marcados por la alta volatilidad en los ingresos y los niveles de precios de la economía mundial. La situación de Costa Rica no es una excepción. Dentro de estas variaciones destacan la caída en los ingresos con la pandemia del 2020 y un choque inflacionario en el 2022 que elevó fuertemente los precios de los bienes y servicios de los hogares. Persiste la percepción de que “el dinero alcanza menos”, pese a que los ingresos de los hogares han aumentado y se ha registrado un período de deflación de prácticamente dos años.

Comprender esta aparente paradoja implica analizar cómo han evolucionado los ingresos y el costo de la vida según el estrato socioeconómico. En el 2014, la mediana del ingreso neto per cápita de los hogares de altos ingresos es de 831.354 colones, mientras que en los del estrato medio es de 277.846 colones y en los del estrato bajo apenas de 95.012 colones. Estas diferencias reflejan una brecha considerable en los recursos disponibles para cubrir sus necesidades. Los bajos niveles de ingreso de los estratos medio y bajo siguen imponiendo importantes restricciones sobre la capacidad de compra de la mayoría de los hogares.

El gasto que realizan los hogares en las divisiones que componen el IPC varía significativamente según estrato de ingresos, en particular los alimentos y transporte, que representan el 24% y el 15% del gasto total de los hogares, respectivamente. Las diferencias más marcadas se dan en los alimentos: concentran el 37% del gasto de los hogares del estrato de ingreso bajo, mientras que en los de ingreso medio y alto es del 28% y el 18%, respectivamente.

El análisis desagregado por estrato de ingresos de lo ocurrido en el 2024 arroja

que, en efecto, los hogares de los estratos bajos y medios experimentaron una mejora en su poder de compra de los alimentos, mientras que el estrato de ingreso alto afrontó una menor mejora en su poder adquisitivo (gráficos 3.17). Este resultado responde a la estabilización de los precios, con una leve tendencia a la baja, al mismo tiempo que los ingresos promedio de los hogares crecieron.

La mejora del 2024 fue antecedida por un período en el cual los hogares experimentaron una reducción significativa en su poder de compra. La pandemia implicó una marcada caída en los ingresos, más pronunciada aún para los hogares del estrato bajo. El choque inflacionario del 2022 provocó un crecimiento vertiginoso en los precios de alimentos, con incrementos más pronunciados para los hogares de ingreso bajo. En este año, los ingresos de los hogares crecieron, pero a un ritmo mucho menor que la inflación en alimentos, lo que hace mella en el poder adquisitivo de los hogares.

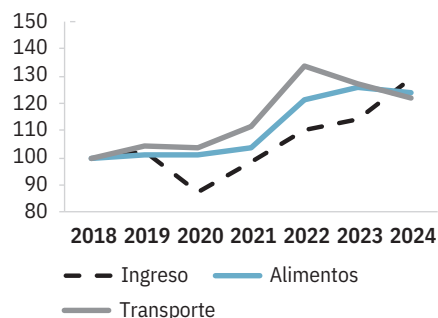
La evolución de los precios del transporte refleja un panorama muy distinto (gráficos 3.17). En el 2024, indistintamente del estrato, el crecimiento de los ingresos es mayor que el aumento de los precios del transporte. En gran medida, la disminución en los precios del transporte se explica por la menor demanda de los combustibles, que es un precio ancla del transporte. Después del choque inflacionario del 2022 tuvieron un descenso pronunciado y un estancamiento, muy asimétrico entre los estratos de ingresos. Los hogares de ingreso alto han sido los más beneficiados por las reducciones en los precios del transporte, seguidos por los de ingreso medio y por los de ingreso bajo.

En síntesis, indistintamente del estrato de ingreso, es comprensible que los hogares costarricenses aún no perciban mejoras en su poder adquisitivo. El 2024 ciertamente representó un alivio para el presupuesto de los hogares, pero le antecedieron cuatro años en los que afrontaron un aumento en los precios de sus principales bienes y servicios de consumo superior al de sus ingresos.

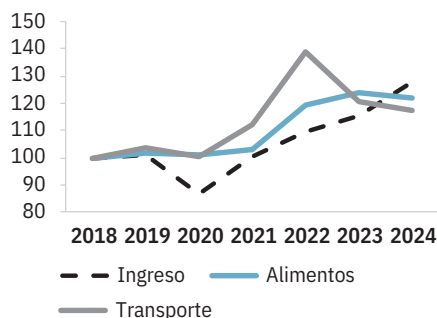
Gráfico 3.17

### Evolución del índice<sup>a/</sup> de ingreso nominal neto per cápita y del IPC por estrato del ingreso (base 2018 = 100)

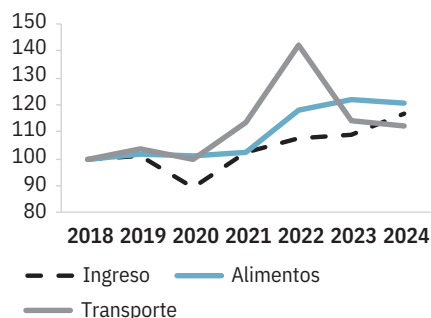
#### a) Estrato bajo



#### b) Estrato medio



#### b) Estrato alto



a/ Se utiliza el ingreso total y se segmenta en tres estratos: bajo (deciles del 1 a 3, 30% de menores ingresos), medio (deciles del 4 a 8) y alto (deciles 9 y 10, 20% con mayor ingreso). A cada uno se le estima su mediana de ingresos. Para medir el costo de la vida, se calcula el índice de precios al consumidor (IPC) en los rubros de alimentos y transportes.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR y del INEC.

### Política monetaria con dificultades para cumplir la meta de inflación

La economía costarricense lleva más de dos años en un escenario de inflación interanual cercana a cero y con la mayoría de los meses en valores negativos. Esta situación refleja la dificultad que afronta el BCCR para cumplir con la meta de inflación que orienta su política monetaria. Según el último *Informe de Política Monetaria (IPM)*, publicado en julio del 2025, se espera que la inflación medida por el IPC alcance el rango meta en el segundo trimestre del 2026 y que la inflación subyacente lo haga un trimestre antes. El incumplimiento de la meta ha generado un debate público a lo largo de la mayor parte del período bajo análisis. Mientras que el BCCR ha señalado que la tasa de política monetaria (TPM) está cercana a un nivel “neutro”, varios sectores han argumentado que la persistencia de una inflación cercana a cero es una señal clara para que el BCCR la reduzca. Al cierre de esta edición (setiembre del 2025), el BCCR aprobó una nueva baja de la TPM a un 3,5%, que siguió a la decisión de julio de este año de disminuirla a un 3,75%. En conjunto, ambas implicaron una importante disminución de 50 puntos base en solo un trimestre.

Antes de analizar los posibles elementos detrás de las dificultades para que la inflación nacional alcance su rango meta, es clave comprender que las metas de inflación son un enfoque moderno de política monetaria en el que la autoridad monetaria se compromete a mantener la inflación dentro de un rango específico (Monge y Sauma, 2025b). A diferencia de otros esquemas aplicados en Costa Rica, que priorizaban la estabilidad del tipo de cambio o incentivaban el crecimiento económico, este régimen pone la estabilidad de los precios como objetivo principal, aunque no el único.

Para mantener la inflación en el rango meta, la autoridad monetaria utiliza como principal instrumento la TPM (el costo del dinero para los bancos), con el fin de influir en el consumo, la inversión y, en última instancia, la inflación. Además, se busca ser transparente y creíble: el banco comunica sus decisiones de manera regular y clara, lo cual ayuda a que la población, las empresas y las inversionistas formen expectativas más estables. Monge y Sauma (2025b) señalan que el banco central utiliza la TPM para afectar la tasa de interés real, el tipo de cambio y las expectativas, que a su vez impactan la demanda agregada y la brecha del producto, logrando así que la

tasa de inflación converja hacia la meta establecida.

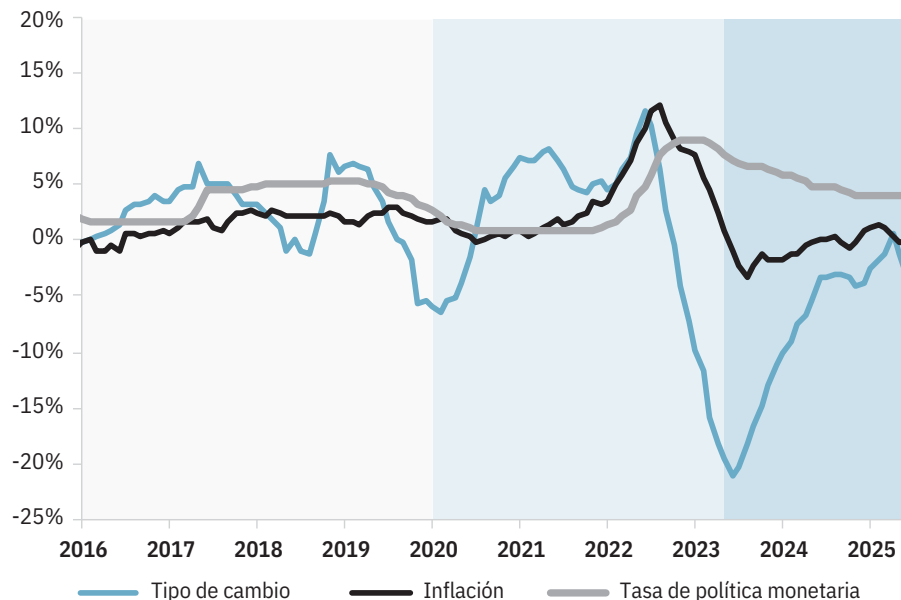
En Costa Rica, el régimen de metas de inflación empezó a desarrollarse hacia el 2005, pero fue hasta la publicación del Programa Macroeconómico 2016-2017 que el BCCR lo comunicó oficialmente (Muñoz, 2018). Desde entonces, su objetivo ha sido mantener una inflación cercana al 3%, con un margen de tolerancia de  $\pm 1$  punto porcentual, es decir, entre un 2% y un 4%. El instrumento principal para lograr este objetivo ha sido la TPM, que la Junta Directiva del BCCR ajusta periódicamente con el objetivo de enfriar o estimular la economía, según las presiones inflacionarias.

La última década ha estado marcada por eventos económicos trascendentales, tanto a nivel global como local, que han llevado a distintos manejos de la política monetaria por parte del Banco Central (Monge y Sauma, 2025b). Las autoras argumentan que el país afrontó un primer período de dominancia fiscal (2017-2019), el cual generó presiones inflacionarias y cambiarias, llevando al BCCR a elevar la TPM (gráfico 3.18).

En un segundo período (2020-abril del 2023), la economía costarricense, al igual que el resto del mundo, sufrió los embates de la pandemia y un choque

Gráfico 3.18

### Evolución de la inflación, la tasa de política monetaria (TPM) y la variación interanual del tipo de cambio<sup>a/</sup>



a/ Las áreas sombreadas resaltan tres divisiones según la tendencia del manejo de política monetaria por parte del BCCR, de acuerdo con Monge y Sauma (2025b). En primer lugar, está un periodo de “dominancia fiscal” con subidas en la TPM. En segundo lugar, se atraviesa por un periodo de “pandemia y alza de *commodities*”, marcado por reducciones en la TPM. En último lugar, se muestra el periodo actual que se ha caracterizado por una normalización monetaria.

Fuente. Monge y Sauma, 2025b, con datos del BCCR.

inflacionario. Para mitigar los efectos del covid-19 en la actividad económica y ante una baja inflación, el BCCR adoptó una postura expansiva, al reducir la TPM a mínimos históricos. No obstante, a partir del 2022, el entorno cambia drásticamente. La guerra entre Rusia y Ucrania impulsó un alza en los precios internacionales de alimentos y energía y las disrupciones en las cadenas de suministro postpandemia provocaron un aumento en los costos de transporte de mercancías, lo que en suma derivó en los fuertes incrementos en los precios al consumidor vistos anteriormente.

Con la inflación repuntando y el riesgo de que las expectativas se desanclaran, el BCCR inició un ciclo de alzas sucesivas en la TPM, llevándola hasta el 9% en el 2023 (gráfico 3.18). El objetivo era claro: contener las presiones inflacionarias y anclar las expectativas. Ya hacia finales de ese año, con la inflación a la baja y el

tipo de cambio estable, el BCCR empezó nuevamente a recortar la TPM, marcando así una nueva etapa de normalización monetaria.

Actualmente, el país se encuentra en un tercer período que inicia en mayo del 2023. Desde entonces, la inflación general y la subyacente se ubican consistentemente por debajo del rango meta que estipula el BCCR. En particular, esta última, que excluye los precios de los alimentos y la energía, al ser más volátiles y distorsionar la imagen general de la inflación, representa un comportamiento de los precios que va más allá de solo factores coyunturales. Su evolución es un “termómetro” de la actividad económica de un país, que orienta las decisiones de política económica y el comportamiento de los agentes.

Una posible interpretación de una inflación subyacente persistentemente baja es que podría indicar debilidad en

la demanda agregada (Ball y Mankiw, 2002) o que las expectativas inflacionarias permanecen ancladas por debajo de la meta establecida (Mankiw y Reis, 2002). No obstante, ninguno de estos escenarios se refleja en los datos oficiales de la economía costarricense.

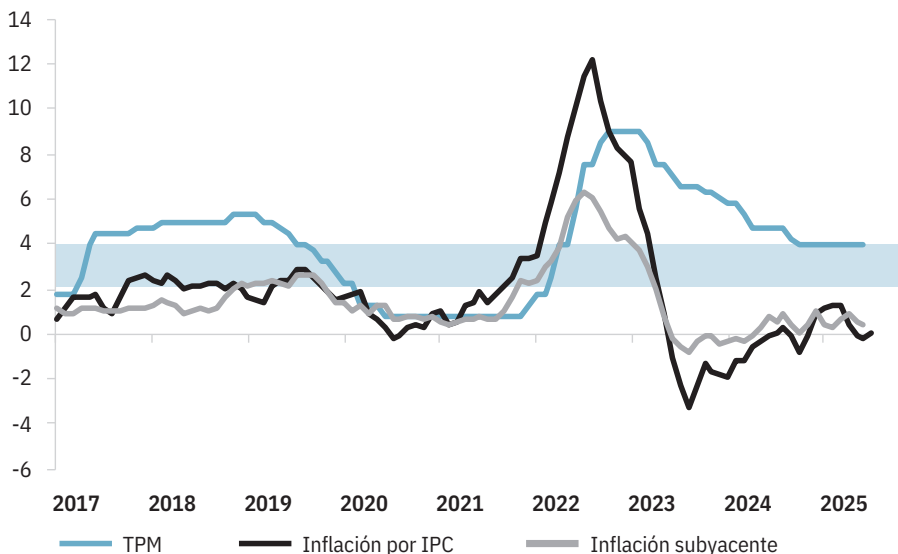
Según estimaciones del BCCR, la brecha de producto<sup>5</sup> se ha mantenido positiva, lo cual indica que la economía ha estado produciendo por encima de su capacidad potencial y, consecuentemente, debería generar presiones inflacionarias al aumentar la demanda agregada (gráfico 3.20). En este punto es clave resaltar que, aunque el crecimiento promedio de la producción nacional está por encima de la estimación de su potencial en prácticamente todos los meses posteriores a enero del 2023, como se argumenta en la secciones uno y dos del capítulo, esto no refleja la realidad de todos sectores de la economía. En gran medida, el crecimiento se concentra en el sector externo, mientras que la economía interna, particularmente ramas de actividad como la agropecuaria y construcción, decrecieron.

Las expectativas de inflación son un indicador clave de la confianza de consumidores, empresas y mercados sobre la evolución futura de los precios. Para analizarlas, en Costa Rica se aplican dos métodos de medición: una encuesta y la evolución de precios en el mercado. En particular, las expectativas de mercado a doce meses, como una de las medidas más estables, se encuentran dentro del rango meta establecido por la autoridad monetaria, aunque con una ligera inclinación hacia la banda inferior (gráfico 3.20). Monge y Suma (2025) sugieren que, pese a la demanda vigorosa y la percepción de estabilidad en la inflación futura, los agentes económicos parecen no anticipar un aumento significativo en los precios, lo cual limita la posibilidad de que se desencadene una espiral inflacionaria.

El análisis conjunto de la brecha de producto y expectativas inflacionarias muestra un escenario atípico. No hay señales de una demanda agregada débil ni expectativas inflacionarias que expliquen por completo la persistente baja

Gráfico 3.19

**Evolución de la tasa de política monetaria (TPM), la inflación subyacente y la medida por el índice de precios al consumidor (IPC)<sup>a/ b/</sup>**  
(porcentaje)

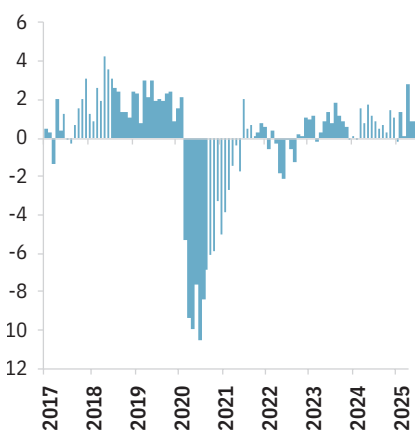


a/ La inflación medida por el IPC toma en cuenta el precio de todos los bienes y servicios en la economía, mientras que la inflación subyacente excluye los productos más volátiles y estacionales como alimentos, combustibles y artículos regulados.  
b/ El área horizontal sombreada corresponde al rango que el BCCR tiene como objetivo para la inflación medida por el IPC.  
Fuente: Elaboración propia con base en Monge y Sauma, 2025b y datos del BCCR.

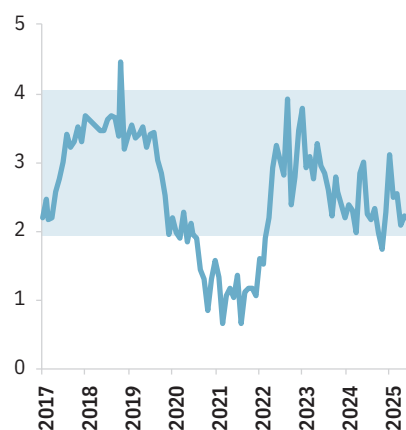
Gráfico 3.20

**Indicadores mensuales seleccionados de referencia para la política monetaria**  
(porcentaje)

a) Brecha entre el producto observado y potencial de la economía<sup>a/</sup>



b) Expectativas de la inflación a 12 meses<sup>b/</sup>



a/ La brecha de producto se calcula como la diferencia porcentual entre el producto observado (índice mensual de actividad económica desestacionalizado) y la estimación del producto potencial (que refleja la tendencia).  
b/ El área horizontal sombreada corresponde al rango que el BCCR tiene como objetivo para la inflación medida por el índice de precios al consumidor.  
Fuente: Monge y Sauma, 2025b, con datos del BCCR.

inflación que ha registrado la economía costarricense en los últimos veintiocho meses. Además, según las estimaciones del BCCR, podrían sumarse seis meses más en los que la inflación subyacente estaría por debajo de la meta y nueve en el caso de la inflación general.

Un factor fundamental para entender la inflación cercana a cero es el comportamiento del tipo de cambio. Si la moneda local se mantiene estable o incluso gana valor debido a la entrada de capitales, mayor confianza macroeconómica o políticas fiscales más sólidas, se reduce la inflación importada y, por lo tanto, se modera el crecimiento de los precios en bienes transables. En economías abiertas como Costa Rica, estos factores tienen un fuerte impacto en la inflación subyacente. Después de una significativa depreciación en el 2022, el colón se apreció hasta estabilizarse por debajo de los 530 colones por dólar (ver siguiente apartado), lo cual se relaciona con la inflación baja. Adicionalmente, como explica el BCCR en su último IPM, la disminución de los precios de los hidrocarburos reduce el componente importado de la

inflación y, en consecuencia, su nivel general (BCCR, 2025).

Entre los instrumentos que considera el BCCR para hacer ajustes a la TPM se encuentra la Regla de Taylor, la cual arroja como resultado un valor “óptimo” de la tasa de referencia para asegurar niveles de precios y producción conducentes a la estabilidad macroeconómica<sup>6</sup>. La aplicación de esta regla para la economía costarricense evidencia que a agosto del 2025 se presenta un margen para la reducción de la TPM, el cual se encontraba en ese momento por encima del valor sugerido. Además, se observa que la discrecionalidad del BCCR ha mostrado un sesgo al alza desde el 2022; es decir, la TPM ha presentado valores superiores a la tasa sugerida por la regla en prácticamente todos los meses comprendidos en este período. Como argumentan Monge y Sauma (2025), el resultado de la Regla de Taylor, sumado al escenario de inflación debajo del rango meta, sugieren que existe margen para mayores reducciones en la TPM. Apuntan que una de las posibles explicaciones de una TPM por encima del nivel recomendado por dicha regla es que el BCCR parece estar más orientado a evitar fuertes fluctuaciones en el tipo de cambio que a conducir la inflación de regreso al rango meta.

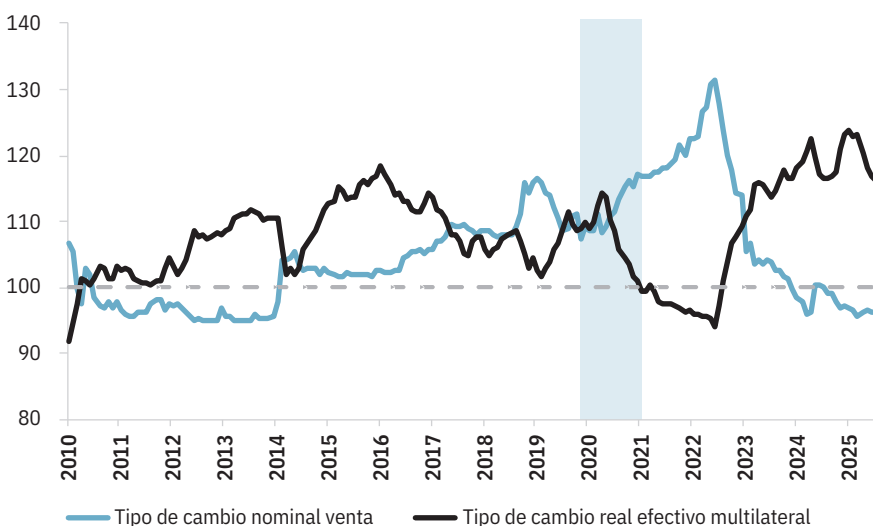
observada desde mediados del 2022, ha significado que los bienes y servicios costarricenses sean relativamente más caros, en el plano internacional, y esto incide de forma negativa en la competitividad del sector externo de la economía. La reciente pérdida en la posición competitiva del sector externo del país ha generado un constante debate sobre las medidas que podría tomar el BCCR para que el colón se deprecie y así recuperar competitividad externa.

Como se ha detallado en este capítulo, posterior a la pandemia de covid-19, la economía mundial ha enfrentado un alto grado de incertidumbre, lo cual ha generado una significativa volatilidad en el tipo de cambio del dólar (TC), como el macro precio asociado directamente al sector externo. A inicios del 2017, el TC registra valores cercanos a los 550 colones por dólar, que fluctúan con una tendencia alcista hasta alcanzar un máximo de poco más de 700 colones a mediados del 2022 (gráfico 3.21).

Hasta mediados del 2022, el sector exportador costarricense gozaba de una ventaja comparativa. La fuerte depreciación de la moneda luego de la pandemia implicó un abaratamiento relativo de los bienes y servicios costarricenses. Las personas con salarios en dólares vieron aumentados sus ingresos al pasarlos a colones, lo cual “artificialmente” incrementó su poder adquisitivo. La otra cara de la moneda era la del sector importador, que más bien experimentaba un incremento relativo en el valor de los bienes y servicios que importaba, y las personas con créditos en dólares, cuyas cuotas expresadas en colones aumentaron significativamente. La depreciación de la moneda también significó presiones inflacionarias por el efecto traspaso del tipo de cambio nominal a la inflación de la economía costarricense; efecto que ha sido documentado en análisis empíricos para Costa Rica (Gómez-Rodríguez y Sandoval-Alvarado, 2025).

Gráfico 3.21

**Evolución del índice del tipo de cambio nominal venta y el índice del tipo de cambio real efectivo multilateral para Costa Rica<sup>a/</sup>**  
(base 2010 = 100<sup>b/</sup>)



a/ El área sombreada vertical resalta el periodo de pandemia. Los periodos anteriores al área corresponden al mediano plazo, mientras que los periodos posteriores corresponden a los años postpandemia.

b/ El índice del tipo de cambio nominal de venta se construyó tomando como base el año 2010=100, mediante la normalización de cada valor con respecto al promedio anual de 2010, consistente con el índice de tipo de cambio efectivo multilateral.

Fuente. Elaboración propia con datos del FMI.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE

#### POLÍTICA MONETARIA

véase Monge y Sauma, 2025b, en [www.estadonacion.or.cr](http://www.estadonacion.or.cr)

#### Apreciación del colón afecta la competitividad del sector externo

En septiembre del 2025, el colón costarricense muestra una mayor fortaleza frente al dólar de los Estados Unidos, cuando se compara con los valores registrados desde enero del 2018. Al observar la evolución de la moneda nacional en un período más extenso, se nota que la apreciación reciente es poco común, especialmente considerando que Costa Rica es una economía pequeña y abierta.

La apreciación de la moneda nacional,

Luego de julio del 2022, el colón registró una tendencia clara a la apreciación, con un tipo de cambio que llegó a valores menores a los 500 colones por dólar, no observados desde hace más de una década. Al “volcarse la tortilla” este nivel del tipo de cambio generó preocupación en el sector exportador costarricense, que ha venido advirtiendo sobre la pérdida de competitividad que podría estar afrontando el país.

La evolución del índice de tipo de cambio real efectivo de Costa Rica, frente a sus principales competidores en ALC, respalda esta preocupación. Dicho índice refleja la evolución de los precios relativos de los bienes y servicios de dos economías, en este caso de los países de ALC respecto a los Estados Unidos, y muestra que los productos de exportación costarricenses se han encarecido en términos relativos del 2022 a la actualidad. En cambio, los bienes de los principales competidores en la región se han abaratado (gráfico 3.22).

Las preocupaciones sobre la pérdida de competitividad se han avivado con la desaceleración de la visitación turística entre enero y septiembre del 2025, en comparación con ese mismo período en el 2024 (ICT, 2025). El 2024 y lo que va del 2025 se caracterizan por una desaceleración del sector externo, marcado por los anuncios de la salida de varias empresas transnacionales o parte de sus operaciones. Recientemente, los cambios en la política comercial de la administración Trump han llevado la incertidumbre mundial a valores máximos. A pesar de que la desaceleración del sector externo responde a distintos factores, la apreciación de los bienes y servicios costarricenses debido al comportamiento de su moneda suma presiones al escenario incierto del sector externo, lo cual genera tensiones con la autoridad monetaria.

### Estabilidad fiscal continúa desatendiendo el financiamiento del desarrollo humano y aun así se debilita

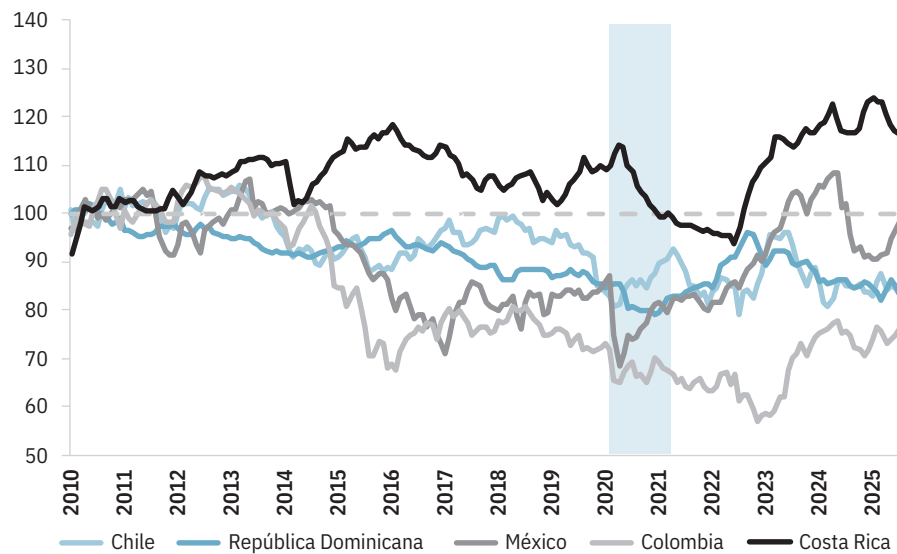
La cuarta sección aborda el tema de la solvencia económica del Estado costarricense, una de las aspiraciones normativas que guían año tras año el análisis que el *Informe* realiza sobre la economía del país. Ediciones previas han analizado la evolución de las finanzas públicas del Estado. Por muchos años apuntaron la existencia de un sendero de preocupante deterioro debido a un círculo vicioso de bajo crecimiento de los ingresos públicos, un rápido crecimiento del gasto empujado tanto por la ampliación de la “promesa democrática sin sustento”, leyes que crearon nuevos derechos y obligaciones públicas sin nuevos ingresos, como por el manejo de la política salarial pública. En consecuencia, se afrontó un rápido aumento del endeudamiento público después del 2009.

La reforma fiscal del 2018 modificó de forma abrupta estas tendencias. La disciplina de dos administraciones de gobierno sucesivas en aplicar las herramientas que esta creó en materia de ingresos, egresos y gobernanza logró posicionar al país en una senda de estabilidad fiscal. No obstante, estas mejoras trajeron aparejado un fuerte costo de desarrollo humano. Las medidas de recorte del gasto han desfinanciado temas clave para un crecimiento y desarrollo humano sostenidos e inclusivos como educación, salud, seguridad e infraestructura. En parte, este ajuste era inevitable porque la reforma aprobada fue parcial e insuficiente, especialmente en el ámbito del impuesto de renta (PEN, varios años). En parte, sin embargo, fue una decisión política del Ejecutivo de desfinanciar más a unos sectores sociales que a otros, especialmente en el caso de la educación y la salud pública. El *Décimo Informe Estado de la Educación* expresó que el gasto público educativo se ajustó siempre por debajo de lo que permite la regla fiscal (PEN, 2025).

En esta sección se analiza el estado y perspectivas de las finanzas públicas desde la perspectiva del desarrollo huma-

Gráfico 3.22

**Evolución del índice del tipo de cambio real efectivo multilateral para Costa Rica y países seleccionados de América Latina<sup>a/</sup>**  
(base 2018 = 100)



a/ El área sombreada vertical resalta el periodo de pandemia. Los periodos anteriores al área corresponden al mediano plazo, mientras que los periodos posteriores corresponden a los años postpandemia. Fuente: Elaboración propia con datos del FMI.

no. Esto significa que ese análisis va más allá de los grandes agregados de la política fiscal; al examinar el manejo de la contención del gasto público; particularmente, el estrujamiento que el servicio de la deuda está teniendo sobre áreas claves como el gasto de capital y la inversión social. El *Informe* también efectúa un análisis prospectivo y concluye que hay señales de debilitamiento o fatiga de la reforma fiscal, que ameritan ajustes para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

### País sostiene mejoría en solvencia de finanzas públicas en comparación con el período previo a la reforma fiscal

El próximo 4 de diciembre se cumplirán siete años de la publicación oficial de la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Esta ley significó una transformación importante en el marco normativo de la política fiscal del país. Entre sus principales reformas destaca la sustitución del impuesto sobre las ventas por un impuesto al valor agregado (IVA), cambios en el impuesto sobre la renta y, especialmente, medidas de contención del gasto a partir del diseño de una regla fiscal.

El aplicar la reforma fiscal por dos gobiernos sucesivos, junto con los efectos de la Ley 10059 Marco del Empleo Público del 2022, abrieron un sendero de mejoría de las grandes agregados de las finanzas públicas. Explican que, a junio del 2025, el gobierno central contase con un superávit primario (1% del PIB). Por primera vez en muchas décadas, el país ha tenido tres años consecutivos en los cuales los ingresos gubernamentales superan a sus egresos sin considerar los intereses por deuda.

La mejora en el balance primario se refleja en una disminución del déficit fiscal. A diferencia de lo prevaeciente en los últimos cuarenta años, en la actualidad la principal presión deficitaria no proviene de un gasto público en rápido crecimiento, sino del pago de intereses por endeudamiento interno y externo acumulado por el país (gráfico 3.23). El nuevo marco normativo abrió espacio para que, luego de un período de rápido crecimiento de

la deuda entre el 2009 y el 2021, el país haya podido reducir su nivel de deuda (acumulación de déficit fiscales). Así, a mayo del 2025, la deuda representaba el 57,7% del PIB, diez puntos menores que el 67,7% del 2021. Cabe recordar que el rápido crecimiento de la deuda está asociado, en parte, a la crisis financiera global del 2008 y la consecuente decisión de aplicar una política fiscal expansiva para mitigar sus efectos (Monge, 2024).

Los resultados actuales de la reforma fiscal contrastan con los del período 2019-2020, cuando, incluso con la reforma aprobada, las finanzas públicas continuaron deteriorándose hasta alcanzar un déficit fiscal de 8% del PIB (gráfico 2.23). En esos años, las medidas de la reforma aún no se implementaban por completo y, además, hubo un incremento en gastos y reducción en ingresos fiscales asociados con la pandemia.

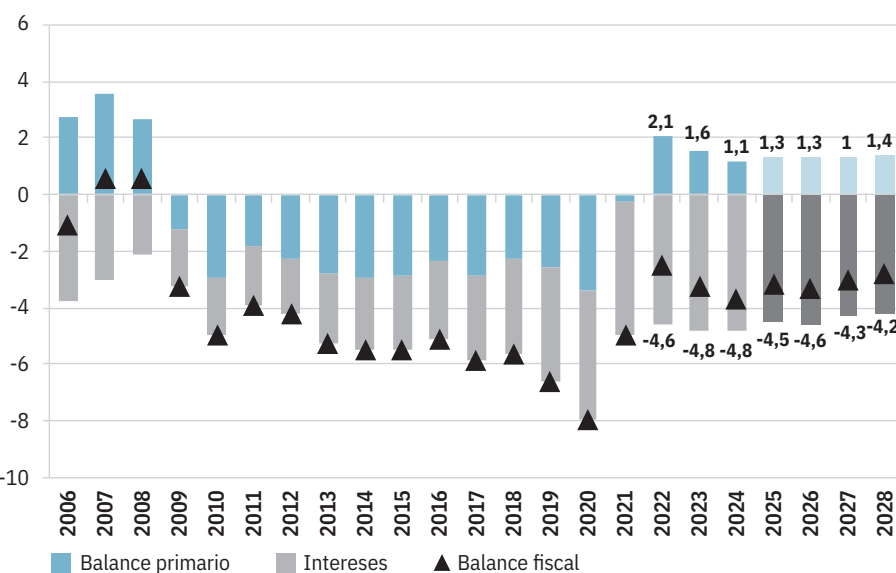
En esta edición del *Informe* se actualizó el análisis de los componentes que explican la mejoría de la situación fiscal del gobierno a partir de 2021. Se presentan

factores estructurales que contribuyen a este resultado, por ejemplo, la mejora en el balance primario debido a los factores arriba señalados. Este balance contribuye a reducir la deuda en 4,8 puntos del PIB desde el 2022. Sin embargo, destaca la significativa incidencia de una cambiante combinación de factores coyunturales: el crecimiento de la economía y, en años recientes, la evolución del tipo de cambio, que explican gran parte de su reducción.

El aporte del tipo de cambio a la evolución de la deuda pasa a ser favorable desde el 2022, con una contribución total desde ese año de 5,2 puntos del PIB a su reducción. Ello se asocia a la apreciación de la moneda en los últimos dos años. Por su parte, el crecimiento de la economía realiza un aporte total de 13,5 puntos del PIB entre el 2021 y el 2024, el cual es más del doble que la contribución agregada de los demás componentes, en buena medida por cambios metodológicos en la contabilidad de los ingresos del gobierno central explicados en ediciones anteriores (gráfico 3.24).

Gráfico 3.23

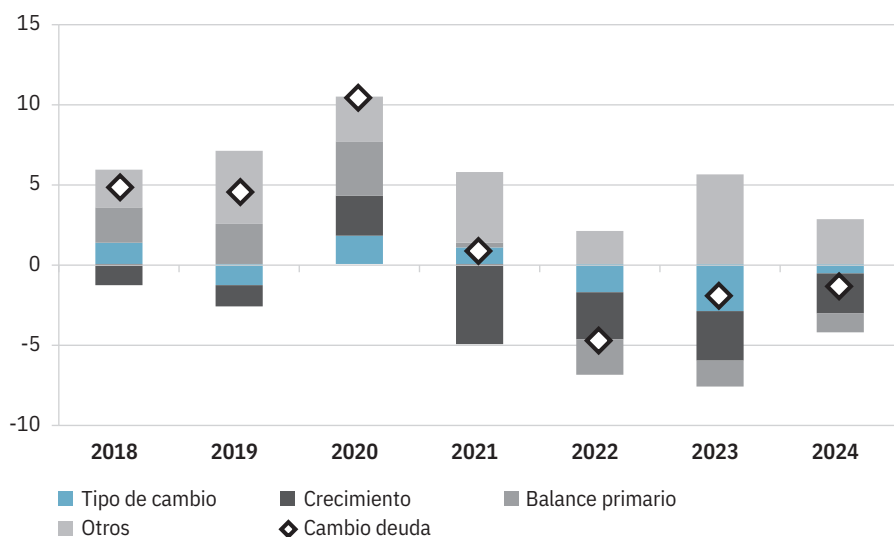
### Evolución del balance fiscal y sus componentes (porcentaje del PIB)



a/ Datos del 2025 en adelante son basados en proyecciones del Ministerio de Hacienda. Fuente: Monge y Sauma, 2025a, con datos del Ministerio de Hacienda.

Gráfico 3.24

### Evolución del cambio en la deuda pública del Gobierno Central por sus componentes<sup>a/</sup> (cambio en puntos porcentuales)



a/ El componente “Otros” agrupa: la tasa en colones, la tasa en US\$, la inflación en colones y en USD\$ y el residuo.

Fuente: Monge y Sauma, 2025a, con datos del Ministerio de Hacienda.

El resultado de la evolución de la deuda, aunque favorable, también refleja varias problemáticas. La deuda del Gobierno cuenta con un alto nivel de dolarización (cerca al 60% del total), por lo que la volatilidad del tipo de cambio es “un arma de doble filo”. La apreciación del colón ha permitido una fuerte reducción de la relación deuda/PIB en los últimos dos años. Sin embargo, incrementos en el tipo de cambio podrían presionar al alza esta relación.

Por su parte, los ingresos fiscales originados en el crecimiento económico tienen, como cabría esperar, un efecto positivo sobre las finanzas públicas. Sin embargo, su contribución a la estabilidad fiscal disminuyó en el 2024 y las perspectivas de desaceleración, comentadas en la primera sección, podrían afectar en forma negativa la posición de la deuda. Por último, de los componentes que explican la mejora reciente en la deuda, la única variable que el Gobierno puede controlar es el balance primario por el lado del gasto, y su evolución muestra una desmejora en los últimos tres años.

La mayor solvencia en las finanzas públicas del Estado, sumado a su crecimiento económico destacado, explican la mejora en la calificación internacional de riesgo país. Por ejemplo, en septiembre del 2025, la calificadora Moody’s Rating elevó la calificación de riesgo soberano de Costa Rica y le otorga la categoría “estable” (El Observador, 2025). También, en una publicación reciente del FMI se analiza positivamente el caso de Costa Rica, junto con el de otras economías, debido a la aplicación de una regla fiscal que ha permitido reducir sus costos de financiamiento (FMI, 2025c).

#### Menores ingresos y mayor gasto deterioran balance primario

La estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas siguen siendo una prioridad para la economía costarricense. Los análisis y publicaciones periódicas del Ministerio de Hacienda que permiten seguir el pulso a la salud fiscal del país señalan que, si bien el 2024 fue el tercer año consecutivo con un balance primario positivo, su magnitud disminuyó en relación con los años anteriores.

El decrecimiento del saldo primario está mayormente relacionado con el menor ritmo de crecimiento de los ingresos del Gobierno en el bienio 2023-2024, significativamente inferior al del 2021-2022 e, incluso, por debajo del observado entre el 2010 y el 2019. Esta situación se explica por la disminución en prácticamente todos los rubros tributarios y no tributarios. La menor recaudación del impuesto sobre la renta, que en los últimos 10 años representan el 33% de los ingresos, es la principal razón del descenso (gráfico 3.25).

El mayor crecimiento en los gastos del Gobierno en el período 2023-2024, en relación con el 2022, es el otro factor que explica la disminución en el superávit primario del año pasado. El pago de intereses es, dentro del gasto, el rubro con un mayor ritmo de crecimiento desde el 2019. Por su parte, las remuneraciones crecen significativamente en el 2024, lo cual responde al pago de salarios retroactivos por incrementos en el costo de la vida que no se reconocían desde el 2020. Por último, los gastos de capital, asociados con obras pendientes de ejecución desde hace varios años también crecieron significativamente en el 2024 (gráfico 3.26).

En suma, la reciente desaceleración en los ingresos tributarios y el incremento en los gastos primarios del Gobierno evidencian señales de debilitamiento de la reforma fiscal. Suman, además, presión al balance fiscal negativo, de por sí ya está presionado por el pago de intereses a la deuda. Debe recordarse que la acumulación de déficits se traduce en una mayor deuda pública, lo que puede comprometer en el mediano plazo el nivel de gasto público máximo permitido por la regla fiscal.

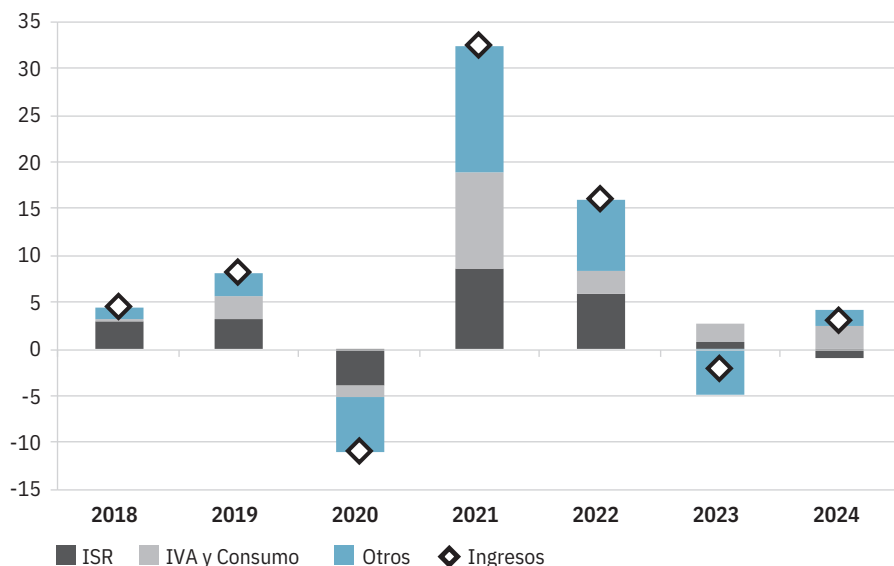
#### Servicio a la deuda sigue estrujando la inversión social y de capital

Desde hace varios años, el *Informe* ha destacado que la estabilidad fiscal se ha logrado en detrimento de la inversión social y mediante una considerable reducción del gasto de capital. Esta dinámica acarrea consecuencias negativas para el sendero de crecimiento económico y

Gráfico 3.25

**Evolución del cambio en el ingreso del Gobierno Central y sus componentes<sup>a/</sup>**

(Variación en puntos porcentuales)

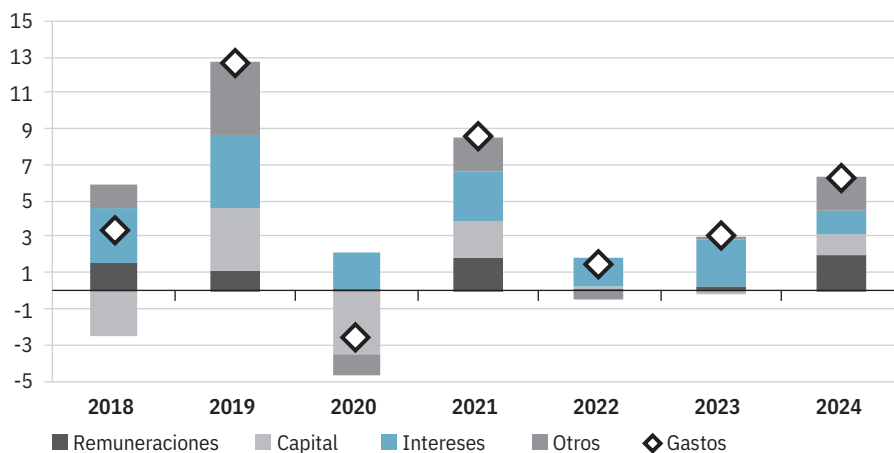


a/ El componente “Otros” agrupa: Contribuciones a seguridad social, Ingresos no tributarios y otros.  
 Nota: Impuesto sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA)  
 Fuente: Monge y Sauma, 2025a con datos del Ministerio de Hacienda.

Gráfico 3.26

**Evolución del cambio en el gasto del Gobierno Central y sus componentes<sup>a/</sup>**

(Variación en puntos porcentuales)



a/ El componente “Otros” agrupa: bienes y servicios y transferencias corrientes.  
 Fuente: Monge y Sauma, 2025a con datos del Ministerio de Hacienda.

desarrollo humano del país en el largo plazo. El control de los grandes agregados de la economía fiscal del Estado ha implicado, en la práctica, la subordinación de los objetivos de la política sectorial a las decisiones del Ministerio de Hacienda (PEN, 2024).

En el 2024 hubo un aumento de la inversión social pública, por primera vez en varios años (capítulo 2 de este Informe). Sin embargo, ese crecimiento fue un 25% menor que el del gasto total y un 16% menos que el del PIB. Es un resultado consistente con lo ocurrido en el 2022 y el 2023, en los que el gasto social creció en apenas la mitad del crecimiento del gasto total (gráfico 3.27).

El análisis del gasto funcional muestra cómo la inversión social cayó en áreas clave para asegurar un crecimiento económico inclusivo y de mayor desarrollo humano. El capítulo 2 efectúa un estudio en profundidad al respecto y expone los negativos efectos sobre los bienes y servicios que las políticas sociales entregan a la población. En el caso de los efectos que ha tenido sobre la educación pública, se recomienda consultar el *Décimo Informe Estado de la Educación* (PEN, 2025). En este capítulo solo se agrega que, en el caso de la salud, las consecuencias de la caída en la inversión sectorial se agravan cuando se considera que la deuda del Gobierno Central con la CCSS sigue en aumento, lo cual presiona aún más al sistema de salud costarricense. De hecho, si esta deuda fuera incluida dentro del balance fiscal del Gobierno Central, los números positivos de los últimos años serían claramente negativos.

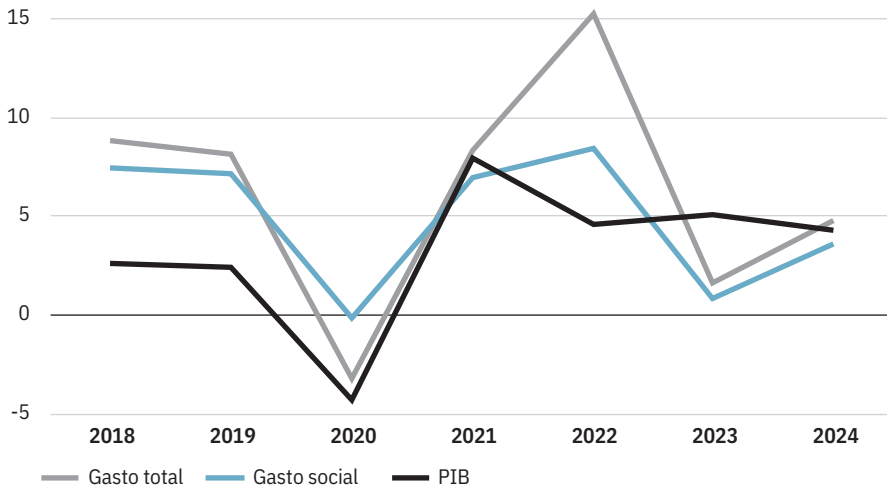
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE

**INVERSIÓN SOCIAL PÚBLICA**

véase el Capítulo 2 de este Informe en [www.estadonacion.or.cr](http://www.estadonacion.or.cr)

Gráfico 3.27

**Evolución del crecimiento real del gasto total, gasto social y el PIB (porcentaje)**



Fuente: Elaboración propia con datos de Monge y Sauma, 2025a con datos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Costa Rica.

**Rendimientos de reforma fiscal se debilitarán en el mediano plazo en ausencia de ajustes**

El análisis prospectivo de los resultados fiscales es clave para anticipar los resultados de las políticas implementadas y las posibles medidas de ajuste para mantener la senda de estabilidad fiscal. A partir de la información del Marco Fiscal Presupuestario de Mediano Plazo (MFPMP) del Ministerio de Hacienda, este Informe efectúa una prospección de las finanzas públicas del país. En esta edición, Monge y Sauma (2025a) utilizan el MFPMP 2025-2030 para plantear posibles escenarios para el próximo quinquenio.

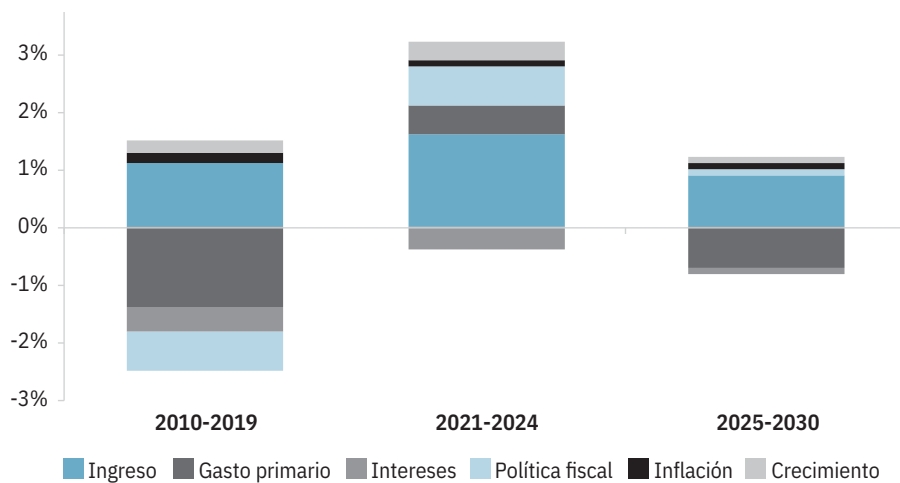
En la investigación se realiza una descomposición del impacto de las variables macroeconómicas y fiscales para separar los fenómenos coyunturales de los estructurales que afectan el balance fiscal. Entre sus resultados destacan que la pérdida de dinamismo en los ingresos del Gobierno Central continúa siendo un factor explicativo clave del deterioro fiscal, más allá del comportamiento del gasto y de otras variables macroeconómicas como el crecimiento de la economía y la inflación. Se espera que el aporte de los ingresos a la mejora de las finanzas públicas en el período 2025-2030 (0,9% del PIB) sea menor al realizado en el 2021-2024 y el 2010-2019, que son del 1,6% y 1,1%, respectivamente (gráfico 3.28).

En materia de gasto corriente, también se tiene prevista una desmejora. Entre el 2025 y el 2030, la contribución negativa al déficit fiscal del -0,7% del PIB, empeoraría con respecto a la del período 2021-2024 (-0,5%), aunque seguiría siendo mejor a la del mediano plazo de -1,4%. El pronóstico del pago de intereses para el próximo quinquenio sí reflejaría una mejora, al reducir su aporte negativo al déficit en -0,1% del PIB, en relación con el -0,4% realizado desde el 2010.

Los resultados derivados de la política fiscal, definidos como el cambio en el balance fiscal atribuible a los componentes directamente vinculados a las decisiones gubernamentales, mostrarán una disminución significativa de su contribución al superávit fiscal durante el período 2025-2030 en comparación con

Gráfico 3.28

**Contribución promedio al balance fiscal, por componente (porcentaje del PIB)**



Fuente: Elaboración propia con datos de Monge y Sauma, 2025a con datos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Costa Rica.

lo registrado entre el 2021 y el 2024. Es importante destacar que, a pesar de esta reducción, la situación sigue siendo considerablemente favorable si se compara con la evolución de las finanzas públicas observada antes de la reforma fiscal del 2018.

Al considerar la inflación y el crecimiento económico, los otros componentes clave de la evolución del balance presupuestario, se observa que el aporte positivo al superávit fiscal de la inflación se mantiene sin cambio entre los períodos 2021-2024 y 2025-2030. Sin embargo, el aporte positivo del crecimiento económico del 0,1% del PIB en el período 2025-2030 se reduce significativamente en relación con los aportes del 2021-2024 y 2010-2019, que fueron del 0,3% y 0,2%, respectivamente.

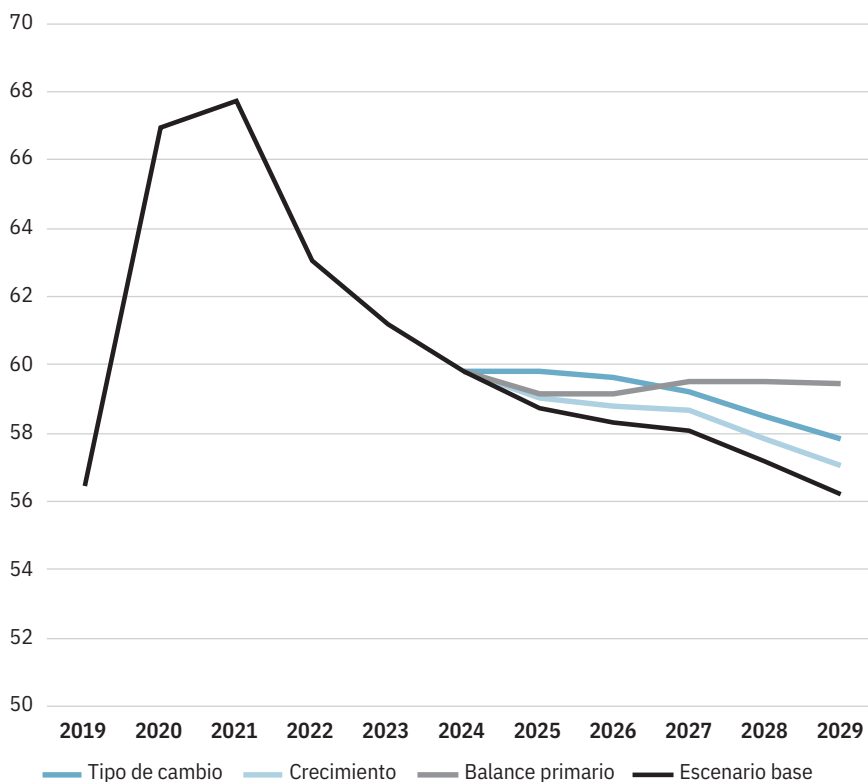
La combinación de política fiscal, inflación y crecimiento económico provoca una disminución de la solvencia fiscal entre 2025 y 2030, con un aporte neto al superávit primario del 0,3% del PIB, cifra menor al 1,1% registrado en el período 2021-2024. Sin embargo, estos efectos negativos que aparecen en el mediano plazo (-0,3% del PIB) tienden a quedar atrás.

El análisis prospectivo de las finanzas públicas también incluye la evolución de la deuda pública. La tendencia prevista de la deuda en el 2025-2029 es hacia la baja, pero esa dinámica puede verse afectada por diversas variables y las proyecciones están sujetas a incertidumbre. Por ello, se modelan escenarios de cuán sensible es ante choques (desviaciones en el valor esperado) en los componentes explicativos de su dinámica (gráfico 3.29).

Los resultados muestran que, en un panorama incierto donde convergen riesgos externos e internos para la economía costarricense, la evolución de la deuda puede tener distintos desenlaces. El choque que representa una reducción en el ritmo del crecimiento económico podría tener menor incidencia en la desaceleración de la deuda, seguido por el de depreciación del tipo de cambio. Aun suponiendo que alguno de estos escenarios se materialice, la deuda seguiría disminuyendo, solo que a un menor ritmo que en las condiciones actuales. El

Gráfico 3.29

### Escenarios<sup>a/</sup> de deuda pública del Gobierno Central ante cambios en las variables que explican su evolución (porcentaje)



a/ Escenarios de deuda bajo choques en tipo de cambio (depreciación del 3%), crecimiento (3%) y balance primario (1% del PIB), comparados con el escenario base de proyecciones macroeconómicas (Focus Economics y FMI).

Fuente: Monge y Sauma, 2025a.

choque en el balance primario sí podría suponer una desmejora significativa en la posición de la deuda con respecto a la del 2024. Incluso, representaría un retroceso a niveles cercanos al 60% del PIB en el 2027, lo cual significa un aumento en el gasto que no podría superar el 65% del crecimiento promedio del PIB nominal de los cuatro años anteriores.

Monge y Sauma (2025a) sistematizan medidas de ajuste que podrían coadyuvar a robustecer las finanzas públicas. En particular, destacan las mejoras en la regla fiscal como un elemento central en la gestión del gasto público. Las autoras destacan la efectividad de esta herramienta tanto para el caso costarricense como para el de otros países, pero tam-

bién la necesidad de efectuar modificaciones, a siete años de haberse aprobado. Más detalles de las medidas concretas se pueden consultar en su ponencia.

En general, esta sección evidencia que el reto de mantener la estabilidad fiscal del país convive con la necesidad de incrementar la inversión social y de capital, con el objetivo de crear círculos virtuosos en la economía nacional. La inversión pública en temas prioritarios como la seguridad, educación, salud e infraestructura, son catalizadores de un crecimiento económico sostenible e inclusivo, cuyos réditos compensan con creces los recursos invertidos.

El problema en el que se encuentra el país en la actualidad es doble. Por una

parte, la estabilidad fiscal se ha logrado a costa de reducir el financiamiento de la inversión social pública y de capital. La estabilidad contribuyó a reducir de forma significativa la relación deuda/PIB, pero esta sigue siendo alta, el servicio de la deuda es el principal disparador del gasto. Además, desde el punto de vista contable, no incluye la deuda acumulada del Gobierno Central con la seguridad social. Por otro lado, si no se realizan ajustes, es probable que los beneficios de la reforma de 2019 se debiliten en los próximos años. En consecuencia, Costa Rica todavía enfrenta el desafío de establecer una estabilidad fiscal que favorezca el desarrollo humano.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE

**POLÍTICA FISCAL**  
véase Monge y Sauma, 2025a, en  
[www.estadonacion.or.cr](http://www.estadonacion.or.cr)

### Desatención de condiciones habilitadoras del crecimiento inhibe potencial y profundiza brechas territoriales y productivas

Como se ha advertido en ediciones previas del *Informe Estado de la Nación*, el Gobierno costarricense han desatendido condiciones habilitadoras para asegurar la solvencia del aparato productivo y social del país. Entre estas condiciones destacan la inversión en infraestructura física como la de transportes, la seguridad ciudadana y la promoción de medidas de resiliencia ante el cambio climático, las cuales son clave para potenciar un crecimiento económico sostenido e inclusivo, que contribuya con el cierre de las brechas territoriales y productivas.

En esta sección se muestra cómo la insuficiente inversión en infraestructura de transportes, la crisis de inseguridad y los daños ocasionados por los eventos climáticos extremos inciden de forma negativa en la economía costarricense y con mayor severidad en sectores económicos y territorios con mayor rezago, lo cual profundiza las brechas existentes.

### Rezago en inversión en infraestructura de transportes genera altos costos económicos

Un reto nacional que ha sido discutido en ediciones previas del *Informe Estado de la Nación* es la insuficiente inversión en infraestructura, particularmente, la de transportes. La evidencia empírica sugiere que esta puede tener efectos positivos en la economía a través de una mejora en la productividad de los factores de producción como el trabajo y el capital privado, lo cual resulta en un menor costo de producción unitario y una mayor tasa de retorno para las inversiones privadas (Ferrari et al., 2019; Medeiros et al., 2025).

De igual manera, la infraestructura de transportes es clave en el desarrollo de otros tipos de infraestructura económica como la electricidad, las telecomunicaciones y el agua, así como en la integración económica y social de las personas, sobre todo de quienes habitan los territorios más remotos del país. Otro aspecto relevante es que el rol habilitador de la infraestructura de transportes para el desarrollo económico depende del nivel y la calidad de los caminos y puertos disponibles, donde un nivel de inversión insuficiente puede obstaculizar la actividad económica (Cavallo y Powell, 2019).

Los *Informes* de 2022 y 2024 muestran que, tras la crisis económica del 2009, la deuda pública y el déficit fiscal crecieron rápidamente, lo cual afectó de forma negativa la inversión en infraestructura. La reducción del gasto en este sector se acompañó de un mayor endeudamiento como fuente de financiamiento. Además, la mejora fiscal ha representado sacrificios en el gasto de capital, situándose en apenas un 1,3% del PIB, cifra inferior a la registrada antes del 2018. Prácticamente todas las categorías de gasto real de inversión en infraestructura física han disminuido, con un estancamiento general en los gastos de mantenimiento y una fuerte caída de este último rubro en la infraestructura del sector de transportes.

En esta nueva edición del *Informe*, Madrigal Quesada y González Tenorio (2025) profundizan en el análisis de los costos económicos que la insuficiencia

y deficiente gestión de la inversión en infraestructura de transportes generan al país. En particular, se aporta nueva evidencia sobre los costos efectivos o potenciales asociados con no invertir o hacerlo tarde y en forma deficiente.

### Inversión en infraestructura de transportes es baja y sigue decreciendo

El promedio del gasto de inversión en infraestructura de transportes en el país en el período 2014-2024 fue del 0,78% del PIB, donde 0,53 puntos se dedicaron a nuevas construcciones y solo 0,25 puntos al mantenimiento y la reparación (gráfico 3.30). Adicionalmente, desde el 2020 la inversión en infraestructura de transportes cayó en promedio un 0,50% en el período 2021-2024 y especialmente en el mantenimiento.

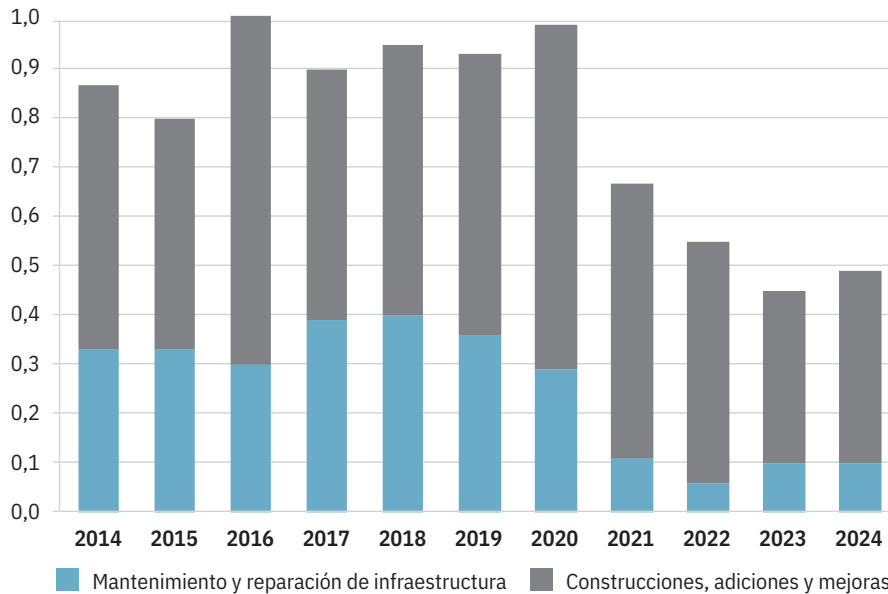
Madrigal Quesada y González Tenorio (2025) señalan que la inversión actual es insuficiente para avanzar en el cierre de los rezagos existentes en relación con los requerimientos de inversión que han sido estimados. Brichetti et al. (2021) estimaron que el cierre de la brecha de transportes en Costa Rica requiere de una inversión cercana al 1,56% del PIB anual. Mientras que el MOPT (2011) estimó que la inversión necesaria para ejecutar las obras planteadas en el *Plan Nacional de Transportes 2011-2035* equivale al 3,99% del PIB anual entre los años 2019 y 2035 (gráfico 3.31).

### El costo de no invertir en infraestructura de transportes o hacerlo mal y con atrasos

Más allá de estimar el rezago de la inversión en infraestructura, existe evidencia de los costos económicos, sociales y ambientales que generan al país. Este rezago repercute de forma negativa en la eficiencia de la movilidad y tiene un impacto directo en la calidad de vida de la población, así como en la competitividad y la sostenibilidad urbana. Los costos asociados a la problemática de transportes, considerados únicamente los ingresos empresariales perdidos para el 2024, ascienden al 1,58% del PIB (Madrigal Quesada y González Tenorio, 2025). Al focalizarse en la Gran Área

Gráfico 3.30

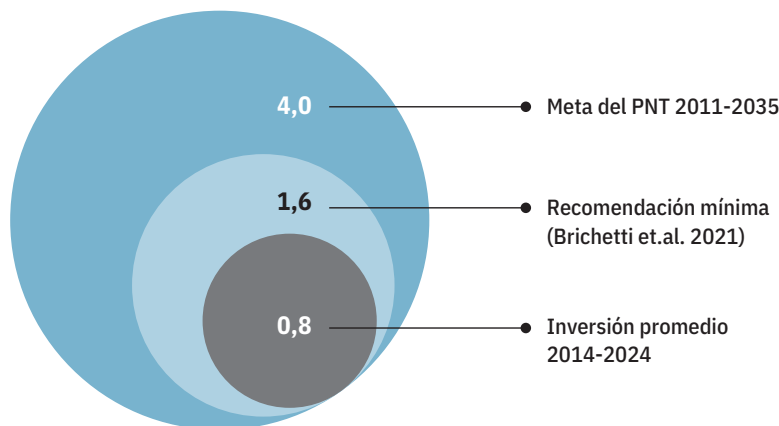
**Evolución del gasto en infraestructura de transportes como porcentaje del PIB**



Fuente: Madrigal Quesada y González Tenorio, 2025, y datos de la CGR, 2025, y el BCCR, 2025.

Gráfico 3.31

**Inversión promedio en infraestructura de transportes 2014-2024<sup>a/</sup> y estimaciones de requerimientos de inversión<sup>b/</sup> (porcentaje del PIB)**



a/ Los datos del 2024 son preliminares.

b/ Según el MOPT y Brichetti et al. (2021)

Fuente: Valverde-Cordero, 2025, con base en Madrigal Quesada y González Tenorio, 2025.

Metropolitana (GAM), estos costos superan el 4% del PIB correspondiente a cada año, según las metodologías y estimaciones empleadas (Sánchez, 2019; AC&C y Gensler, 2017).

Adicional a las pérdidas generadas por el rezago de inversión en infraestructura de transportes, la deficiente gestión de proyectos clave para el país ha significado prolongados atrasos que se traducen en sobrecostos, los cuales llegan a ser hasta del 65% del presupuesto original y, aun así, los proyectos presentan deficiencias estructurales significativas (Madrigal Quesada y González Tenorio, 2025).

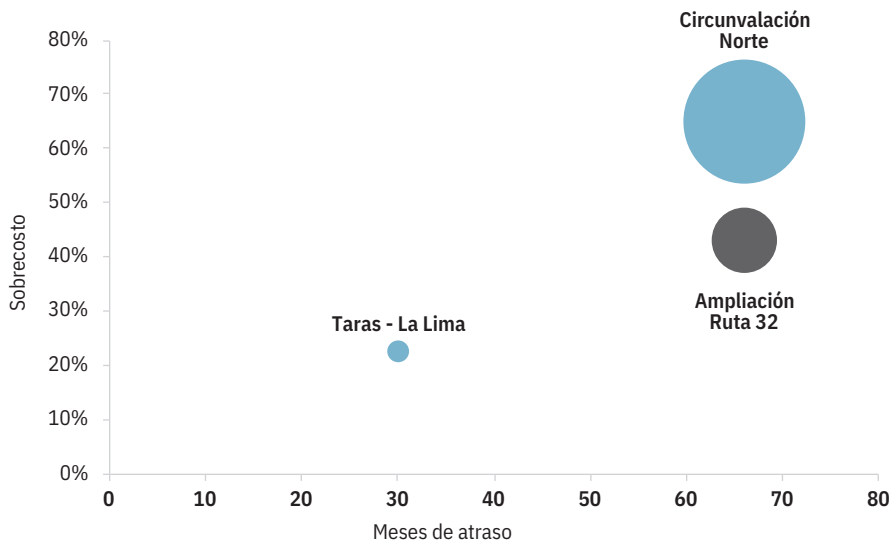
Los autores analizan cuatro proyectos de gran envergadura para el país:

- Los pasos a desnivel y ampliación de la Ruta Nacional 39 (Circunvalación).
- La intervención en las intersecciones de Taras y La Lima en Cartago.
- La ampliación de la Ruta Nacional 32 hacia Limón.
- El estado actual de los puentes de la red vial nacional, cuya condición estructural refleja años de desinversión en mantenimiento.

Como se muestra en el gráfico 3.32, el tiempo de atraso van desde los 30 meses en Taras-La Lima (aún en ejecución y podría atrasarse más) hasta los 66 meses en la Circunvalación Norte y Ruta 32 (este último también en ejecución). Los sobrecostos de estos proyectos son, respectivamente, del 23% y el 43% del presupuesto inicial (ambos sin concluir), mientras que en Circunvalación Norte el sobrecosto asciende al 65%. La suma del costo adicional en que se incurre por atrasos en estos tres proyectos asciende al 0,64% del PIB en el 2024. A pesar de los sobrecostos y atrasos en los proyectos, la Ruta 32 (sin haber concluido) presenta deficiencias graves, mientras que la Circunvalación Norte y Taras-La Lima (esta última en proceso), presentan deficiencias importantes (LanammeUCR, 2025).

Gráfico 3.32

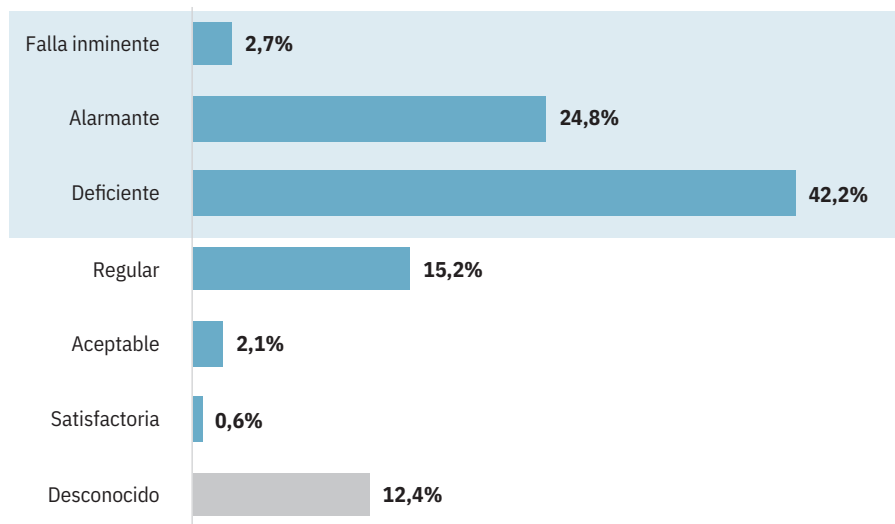
**Proyectos clave de infraestructura por meses de atraso y sobrecosto como porcentaje del presupuesto inicial, según su estado de deficiencia estructural<sup>a/</sup> y el costo final<sup>b/</sup>**



a/ La burbuja más oscura corresponde a un estado de deficiencias graves, la más clara a deficiencias importantes.  
 b/ El tamaño de la burbuja representa el costo final: 71 millones de dólares para Taras-La Lima, 657 para la ampliación de la Ruta 32 y 2.335 para Circunvalación Norte.  
 Fuente: Bogantes y Vargas-Montoya, 2025, con base en Madrigal Quesada y González Tenorio, 2025 y datos del LanammeUCR.

Gráfico 3.33

**Distribución del estado de los puentes de la red vial nacional. 2024 (porcentaje)**



Fuente: Elaboración propia con base en Madrigal Quesada y González Tenorio, 2025, y datos de Rodríguez *et al.* 2025.

Para dimensionar esta problemática, resulta útil comparar los porcentajes de sobrecosto registrados en estas obras con los promedios de otras regiones del mundo. De acuerdo con la base de datos ROCKS (Road Costs Knowledge System), los resultados varían considerablemente entre regiones (Banco Mundial, 2024). En Europa y Asia Central, los proyectos muestran incluso ahorros promedio del -2,5%, mientras que en Asia Oriental y el Pacífico los incrementos son moderados, con un promedio del 5,88%. En contraste, Asia del Sur reporta un promedio de sobrecosto del 44,44%, América Latina y el Caribe del 78,57% y África Subsahariana alcanza el 100%.

La infraestructura de puentes en la red vial nacional también ha sido objeto de importantes intervenciones, tanto en procesos de rehabilitación como en la construcción de nuevas estructuras. Estas obras son fundamentales para garantizar la conectividad territorial, la resiliencia ante eventos climáticos extremos y la seguridad de las personas usuarias. Sin embargo, los puentes en rutas nacionales enfrentan un serio deterioro, producto de años de desinversión en mantenimiento básico y reparaciones urgentes. Esta situación ha comenzado a provocar consecuencias tangibles.

Como se observa en el gráfico 3.33, según un Informe técnico de LanammeUCR, el 70% de los puentes se encuentra en estado “alarmante”, “falta inminente” o “deficiente”, lo cual evidencia un deterioro progresivo y la urgencia de intervenciones, ante un riesgo latente para la continuidad del tránsito y la seguridad vial (Rodríguez *et al.*, 2025).

La importancia de esta información radica en que la falta de mantenimiento y reparaciones oportunas puede derivar en cierres parciales o totales de puentes, con consecuencias económicas significativas para las personas usuarias. Esto afecta la movilidad e incrementa los costos operativos de los vehículos (combustible, mantenimiento, desgaste) y el tiempo de traslado, lo cual genera pérdidas para conductores particulares, transporte de mercancías, transporte público y comunidades locales. Diversos estudios han destacado que retrasar el

mantenimiento de la infraestructura en general acrecienta los costos totales y el valor presente de los costos futuros (Gwilliam y Shalizi, 1999). Harral y Faiz (1988) estimaron que restaurar caminos deteriorados puede costar entre tres y cinco veces más que realizar un mantenimiento oportuno.

Con el fin de ilustrar la magnitud de la pérdida económica asociada a la problemática con el estado de los puentes, se analiza el caso del río Tempisque (gráfico 3.34). Para ello, primero se debe considerar el valor de reposición: el costo estimado de reconstruirlo completamente, incluyendo todos los gastos para levantar una nueva estructura con características similares, tales como diseño, materiales, mano de obra, maquinaria, etc. De acuerdo con un *Informe técnico* del LanammeUCR, un cierre parcial del puente sobre el río Tempisque durante 121 días implicaría un costo para las personas usuarias equivalente a 1,38 veces su valor de reposición (Oviedo et al., 2024). No obstante, si se llegara a un cierre total, ese costo se dispararía hasta 15,78 veces. Además, el análisis del LanammeUCR estima los costos operativos por tipo de

vehículo y el tiempo adicional de traslado, lo cual plantea que, en muchos casos, los costos indirectos percibidos pueden superar ampliamente el costo directo de la intervención (Solera et al., 2025).

En síntesis, el análisis de los costos asociados con los problemas de inversión en infraestructura de transportes muestra que el país está soportando altos costos económicos, que van en detrimento de un crecimiento económico sostenido. La atención del rezago en infraestructura requiere un cambio de paradigma en el cual, en paralelo, aumente de forma significativa la inversión pública y se garantice un diseño y ejecución eficiente de los proyectos. La desatención de la inversión en infraestructura también perjudica la calidad de vida de las personas y contraviene el cumplimiento de los objetivos de desarrollo humano sostenible.

### Epidemia de inseguridad amenaza un desarrollo económico sostenido e inclusivo en Costa Rica

Costa Rica ha construido su reputación como una nación atractiva para el turismo, el comercio y la inversión

gracias a una democracia estable y niveles de capital humano que superan la media regional. Esta combinación ha favorecido el desarrollo de actividades sofisticadas y altamente especializadas, como los servicios profesionales, la manufactura de dispositivos médicos en régimen de zona franca y el fortalecimiento del sector turístico. Sin embargo, el reciente aumento en los niveles de criminalidad pone en duda la percepción de seguridad y la confianza en el sistema institucional del país.

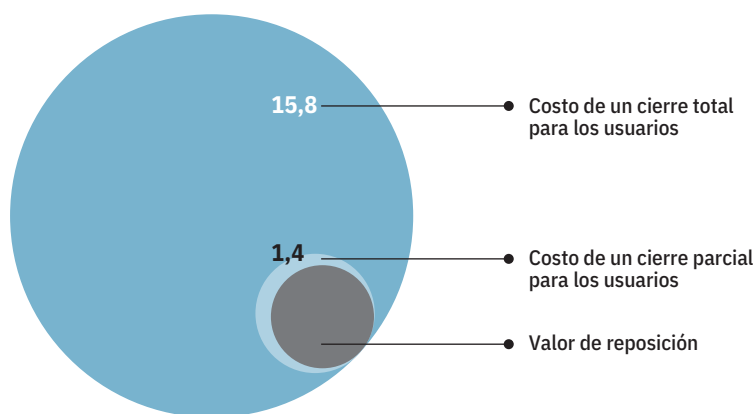
De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Costa Rica registró 906 homicidios en el 2023, la cifra más alta de su historia. En el 2024 se contabilizaron 872 homicidios y, según las proyecciones del OIJ, en el 2025 podrían alcanzarse 900 homicidios aproximadamente (gráfico 3.35). El país tiene la séptima tasa de homicidios más alta de América Latina y la segunda en Centroamérica, con 16,6 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2024. Para la OMS, el país presenta una epidemia de homicidios (Digepaz, 2014). Estas cifras distan mucho de lo sucedido menos de un quinquenio atrás, cuando Costa Rica gozaba de tasas de homicidios muy por debajo de la media centroamericana.

El incremento de la violencia está vinculado, principalmente, a operaciones de organizaciones dedicadas al narcotráfico. El país se ha convertido en un punto estratégico de transbordo de drogas provenientes de Sudamérica con destino a Estados Unidos y Europa (Department of State, 2024). Los carteles internacionales contratan a bandas locales para el traslado de la droga y, recientemente, han utilizado los puertos nacionales para el tráfico interoceánico mediante el uso de contenedores. La disputa por el control de rutas y territorios ha provocado enfrentamientos entre grupos criminales, responsables de aproximadamente el 70% de los homicidios en los últimos años (OIJ, 2024).

En la edición del 2024 de este *Informe*, Vargas-Montoya et al. (2024) realizaron una estimación econométrica de la relación inversa entre las denuncias por accionamiento de armas y los salarios de quienes trabajan en empresas formales

Gráfico 3.34

### Costo del cierre parcial o total<sup>a/</sup> del Puente del Tempisque en relación con su valor de reposición<sup>b/</sup>. 2024



a/ Los valores de 1,4 y 15,8 veces indican el incremento en el costo con respecto al valor de reposición que asumirían los usuarios en caso de cierre parcial o total, respectivamente.

b/ El valor de reposición corresponde al costo de reconstruir totalmente el puente durante 121 días. De acuerdo con Oviedo et al. (2024), este costo se estima en \$3.300 por m<sup>2</sup>.

Fuente: Valverde-Cordero, 2025, con base en Oviedo et al., 2024, y la sistematización de Madrigal Quesada y González Tenorio, 2025.

del sector comercio con datos cantonales al 2023. Los autores encontraron que las mayores tasas de denuncias por accionamiento de armas se asocian con menores salarios y el mayor accionamiento de armas en los cantones hace que su actividad comercial se desplace a territorios aledaños. Las cifras al 2024 muestran que la tasa de denuncias por accionamiento de armas sigue en aumento, lo cual podría estar reforzando esta relación inversa (gráfico 3.35).

### Inseguridad genera altos costos económicos y sociales

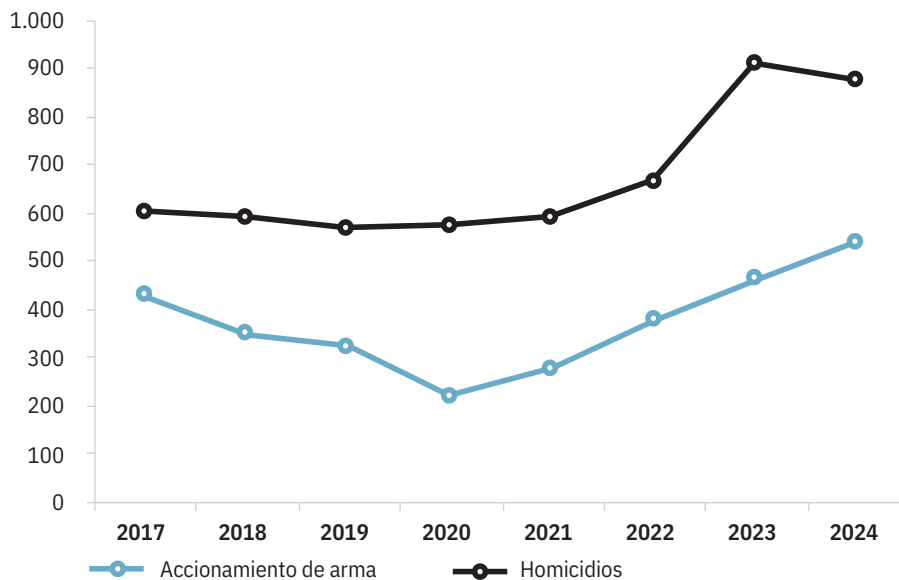
El crimen genera costos susceptibles de ser monetizados, tales como aquellos derivados de los procesos de aprehensión y el proceso legal para juzgar a quien comete el delito; considerados como costos directos. Además, se asocia con pérdidas de bienestar, como la reducción en los niveles de productividad y empleo que, al no ser directamente cuantificables, se conocen como costos indirectos. Existe, asimismo, un conjunto de costos cuya valoración resulta particularmente compleja, como la reducción de movilidad de las personas debido al temor o a la percepción de inseguridad; estos se clasifican como costos intangibles (Soares, 2010).

El costo directo del crimen en Costa Rica ya se ha medido. El BID, junto con otros socios en ALC, ha realizado esfuerzos para contabilizar el costo del crimen en la región. Los autores estiman que el costo regional para el 2022 fue de un 3,4% del PIB, lo cual corresponde al 80% del presupuesto destinado a la educación. Para Costa Rica, el costo promedio del crimen ascendió al 3% del PIB en el 2022, con un 45% del total concentrado en costos privados (Pérez-Vicent et al., 2024).

La CGR también ha realizado mediciones sobre el costo directo del crimen para el país. Destaca como uno de sus principales resultados que, el costo de capital humano asociado con los homicidios del período 2018-2023 en Costa Rica asciende a 542.000 millones de colones (0,2% del PIB por año), los cuales equivalen al 94% del Fondo Especial para la Educación Superior (CGR, 2025).

Gráfico 3.35

### Cantidad de homicidios y denuncias por accionamiento de armas ingresadas al OIJ



Fuente: Bogantes, 2025, con base en Vargas-Montoya, 2025a y datos del OIJ.

También, Gimenez y Barrado (2020) analizaron si la exposición al crimen violento (homicidios) en los distritos afecta el rendimiento académico; este último medido con el resultado de las pruebas PISA 2012 en lectura, matemáticas y ciencias. Los autores concluyen que la exposición al crimen reduce significativamente el rendimiento educativo en las tres asignaturas evaluadas y que las pérdidas de rendimiento encontradas implican entre 56 y 85 días adicionales de clases al año.

La literatura suele analizar los datos por sectores económicos, con especial énfasis en el turismo. Un tema que se ha discutido en Costa Rica es si el incremento en los homicidios ha causado una disminución en las visitas extranjeras. Para ampliar, el recuadro 3.2 muestra un análisis preliminar para promover la discusión basada en datos y plantea la necesidad de realizar estudios a profundidad que traten de medir la relación causal entre estos dos fenómenos.

Los homicidios son el delito que genera mayores costos tangibles e intangibles en la sociedad (Wickramasekera et al.,

2015), lo cual es una alerta ante la situación que está viviendo el país; particularmente cuando se analizan los patrones territoriales. Los mapas 3.1 reflejan que en el período 2017-2018 (panel a) y el 2023-2024 (panel b) se registra un incremento generalizado en las tasas de homicidios en todo el país, así como los cambios en su distribución territorial. En particular, se observa que los cantones del litoral pacífico presentan la escalada más significativa en las tasas de homicidios, y con una mayor severidad en los ubicados en el Pacífico Norte y Pacífico Central.

Los cantones más afectados por la escalada en los niveles de criminalidad se pueden precisar mejor con matrices de transición, como la del diagrama 3.2. Como se observa, San José y los cantones del caribe costarricense Limón, Siquirres y Matina se mantienen como aquellos con mayores tasas de homicidios en los dos períodos comparados. Otros cantones como Alajuelita, Guácimo, Nicoya, Puntarenas, Parrita, Corredores y Garabito pasaron de tener tasas de homicidios medias a altas, en algunos

Recuadro 3.2

Un primer acercamiento a la relación entre la visitación turística y los homicidios

El turismo es uno de los sectores económicos más relevantes para la economía nacional. Este sector aporta el 7,7% del empleo directo y el 25% del empleo indirecto del país y cerca de 5.500 millones de divisa (ICT, 2024b). A pesar de la popularidad de Costa Rica como destino turístico internacional, caracterizado por su exuberante naturaleza y biodiversidad, así como por el buen trato y servicio, también se ha señalado una aparente pérdida de competitividad explicada por varios factores (Canatur, 2025). Entre estos se destaca un costo de vida relativamente alto, una moneda que se ha apreciado en los últimos meses y, recientemente, se viene apuntando al incremento acelerado en los niveles de criminalidad.

La inseguridad puede ser un riesgo para la industria turística, pues desmotiva la llegada de turistas, especialmente internacionales, y genera costos adicionales. En estudios como el de Corona (2018) se ha encontrado que los crímenes violentos tienen un impacto negativo en la llegada de turistas. Esto porque las personas visitantes son más sensibles a eventos

que pudieran dañarlas físicamente, dada una percepción alta de riesgo. Este efecto es más relevante para el turismo extranjero, porque sus principales fuentes de información son los medios internacionales que con frecuencia presentan noticias de modo sensacionalista (Corona, 2018).

En Costa Rica, se ha observado un aumento considerable de este tipo de noticias. Por ejemplo, Le Monde publicó un artículo titulado *Costa Rica: «la Suiza de América Latina» hundida en el tormento del narcotráfico* (Vigna, 2025); The Guardian (2024) destacó la importancia del tráfico de cocaína en el país en una noticia sobre la deforestación y conservación. Además, en septiembre del 2024, El País resaltó el riesgo del turismo en Costa Rica ante la ola de narcotráfico (Murillo, 2024) y Deutsche Welle (2024) subrayó el desafío al que se enfrenta el Estado ante la criminalidad. Estas noticias son de interés porque tienen una alta difusión en el público internacional. Por lo tanto, es posible que existan implicaciones en la llegada de turistas, así como otros costos asociados a la criminalidad como el incremento en gastos por seguridad (Motta, 2016).

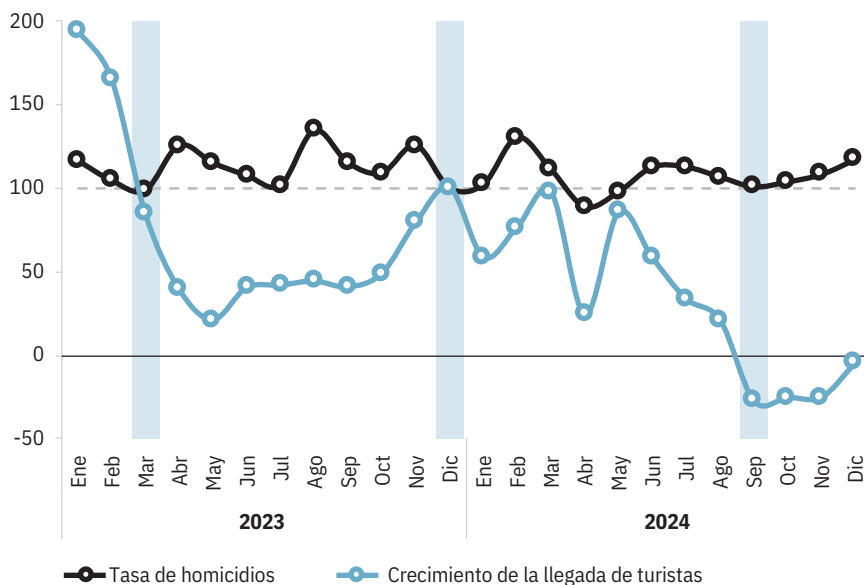
El argumento de que la inseguridad podría relacionarse con una caída en el turismo extranjero se puede analizar al comparar las estadísticas de la visitación turística contra las tasas de homicidios. Como se observa en el gráfico 3.36, existe una correlación inversa entre las llegadas de turistas por la vía aérea y las tasas de homicidios, en los meses posteriores a la alerta emitida por la Embajada de los Estados Unidos, en marzo del 2023, y las publicaciones en medios internacionales en septiembre del 2024. En general, las oleadas de homicidios o eventos alarmantes, a su vez, desencadenan alertas gubernamentales y mediáticas asociadas con cambios en la tendencia de la visitación turística.

No obstante, es importante reconocer que, para establecer una relación causal, es necesario llevar a cabo estudios que apliquen metodologías más sofisticadas con validación empírica.

Fuente: Vargas-Montoya, 2025b.

Gráfico 3.36

Variación interanual de la llegada de turistas internacionales por vía aérea<sup>a/</sup> y tasa de homicidios (base diciembre de 2023=100<sup>b/</sup>)



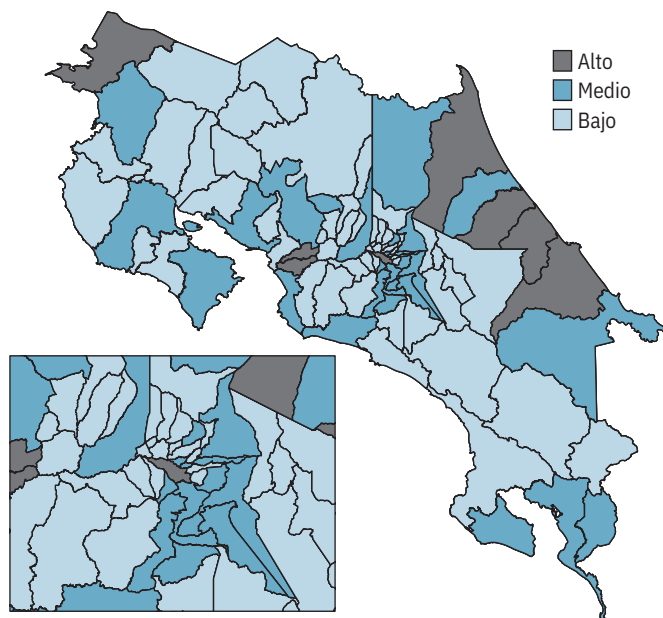
a/ Se mide como la cantidad de visitantes que ingresan por los aeropuertos internacionales Juan Santamaría y Daniel Oduber.

b/ Se marcan tres eventos relevantes con columnas verticales sombreadas. Primero, la emisión de alerta por inseguridad de la embajada estadounidense, en marzo del 2023. Segundo, el asesinato de un turista alemán en Dominical, en diciembre del 2023. Tercero, la publicación de artículos de medios internacionales sobre la violencia en Costa Rica en septiembre del 2024. Fuente: Hidalgo, 2025 con base en Vargas-Montoya, 2025a y datos del ICT, OIJ e INEC.

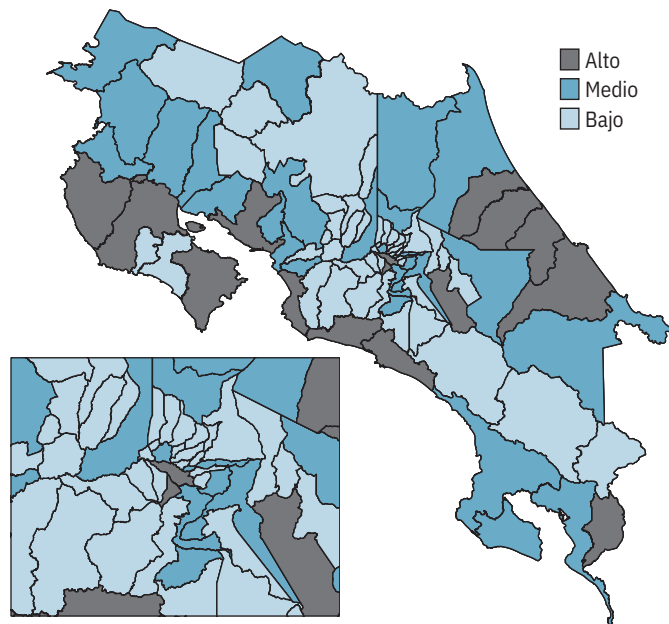
## Mapas 3.1

### Tasas de homicidio por cantón<sup>a/</sup> (por 100.000 habitantes)

a) Promedio 2017-2018



b) Promedio 2023-2024



a/ Un nivel alto corresponde a una tasa de 20 o más, medio se ubica entre 10 y menos de 20 y bajo a tasas menores de 10.  
Fuente: Vargas-Montoya, 2025a, con datos del OIJ e INEC.

casos con un incremento del 480% (como Parrita), alcanzando una tasa promedio de 90 en el bienio 2023-2024.

La transición más preocupante es la de Paraíso, Santa Cruz y Quepos, que pasaron de tasas de homicidios por debajo de 10 a superiores a 20. Por ejemplo, Quepos pasó de registrar una tasa de 6 en el bienio 2017-2018 a 49 en el 2023-2024. En conjunto, estos resultados muestran que los cantones costeros concentran las mayores tasas de homicidios y los del litoral pacífico enfrentan la mayor escalada en el período estudiado.

Del presente análisis se desprende que una proporción significativa de la economía del país está expuesta a elevados niveles de violencia. Durante el bienio 2023-2024, los 16 cantones clasificados con niveles altos concentran aproximadamente el 26% del PIB nacional. Mientras que los 38 cantones que presentan niveles altos y medios (ambas tasas epidémicas) representan el 62% de la producción.

### Nivel de violencia homicida se asocia con menor actividad industrial y mayor actividad comercial

Para analizar la relación entre la criminalidad y el desempeño económico territorial, se realizó un análisis econométrico con datos mensuales de cada cantón en los últimos nueve años. La actividad económica se aproxima mediante el consumo eléctrico industrial y comercial, que es una práctica común en la literatura. Mientras que la criminalidad se mide con la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, según las mediciones internacionales. Como medidas alternativas, también se consideran los delitos contra la propiedad y contra las personas (no letales).

Para elaborar esta estimación, se toma como antecedente el análisis de Poveda y Martínez (2023), quienes exploraron si existe una relación causal, duradera y sostenida entre la violencia y el desarrollo

económico de México (recuadro 3.3). Con los datos de Costa Rica, fue posible llevar a cabo una regresión similar, que toma en cuenta las características propias de cada cantón y controla lo que pasa cada mes, así como el efecto dinámico del mes anterior y el siguiente (Vargas-Montoya, 2025a).

El gráfico 3.37 presenta los resultados de la estimación de la relación entre la actividad económica industrial y la criminalidad. Como se observa, la actividad económica cantonal se asocia negativamente con la tasa de homicidios y la de delitos contra las personas. Se destaca que la relación inversa entre la criminalidad y la actividad económica de las industrias es más fuerte y significativa cuando se trata de homicidios, lo cual es consistente con lo señalado por la evidencia empírica y la opinión de personas expertas.

Como ha sido argumentado, los homicidios representan el crimen que genera

## Diagrama 3.2

## Matrices de transición de las tasas de homicidios en cantones costarricenses del período 2017-2018 al 2023-2024

		2023-2024		
		Bajo	Medio	Alto
2017-2018	Alto	San Mateo	Orotina, La Cruz, Pococí	San José, Limón, Siquirres, Matina
	Medio	Aserri, Vázquez de Coronado, Tibás, Zarcerro, El Guarco, San Isidro	Desamparados, Goicoechea, León Cortés Castro, Alajuela, San Ramón, Cartago, La Unión, Sarapiquí, Liberia, Golfito, Talamanca	Alajuelita, Nicoya, Puntarenas, Parrita, Corredores, Garabito, Guácimo
	Bajo	Escazú, Puriscal, Tarrazú, Mora, Santa Ana, Acosta, Moravia, Montes de Oca, Turrubares, Dota, Curridabat, Pérez Zeledón, Grecia, Atenas, Naranjo, Palmares, Poás, San Carlos, Sarchí, Upala, Guatuso, Jiménez, Alvarado, Oreamuno, Barva, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, Belén, Flores, San Pablo, Tilarán, Nandayure, Hojancha, Buenos Aires, Coto Brus	Los Chiles, Turrialba, Heredia, Bagaces, Carrillo, Cañas, Abangares, Esparza, Montes de Oro, Osa	Paraíso, Santa Cruz, Quepos

Fuente: Vargas-Montoya, 2025a, con datos del OIJ e INEC.

## Recuadro 3.3

## Metodología para estimar el efecto de la criminalidad sobre la actividad económica cantonal

El estudio combina un análisis descriptivo y econométrico para aproximar el costo indirecto del crimen en la economía costarricense entre 2017 y 2024, a partir de datos cantonales con frecuencia mensual.

La actividad económica se aproxima mediante el consumo eléctrico industrial y comercial (kWh) reportado por ARESEP, mientras que la criminalidad se mide a partir de registros del OIJ, utilizando tres indicadores: homicidios, delitos contra la propiedad y delitos contra las personas. Las cifras se expresan en términos per cápita con datos poblacionales del INEC, generando un panel de 84 cantones y 7.776 observaciones.

El análisis descriptivo compara promedios anuales de dos periodos (2017–2018 y 2023–2024) para observar la evolución de la criminalidad y la actividad económica

antes y después del aumento reciente en los hechos violentos. Las variables se clasifican en niveles bajo, medio y alto, según umbrales de referencia —como el criterio de la OMS para homicidios (más de 10 por cada 100.000 habitantes).

El análisis econométrico sigue la metodología de Poveda y Martínez (2023), aplicada ahora a Costa Rica. Se realizan tres pasos principales:

- Pruebas de raíz unitaria para verificar la estabilidad de las series en el tiempo.
- Pruebas de cointegración para confirmar una relación de largo plazo entre criminalidad y consumo eléctrico.
- Estimación de un modelo DOLS (Mínimos Cuadrados Ordinarios Dinámicos), que permite medir el efecto de largo plazo de la criminalidad sobre la actividad económica.

El modelo controla diferencias estructurales entre cantones y variaciones mensuales, e incorpora efectos dinámicos del mes anterior y el siguiente. En total se estimaron seis ecuaciones: tres tipos de crimen y dos tipos de consumo eléctrico (industrial y comercial).

Los resultados permiten identificar cómo los aumentos en los distintos tipos de criminalidad se relacionan con cambios en la actividad económica local, ofreciendo una aproximación del impacto económico del crimen en Costa Rica.

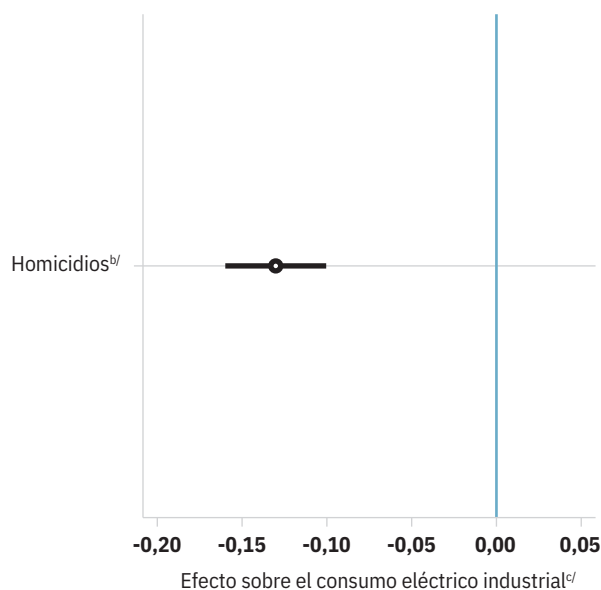
Para más detalles metodológicos, véase la ponencia completa de Vargas-Montoya (2025a).

Fuente: Vargas-Montoya, 2025a.

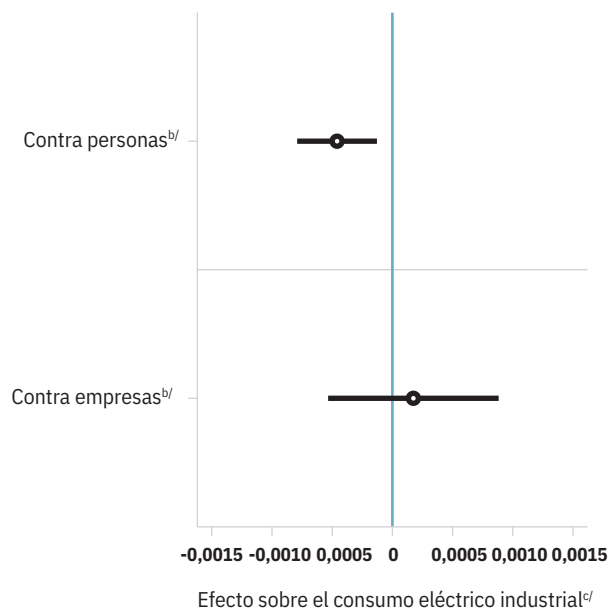
Gráfico 3.37

### Efecto estimado de indicadores<sup>a/</sup> de criminalidad sobre la actividad económica industrial en los cantones

#### a) Homicidios



#### b) Otros delitos



a/ Los resultados provienen de una regresión econométrica que relaciona la actividad económica con el crimen. La estimación controla por cantón, mes, y el efecto de dos meses antes y después. Los coeficientes se muestran como círculos: un efecto negativo (positivo) aparece a la izquierda (derecha) de la línea del cero. Los intervalos de confianza del 95% rodean los círculos y reflejan el rango posible del efecto. Si el cero está dentro del intervalo, el efecto no es estadísticamente significativo.

b/ Se estima como la tasa de ese delito por cada cien mil habitantes.

c/ Medido como el consumo eléctrico industrial en kilovatios por hora.

Fuente: Hidalgo, 2025, con base en Vargas-Montoya, 2025a, con datos del OIJ, Aresep e INEC.

mayores costos en la sociedad; por ende, es de esperar que su efecto de contención en la actividad económica también sea mayor. La literatura refiere un mecanismo posible para explicar esta relación: la criminalidad, especialmente los crímenes violentos, desincentiva la inversión en empresas con mayores necesidades de capital inicial y cuyos plazos para recuperar la inversión son más extensos.

De acuerdo con Vargas-Montoya (2025a), los elevados niveles de criminalidad pueden afectar de forma negativa el desempeño económico de los cantones. Este efecto es especialmente notable en las zonas costeras, donde se registraron las mayores tasas de homicidios en el período 2023-2024, y en el litoral pacífico, territorio que ha experimentado un aumento significativo de la criminalidad en los últimos años.

Como se ha documentado en ediciones previas del *Informe*, las regiones donde se ubican estos cantones costeros son las que presentan condiciones más desfavorables en el mercado laboral y mayor incidencia de pobreza, un terreno fértil para la entrada del crimen organizado. Esto plantea la presencia de un potencial círculo vicioso: la criminalidad se instaura en territorios con menores oportunidades para la población, lo cual inhibe la actividad económica y deja en una condición aún más desfavorable a los territorios, reforzando su posición como un blanco para el crimen organizado y así sucesivamente.

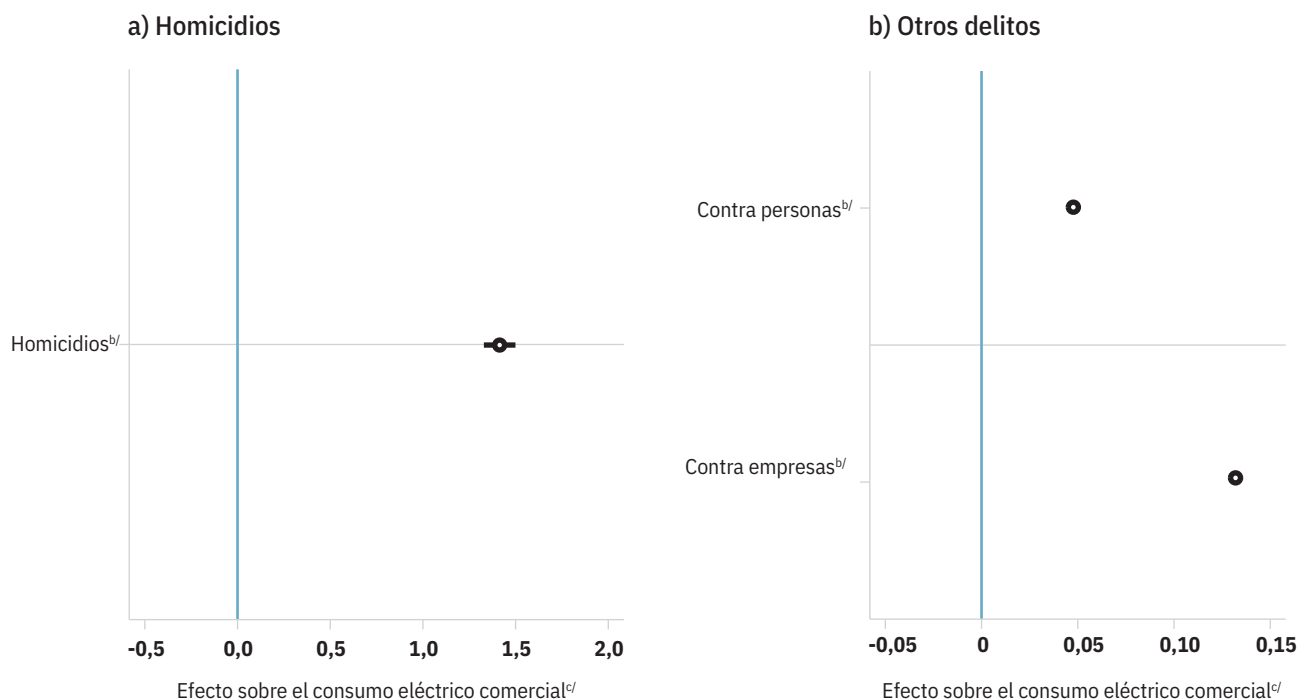
Cuando se replica el ejercicio para la criminalidad y la actividad comercial, se muestra un panorama distinto. En este caso, los homicidios y los delitos contra la propiedad y las personas se relacionan

positivamente con la actividad de los comercios. En especial, la magnitud más fuerte se sostiene para los homicidios (gráfico 3.38).

A pesar de que este resultado podría resultar contraintuitivo, la revisión de literatura, entrevistas a especialistas y hechos estilizados del funcionamiento del crimen organizado aportan evidencia a su explicación. El argumento es que las rentas obtenidas por las personas pobladoras de los territorios a través de las actividades delictivas podrían estar siendo invertidas en el desarrollo de comercios locales. A su vez, se ha demostrado que el crimen organizado requiere de comercios “pequeños”, informales y con bajo nivel de inversión inicial para que posibiliten su operación (Mallon y Fainshmidt, 2022). No obstante, con el fin de comprender la relación positiva entre la

Gráfico 3.38

### Efecto estimado de indicadores<sup>a/</sup> de criminalidad sobre la actividad económica comercial en los cantones



a/ Los resultados provienen de una regresión econométrica que relaciona la actividad económica con el crimen. La estimación controla por cantón, mes, y el efecto de dos meses antes y después. Los coeficientes se muestran como círculos: un efecto negativo (positivo) aparece a la izquierda (derecha) de la línea del cero. Los intervalos de confianza del 95% rodean los círculos y reflejan el rango posible del efecto. Si el cero está dentro del intervalo, el efecto no es estadísticamente significativo.

b/ Se estima como la tasa de ese delito por cada cien mil habitantes.

c/ Medido como el consumo eléctrico industrial en kilovatios por hora.

Fuente: Hidalgo, 2025, con base en Vargas-Montoya, 2025a, con datos del OIJ, Aresep e INEC.

criminalidad y la actividad comercial, es necesario realizar estudios complementarios para profundizar y evaluar los posibles mecanismos de transmisión.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE

**COSTOS DE LA CRIMINALIDAD**  
véase Vargas Montoya, 2025, en  
[www.estadonacion.or.cr](http://www.estadonacion.or.cr)

#### Persistencia de pérdidas y daños por eventos climáticos profundizan rezagos sectoriales y territoriales

En ediciones anteriores del *Informe* se ha expuesto que los eventos climáticos extremos acarrearán daños y pérdidas económicas, sobre todo en territo-

rios con menor desarrollo humano y sectores económicos menos dinámicos, lo cual profundiza los rezagos territoriales y sectoriales. En este *Informe*, Córdoba y Carrera (2025) realizaron un análisis de la relación entre los eventos climáticos extremos recientes y la dinámica de la economía costarricense, desde una perspectiva cualitativa, territorial y sectorial. El trabajo tuvo como premisa que los efectos adversos no se distribuyen de forma homogénea, lo que implicó considerar las características espaciales y socioeconómicas de cada cantón, al combinar fuentes de datos como el INEC, Banco Central de Costa Rica, DesInventar, Naciones Unidas, entre otras. Esta aproximación permitió identificar con mayor precisión los riesgos económicos derivados del clima a nivel cantonal.

#### Corredor Norte-Caribe-Sur es el más afectado por los desastres climáticos

En las últimas décadas, la variabilidad climática en Centroamérica se ha intensificado, lo cual provoca cambios frecuentes e intensos en temperatura y lluvias (Castellanos et al., 2022). En Costa Rica, el Instituto Meteorológico Nacional prevé temperaturas promedio anuales superiores a 30°C en las regiones costeras y la zona norte en el período 2021-2039. A mediano plazo (2040-2069) y a largo plazo (2070-2099), todo el territorio nacional experimentaría incrementos en la temperatura promedio anual. Con respecto a la precipitación, se espera que a corto plazo aumenten los volúmenes en el Pacífico Norte, Zona Norte, península de Osa, Cahuita y Sixaola; mientras que disminuya en el

Valle Central, las cordilleras Central y Talamanca. En el largo plazo, se anticipa un incremento de lluvias en la península de Nicoya, Zona Norte y zonas bajas del Caribe (Limón, Talamanca, Siquirres y Matina), Pacífico Central y Pacífico Sur (IMN, 2021).

Córdoba y Carrera (2025), a partir de los insumos sobre eventos climáticos extremos en Costa Rica, analizaron la cantidad de eventos hidrometeorológicos<sup>8</sup> a nivel cantonal entre el 2012 y el 2022 con el objetivo de medir el grado de exposición territorial (mapa 3.2). Como principal hallazgo, se observa que los cantones de la Zona Norte, el Caribe y el Sur del país son los más expuestos a eventos de este tipo en los últimos años.

Adicionalmente, con base en la revisión de literatura empírica, las autoras argumentan que la vulnerabilidad social amplifica esta exposición y la convierte en sensibilidad. Las zonas rurales, costeras y fronterizas, donde se concentran las mayores proyecciones de cambio pluviométrico (aguas de precipitación por lluvias), presentan la mayor fragilidad socioeconómica. Esto se refleja en pocas oportunidades educativas y laborales, acceso limitado a servicios y dependencia de actividades sensibles al clima. Por el contrario, algunos cantones centrales, pese a tener mejores indicadores macroeconómicos, enfrentan mayor concentración poblacional y vial, riesgo hídrico y mayor porcentaje de asentamientos

informales (Nawrotzki et al., 2023; Quesada-Román, 2022).

Para complementar la información, se analizaron los daños económicos ocasionados por pérdidas y reposición de insumos debido a eventos hidrometeorológicos extremos en los cantones, con base en los datos del Mideplan (mapa 3.3). A partir de los resultados, se evidencia que los cantones del corredor Norte-Caribe-Sur del país, además de ser de los más expuestos a eventos hidrometeorológicos, son los más afectados en términos de los daños y pérdidas ocasionadas por estos eventos hidrometeorológicos extremos.

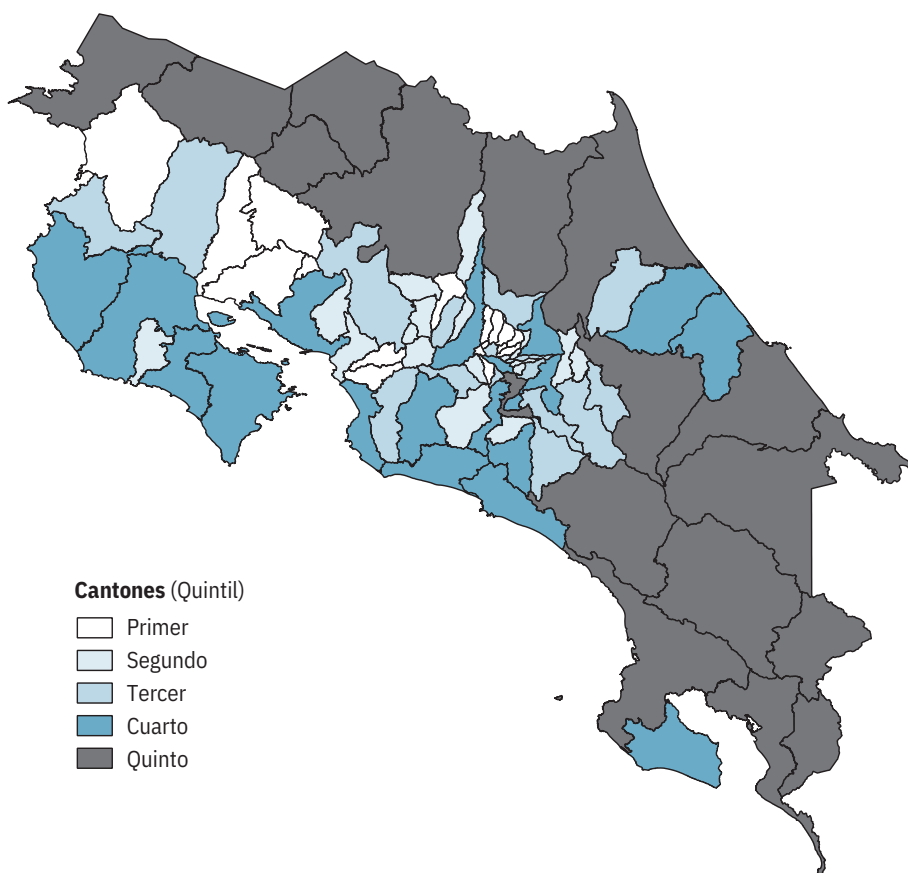
### Sectores agrícola y turismo más expuestos y vulnerables a eventos climáticos extremos

El sector agrícola y el turismo siguen siendo claves en la economía costarricense. A pesar de que su participación en el valor agregado de la economía ha disminuido en los últimos años hasta alcanzar el 7,6%, aportan el 19,5% del empleo nacional (Córdoba y Carrera, 2025). En particular, estas actividades económicas, con una alta concentración territorial, son el principal sustento de varios cantones del país, sobre todo los costeros y fronterizos. A pesar de su importancia en la producción nacional, como se muestra en la primera sección del capítulo, presentan rezagos productivos que podrían profundizarse por su vulnerabilidad a eventos climáticos extremos y a otros problemas nacionales como la inseguridad y el rezago en infraestructura.

En cuanto al sector agrícola, este es uno de los más vulnerables al cambio climático (Minae, 2022). En esa misma línea, la Sugese (2025) indica que los cambios proyectados en temperatura y precipitación podrían afectar los rendimientos y la localización óptima de cultivos clave como café, banano, papa y frijol. La distribución territorial y climática de los cultivos condiciona su exposición a fenómenos extremos. Por ejemplo, la palma africana, presente principalmente en Osa y en otras zonas del Pacífico Central y Sur, enfrenta frecuentes lluvias intensas, inundaciones, sequías prolongadas y efectos de los fenómenos de El Niño y La Niña. Estas condiciones afec-

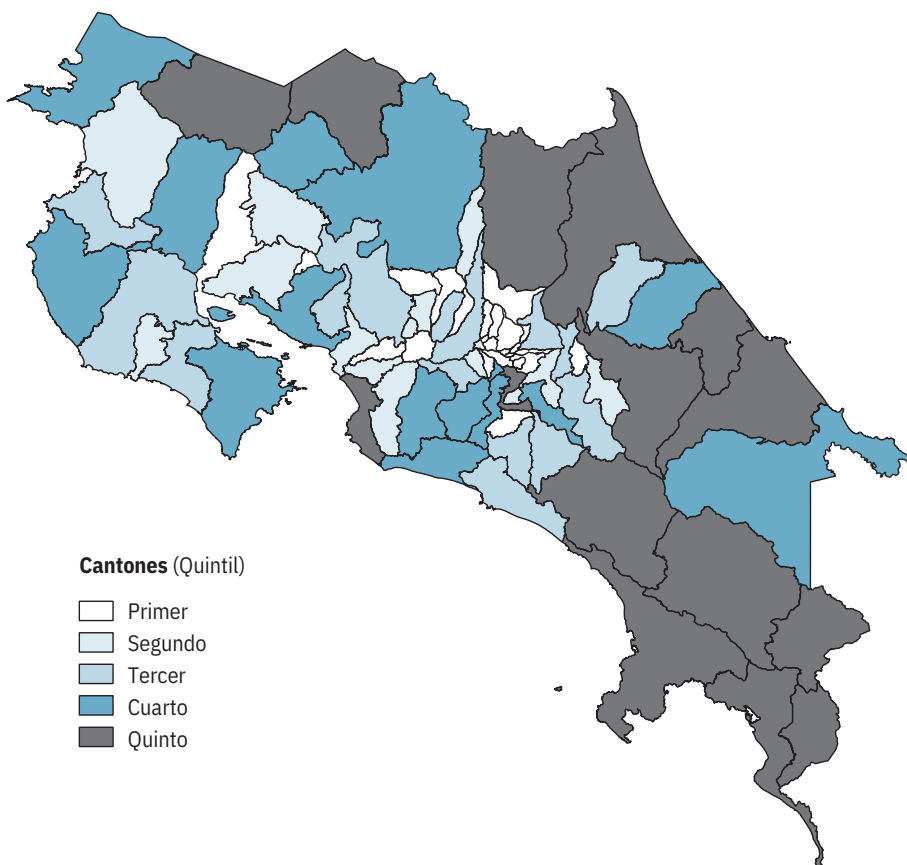
Mapa 3.2

### Frecuencia en quintiles<sup>a/</sup> de los desastres por eventos hidrometeorológicos. 2012-2022



a/ En el mapa los cantones están divididos por quintiles (grupos de 20% cada uno), ordenados según la frecuencia de eventos hidrometeorológicos. En el primer quintil se encuentran los cantones con menor frecuencia de eventos hidrometeorológicos; en el último, los cantones con mayor frecuencia. Fuente: Córdoba y Carrera, 2025, con datos de DesInventar.

## Mapa 3.3

**Costa Rica. Nivel de pérdidas y reposiciones en quintiles de los desastres por eventos hidrometeorológicos. 2012-2022**

Fuente: Córdoba y Carrera, 2025, con datos de Mideplan.

tan la productividad del cultivo mediante anegamiento de los suelos, estrés hídrico, desarrollo de enfermedades y pérdida de calidad en los frutos (Vignola et al., 2017).

Por su parte, la piña, principal producto agrícola de exportación, se cultiva mayoritariamente en el corredor Norte-Caribe-Sur del país, territorio con los patrones de afectación climática más intensos. En los cantones productores de la Zona Sur, este cultivo enfrenta lluvias irregulares, sequías prolongadas y efectos de El Niño y La Niña. En los del Caribe, las amenazas son principalmente inundaciones y lluvias extremas; mientras que en la Zona Norte predominan lluvias intensas, tormentas tropicales y temperaturas extremas. Todos estos eventos provocan pérdida de nutrientes, estrés

hídrico, floraciones irregulares, pudrición de raíces y afectación de la calidad de los frutos (Vargas Céspedes et al., 2018).

A las exposiciones climáticas se suman las limitaciones estructurales que agravan la vulnerabilidad del sector agrícola. De acuerdo con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (Minae, 2022), entre los principales factores de vulnerabilidad destacan los bajos niveles de escolaridad en la población rural, la alta informalidad laboral, la pobreza persistente, la dependencia de monocultivos, la limitada integración a cadenas de valor y el acceso restringido a servicios climáticos y financiamiento. Estas condiciones, sumadas a ciertos impactos como la alteración en la disponibilidad de agua, cambios en la

distribución de plagas y daños a activos productivos, han reducido la productividad agropecuaria y generado pérdida de competitividad, inseguridad alimentaria y mayor pobreza en las zonas rurales (Minae, 2022).

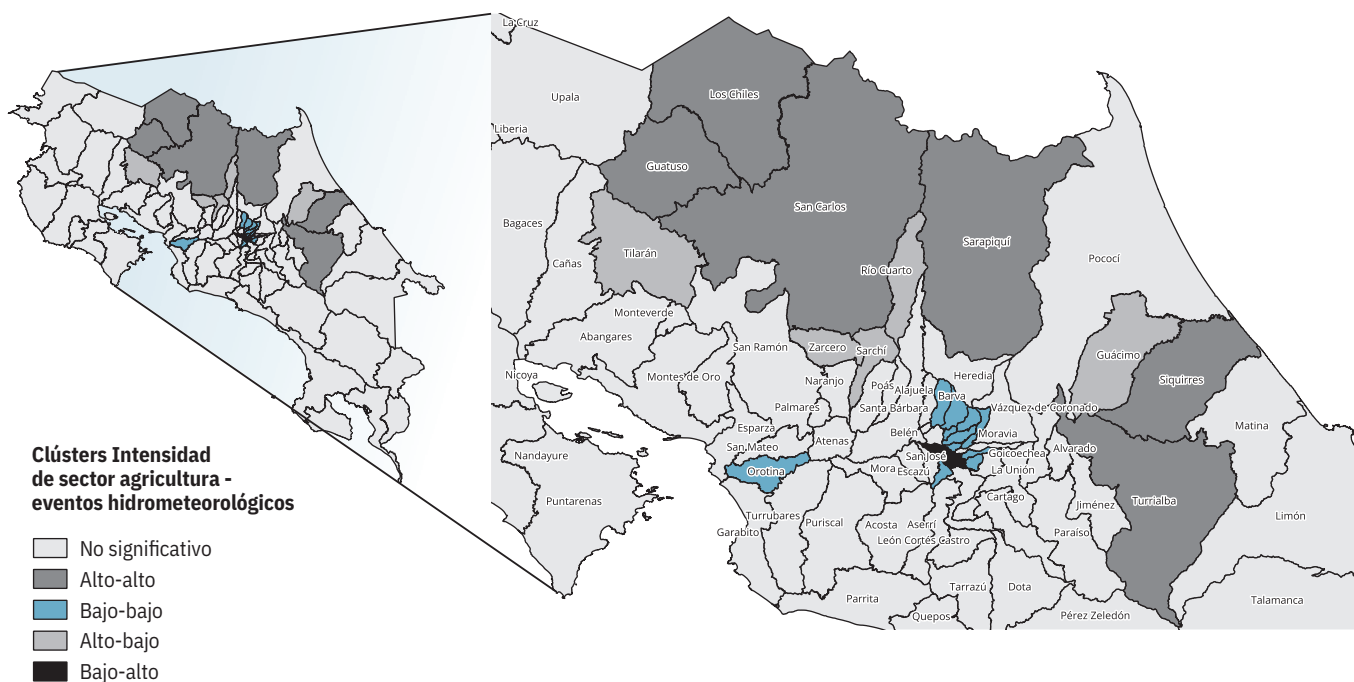
Córdoba y Carrera (2025) realizan dos análisis alternativos para evaluar la vulnerabilidad y exposición climática de los sectores económicos a nivel territorial. La exposición se mide mediante un método de correlación espacial entre la concentración cantonal en actividades económicas y eventos hidrometeorológicos extremos. En el estudio se aplica el índice de Moran local bivariado, el cual permite identificar patrones de asociación espacial entre dos variables distintas en cada unidad geográfica (Anselin, 1995), en este caso los cantones. La vulnerabilidad se mide con base en el IPCC (2001), definido como la susceptibilidad de un sistema a experimentar efectos adversos ante una amenaza meteorológica. Desde esta perspectiva, la vulnerabilidad consiste en la interrelación de tres dimensiones: 1) exposición, 2) sensibilidad y 3) capacidad adaptativa; para efectos de este estudio, la capacidad de respuesta.

El análisis de exposición mediante correlación espacial arroja que los cantones de San Carlos, Guatuso, Los Chiles, Turrialba, Sarapiquí y Siquirres presentan una fuerte participación agrícola y están sometidos a una elevada recurrencia de eventos hidrometeorológicos (mapa 3.4). Por su parte, Los Chiles, Matina, Buenos Aires y Sarapiquí registran una mayor vulnerabilidad climática en el sector agrícola; es decir, presentan una condición más desfavorable cuando se analiza de manera conjunta la exposición, la sensibilidad y la vulnerabilidad.

En cuanto al turismo, su éxito descansa en la riqueza natural del país. El ecoturismo, el turismo de aventura, de sol y playa dependen del clima, de la biodiversidad y de la conservación de áreas protegidas, lo cual explica la alta vulnerabilidad del sector ante los eventos climáticos extremos. Por un lado, las sequías, las inundaciones y el ascenso del nivel del mar modifican la línea costera y afectan las infraestructuras y los atractivos naturales (ICT, 2022). Por otro, las lluvias

Mapa 3.4

**Relación entre la intensidad del sector agricultura en el valor agregado cantonal y la cantidad de desastres por eventos hidrometeorológicos**



Nota: La relación se estima mediante el índice de Moran que mide la correlación espacial entre la concentración cantonal en actividades económicas y eventos hidrometeorológicos extremos.  
 Fuente: Córdoba y Carrera, 2025, con datos de DesInventar.

intensas, el calor extremo o la degradación de los destinos turísticos generan cancelaciones, dificultades en el transporte y pérdida de competitividad, afectando así los medios de vida de las comunidades locales (Minae, 2022). Estas condiciones ponen en riesgo los flujos turísticos y, con ello, la contribución del turismo a la reducción de la pobreza y al desarrollo económico en territorios particularmente vulnerables (ICT, 2022).

El análisis de vulnerabilidad que realizan Córdoba y Carrera (2025) sugiere una alta concentración de la actividad turística y eventos hidrometeorológicos en Dota, Osa y Golfito en el sur del país y Talamanca en el caribe, zonas

tradicionalmente turísticas con alta exposición a tormentas, lluvias extremas e inundaciones (mapa 3.5). Además, el análisis de vulnerabilidad evidencia que La Cruz, Talamanca, Nandayure, Osa y Quepos son los cantones del sector turismo y restaurantes que serían más vulnerables a la variabilidad climática. Estos combinan una alta sensibilidad y baja capacidad para responder a los eventos climáticos extremos, además de una exposición moderada o alta a eventos hidrometeorológicos. Lo anterior confirma que, el turismo se concentra en territorios con altos niveles de amenaza climática, lo cual constituye una vulnerabilidad estructural (Rendón et al., 2023).

Una lectura crítica de este patrón refuerza la idea de que la infraestructura turística en zonas costeras, muchas veces precaria o informal, enfrenta riesgos sistemáticos, los cuales pueden tener impactos multiplicadores en empleo, divisas y encadenamientos productivos (Brown, 2025).

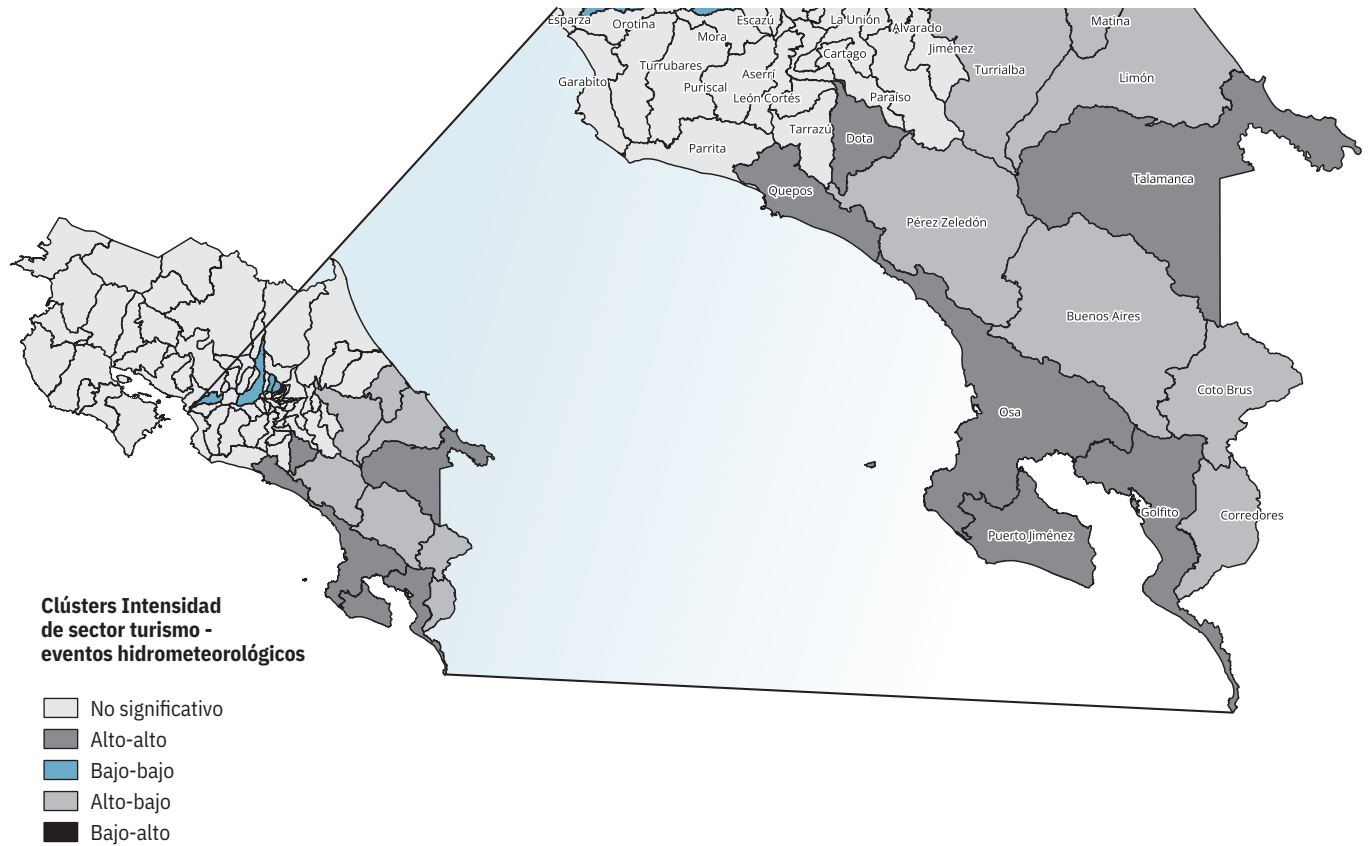
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE

**CAMBIO CLIMÁTICO Y SECTORES ECONÓMICOS**

véase Córdoba y Carrera, 2025, en [www.estadonacion.or.cr](http://www.estadonacion.or.cr)

Mapa 3.5

**Índice de Moran. Intensidad del sector turismo en el valor agregado cantonal versus cantidad de desastres por eventos hidrometeorológicos**



Fuente: Córdoba y Carrera, 2025, con datos de DesInventar.

**Investigadores principales:**

Luis Vargas Montoya, Melanie Jiménez Montero, Ashly Arce Quedo, Gabriel Madrigal Quesada, Kenneth González Tenorio, Daniela Córdoba Solano, Felipe Carrera Cerdas, Karla Meneses Buchelli (Universidad de Las Américas, Quito, Ecuador), Rafael Antonio Segura Carmona, Gabriela Córdova Montero (decana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Las Américas, Quito, Ecuador), Mauricio Monge Arias y María José Sauma Chacón.

**Insumos:**

*Desafíos de la administración Trump para Costa Rica: incidencia en el sector externo*, de Melanie Jiménez Montero y Ashly Arce Quedo; *Las brechas en la infraestructura de transportes como obstáculo al crecimiento económico*, de Gabriel Madrigal Quesada y Kenneth González Tenorio; *Potencial incidencia asimétrica del cambio climático en los sectores económicos*, de Daniela Córdoba Solano y Felipe Carrera Cerdas; *Una aproximación a la medición del costo socioeconómico del crimen en Costa Rica*, Luis Vargas Montoya; *Seguimiento del crecimiento económico durante el 2024 y primeros meses del 2025*, de Karla Meneses (docente-investigadora, Universidad de Las Américas, Quito, Ecuador) y Gabriela Córdova Montero (decana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Las Américas, Quito, Ecuador); *Exoneraciones fiscales aprobadas por la Asamblea Legislativa*, de José Mario Achoy Sánchez; *Análisis del mercado laboral durante el 2024 y primeros meses del 2025*, de Karla Meneses Buchelli y Rafael Antonio Segura Carmona; *Sector monetario y el rol de la política monetaria*, de Mauricio Monge y María José Sauma Chacón; *Evolución de la situación fiscal en Costa Rica*, de Mauricio Monge Arias y María José Sauma Chacón.

**Coordinación:**

Luis Vargas Montoya.

**Borrador del capítulo:**

Luis Vargas Montoya.

**Edición técnica:**

Jorge Vargas Cullell y Luis Vargas Montoya.

**Visualización de datos:**

Marco Hidalgo, Jimena Valverde Cordero, Javier Bogantes Retana, María Elena Jiménez Cordero y Luis Vargas Montoya.

**Asistentes de investigación:**

Yared Alemán Saborío, Sofía Altamura Gamboa, Jimena Valverde Cordero y Javier Bogantes Retana.

**Lectores críticos:**

Ana Luisa Elizondo Salas, Pablo Vega, Marco Hidalgo, Karla Salazar, Daniel Ortiz, Róger Madrigal Ballesterero, Susan Rodríguez Calvo y Jorge Vargas Cullell.

**Revisión y corrección de cifras:**

Jimena Valverde Cordero, Javier Bogantes Retana y María Elena Jiménez Cordero.

**Edición y corrección filológica:**

Gabriela Fonseca Argüello.

**Diagramación:** Erick Valdelomar / Insignia | ng

**Un agradecimiento especial** al Centro de Investigación Legislativa de la Asamblea Legislativa, el Departamento de Servicios Parlamentarios, el INEC, el BCCR, el ICE, la CGR, Procomer, Comex, el Ministerio de Hacienda, el Mideplan, el OIJ, la Academia de Centroamérica, LanammeUCR, la Escuela de Estadística de la

UCR, al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR y a la Oficina para la Reducción de Riesgos por Desastres de las Naciones Unidas, por la colaboración con información estadística para la investigación de este capítulo.

**Los talleres de consulta:** se realizaron los días 16, 17 y 22 de julio, 12 de agosto y 19 de setiembre, con la participación de las siguientes personas: Lil Acuña Fernández, Alonso Alfaro, Eduardo Alonso, Sergio Álvarez González, Erick Apuy, Valentina Araya, Ashly Arce, José Luis Arce, Rita María Arce Láscarez, Silvia Arguedas, Pablo Camacho, André Campos, Rolando Castillo Barahona, Christopher Camacho, Mónica Castillo Quesada, Jaime Cerdas, Cecilia Cortés, Rodrigo Cubero, Francisco Delgado, Ana Luisa Elizondo Salas, Andrés Fernández, John Fonseca, Vanessa Gibson, Kenneth González, Miguel Gutiérrez, Rafael Herrera, Hugo Hidalgo, Laurent Hidalgo Salazar, Gloriana Ivankovich, Melanie Jiménez, Allan Lavell, Miguel Loría, Gabriel Macaya, Luis Mesalles, Cornelia Miller Granados, Adriana Monge, Ricardo Monge, Mary Luz Moreno, Rosendo Pujol, Daniel Ortiz, Carolina Palma, Daniel Rodríguez, Marcela Román Forastelli, Ciska Raventós, William Rojas, Karla Salazar, Mariana Segura, Milagro Saborío, Shirley Saborío, Manuel Esteban Sánchez, Pablo Sauma, Julián Trejos, Jorge Valenciano Salazar, Olan Vargas Zeledón, Melissa Vega, Pablo Vega, Hazel Villalobos, Yanira Xirinachs, Sandro Zolezzi y Norberto Zúñiga.

---

## Notas

**1** Por empleo decente se entiende el que se da en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad (OIT, 1999).

**2** La competitividad auténtica se refiere a la presencia de ventajas productivas adquiridas (competitivas y no comparativas), unidas a la incorporación del progreso técnico y el aumento de la productividad (Hernández, 2004).

**3** También debe estar fundamentada en la remoción de los factores estructurales que causan inflación inercial.

**4** Contar con un clima de negocios adecuado, tanto para la empresa local como para la extranjera, es esencial para generar un proceso sostenible de inversión y constituye un círculo virtuoso de ahorro.

**5** Para medir la brecha de producto se mide como  $\frac{PIB_{observado} - PIB_{potencial}}{PIB_{potencial}}$ .

Se utiliza el IMAE desestacionalizado como proxy del PIB observado, y para estimar el PIB potencial se aplica el filtro de Hodrick-Prescott para obtener la tendencia.

**6** Es un modelo económico que sugiere cómo los bancos centrales deberían ajustar las tasas de interés en respuesta a cambios en la inflación y la actividad económica. En esencia, indica que las tasas de interés deben subir cuando la inflación o el crecimiento del PIB superan sus objetivos, y bajar cuando están por debajo. Ver Anexo 2 para un mayor detalle.

**7** Estos recortes se dan en un momento en el que el sector salud enfrenta una de sus mayores crisis en tiempos recientes. Según cifras del Plan Operativo de la CCSS, a marzo del 2025, las listas de espera ascienden a 730.000 atenciones de pacientes; para ponerlo en perspectiva, el 14% de la población costarricense. El 60% de las listas corresponde a pacientes que esperan algún procedimiento.

**8** Los eventos hidrometeorológicos incluyen: aluviones, avenidas torrenciales, deslizamientos, inundaciones, lluvias, marejadas, sedimentaciones, tempestades, tormentas eléctricas, tornados y vendavales.

